**ENTREGABLE 2.**

**1. SITUACIÓN FUTURA DESEADA.**

La situación futura deseada de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2030 se enuncia de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| *“Al 2030 se reducirá la corrupción en la administración pública, lo cual se reflejará a través de las siguientes mediciones: i) la reducción entre un 41% y un 60% de la percepción ciudadana sobre la problemática de corrupción en el país; ii) la reducción a un 12% del porcentaje de pérdida a causa de la corrupción del presupuesto nacional ejecutado; iii) la implementación de la función de integridad en el 100 % de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno; iv) el incremento a 0.7 del Índice de Capacidad Preventiva en entidades del nivel nacional, 0.5 en el nivel de gobierno regional, y a 0.3 en el nivel de gobierno local; v) el incremento a 50 % del porcentaje de sentencias en ejecución; y vi) el incremento entre un 34% y un 67% del porcentaje de personas que tienen un rechazo definido frente a la corrupción[[1]](#footnote-1).”* |

En efecto, la situación futura deseada a la que apunta la PNILCC se orienta en mediciones de las perspectivas que comprende el problema público, las cuales deben concurrir para disminuir la corrupción en la gestión de lo público; así, se tiene la perspectiva ciudadana, que involucra la creencia o percepción de las personas en torno a la corrupción como uno de los principales problemas del país; la perspectiva económica, comprendida por el perjuicio económico al país debido a los recursos perdidos por causa de la corrupción; la perspectiva estatal, que aglutina la capacidad preventiva y sancionadora del Estado; y por último, la perspectiva socio cultural que se refiere a la tolerancia de la sociedad frente a la corrupción.

En coherencia con las ideas antes expuestas, es importante destacar que la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en la función pública requiere ejecutar acciones desde diversas dimensiones y perspectivas, debido a la complejidad y transversalidad del problema, características que imposibilitan, que la implementación de las intervenciones diseñadas para la solución del problema público obtengan resultados al corto plazo.

En línea con el enunciado que precede, se tiene que con la PNILCC al 2030 se ha logrado la disminución de la corrupción en la Administración Pública; lo que se traduce en una eficiente capacidad preventiva y sancionadora de actos de corrupción, que el Estado ha logrado apalancar en servidores públicos íntegros, que comparten valores y principios éticos comunes a los que se apegan y aplican en su trabajo diario.

Se ha optimizado las finanzas públicas del país, debido a su vinculación directa con los avances en la transformación de la cultura organizacional de las entidades públicas, hacia la integridad, como elemento central de un Estado moderno, descentralizado y enfocado en la satisfacción ciudadana.

Se cuenta con fuertes y consolidados mecanismos de articulación y sinergias multisectorial y multinivel, así como de espacios de participación de la ciudadanía en general, en el diseño y formulación de las intervenciones estatales para la disminución de actos de corrupción.

La capacidad preventiva y sancionadora frente a los actos de corrupción está fortalecida y consolidada, y para ello se cuenta con i) la función de integridad implementada en las entidades de la Administración Pública de los 3 niveles de gobierno; ii) un mecanismo articulado e integrado de identificación y gestión de riesgos que fortalece y consolida la integridad pública; iii) con una adecuada delimitación de funciones y competencias en materia de integridad; iv) con un Sistema de Control Interno totalmente implementado en las entidades de la Administración Pública de los 3 niveles de gobierno; v) con Órganos de Control Institucional y la Contraloría General de la República, empoderados y fortalecidos en los temas de integridad y lucha contra la corrupción; vi) con órganos responsables de conducir la investigación y sanción de las faltas administrativas, con total autonomía técnica y funcional, y capacidad operativa; vii) con información en materia de integridad y lucha contra la corrupción, estandarizada e interoperable; viii) con fuertes y consolidados mecanismos para la gestión de denuncias y para la protección del denunciante; ix) con mecanismos de investigación, persecución y sanción de delitos de corrupción, fortalecidos, consolidados y optimizados.

Se ha logrado una rectoría optimizada y consolidada en materia de Integridad y transparencia y acceso a la información pública.

Se disponen de servidores públicos íntegros que comparten valores y principios éticos comunes, a los que se apegan y aplican en su trabajo diario; y para ello se cuenta: i) con mecanismos, herramientas e instrumentos para reforzar los principios éticos, obligaciones y prohibición en la función pública, totalmente implementados; ii) con funcionarios y servidores públicos sensibilizados y capacitados, en los temas relacionados con ética pública, integridad y lucha contra la corrupción; iii) con una carrera pública meritocrática; iv) con una curricula nacional implementada, que comprende el curso de educación cívica y valores éticos en los colegios de primaria y secundaria; v) con funcionarios públicos de alto nivel, comprometidos y con un elevado sentido del liderazgo para garantizar la visión compartida sobre ética pública y gestión de conflicto de intereses, en sus respectivas entidades públicas.

La sociedad en su mayoría es intolerante a los actos de corrupción y los valores ciudadanos están fortalecidos, gracias a la participación conjunta de los medios de comunicación con el Estado en programa de difusión y concientización.

En resumen, al 2030 se ***reduce la ocurrencia de la corrupción en la Administración Pública, incrementando los estándares de integridad de las entidades públicas, el desempeño ético de autoridades, funcionarios y servidores civiles, fortaleciendo la capacidad de investigación y sanción tanto en el ámbito administrativo y como en el ámbito penal; logrando una actuación articulada en los niveles de gobierno nacional, regional y local, y con la participación activa del sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía.***

Ahora bien, para la determinación de la situación futura deseada se consideraron los riesgos y oportunidades de las tendencias y escenarios futuros con mayor probabilidad[[2]](#footnote-2) de afectar la implementación de la PNILCC. Así, la revisión, sistematización y análisis de las tendencias globales y regionales, así como de los escenarios contextuales propuestos por el CEPLAN[[3]](#footnote-3), y otras organizaciones, permite la identificación de riesgos y oportunidades que eventualmente podrían impactar negativa o positivamente, en la implementación de la PNILCC y por ende, en la materialización de la situación futura deseada.

Así, se puede apreciar de los resultados antes mencionados, que para la implementación de la PNILCC se aprovecharon oportunidades identificadas en los diversos contextos y comportamientos futuros, que contribuyeron a su logro, tales como:

* El cambio de conciencia de una sociedad satisfecha y empoderada y que exige transparencia y rendición de cuentas frente al manejo de recursos públicos, lo que va incrementando y consolidando una intolerancia marcada a la desviación de recursos públicos para beneficios particulares o satisfacción de intereses particulares.
* El aumento de las tecnologías disruptivas y la mecanización, es a lo que apunta todo gobierno progresista y reformador, la mirada es hacia la digitalización permita erradicar la interacción analógica (basada en papel) con los ciudadanos; así, al eliminar los papeles de la gestión de lo público, también se puede abordar la corrupción, ya que las nuevas tecnologías permitirán a los que la combaten revelar, prevenir e incluso predecir prácticas corruptas que en el pasado podrían estar ocultas tras un velo de opacidad habilitada para el papel.

En la misma dirección se tomó en cuenta las tendencias y escenarios futuros que podían agudizar el problema público e impedir el logro de la situación futura deseada de la política, mitigando los siguientes riesgos asociados:

* El aumento de las condiciones de vulnerabilidad, asociadas a la pobreza y a la desigualdad de género. Implica un riesgo respecto del logro de la situación futura deseada, por cuanto, por una parte, la corrupción estaría impactando con mayor fuerza en la sociedad, viendo incrementados sus efectos negativos sobre una población muy específica, en este caso las mujeres; y por otro lado, se tiene que a mayor pobreza, mayor es la población que será vulnerable a los actos de corrupción, así como mayor también serán las medidas asistencialistas que deba adoptar el Estado para contrarrestar dicha situación, generando así que se destinen recursos para ello, que bien podrían dirigirse a inversión en capital humano o en mejorar la provisión de servicios públicos.
* El incremento de actos delictivos, a través de la conformación y consolidación de las organizaciones criminales y la trata de personas, así como el incremento de la influencia de las economías ilegales en el sistema político. Estas se han incluido entre aquellas que constituyen un riesgo para el logro de la situación futura deseada, como quiera que la corrupción genera*consecuencias corrosivas para la sociedad y socava la democracia y el Estado de Derecho*, de allí que, a mayor número de actos delictivos, se incrementan las oportunidades para el surgimiento de prácticas delictivas asociadas; como el narcotráfico que genera una situación de *“violencia y corrupción”; al igual que la trata de personas que pone presión sobre el problema de la corrupción, por cuanto los servidores públicos respectivos seguramente se verán sobornados para no intervenir en el mejor de lo casos.* En ese mismo sentido,un serio obstáculo para la concreción de la situación futura deseada, es la influencia de economías ilegales (actividades ilícitas) para penetrar en el sistema político, mediante el financiamiento ilícito de candidatos y sus agrupaciones políticas, actos de corrupción en el sistema de justica, o influencia indebida al más alto nivel (captura del Estado).
* Por último, la tendencia a la firmeza y persistencia de la corrupción, constituye un gran riesgo, ya que se entenderá que las intervenciones ejecutadas no generan los efectos esperados, como quiera que todos los elementos necesarios para la proliferación de prácticas de corrupción siguen conjugándose.

En síntesis, la determinación de la situación futura deseada es el resultado de lo que espera la población respecto de la PNILCC, así como del análisis de las tendencias y escenarios de largo plazo que podrán afectar la implementación de la misma[[4]](#footnote-4) [[5]](#footnote-5) [[6]](#footnote-6). La consideración integral de estos elementos ha permitido revisar y evaluar los posibles escenarios apuesta, a través de la identificación de los riesgos para su mitigación, así como de las oportunidades para su aprovechamiento, lo que contribuirá al desarrollo de la Política Nacional y permitirá alcanzar la situación futura deseada.

En ese sentido puede observarse en el **Anexo 2** la relación de las expectativas de los representantes de los distintos sectores de la sociedad que conforman la CAN.

De igual forma, tanto el análisis de los riesgos y oportunidades, así como de las tendencias y escenarios que podrían impactar la estrategia de implementación de la política, se muestran en los **Anexos 3 y 4**, que incluye las matrices que muestran los resultados del puntaje de dicho análisis.

**3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SELECCIONADAS.**

Esta Política presenta una propuesta integral para resolver el problema público con alternativas de solución que van desde el ámbito de la prevención como el fortalecimiento del marco normativo en materia de integridad para la implementación de función de integridad hasta el fortalecimiento de las instancias encargadas de sancionar la corrupción tanto en el ámbito administrativo como en el penal; pasando por el fortalecimiento de capacidades de funcionarios vinculados con la función de integridad, buscando incidir sobre le funcionario y el servidor público, pues son ellos quienes toman las decisiones y utilizan los mecanismos; y por el liderazgo de los funcionarios de alta dirección de las entidades públicas.

Como corolario de lo anterior, estos importantes esfuerzos se buscan consolidar con la creación de un Sistema Nacional de Integridad. Todo ello guarda una relación directa con las causas que generan la corrupción en la administración pública; ya que esta encuentran mayores espacios para desarrollarse cuando el Estado no implementa estrategias de prevención, no incide sobre el actuar de los funcionarios o servidores públicos, o no los sanciona.

Ahora bien, como quiera que las intervenciones o acciones priorizadas, constituyen las posibles soluciones al problema público, se han identificado las mismas previo relacionamiento y atención de las causas del problema, para mitigarlas o erradicarlas, de allí que se alineara a cada causa directa e indirecta del problema público “Ocurrencia de la corrupción en la Administración Pública”, las alternativas de solución relacionadas con las mismas. Los resultados de dicha tarea se muestran a continuación:

**Figura 1.**

**Relacionamiento de la Causa Directa 1 y sus Causas Indirectas con las Alternativas de solución identificadas.**



Fuente: Elaboración propia

**Figura 2.**

**Relacionamiento de la Causa Directa 2 y sus Causas Indirectas con las Alternativas de solución identificadas.**



Fuente: Elaboración propia

**Figura 3.**

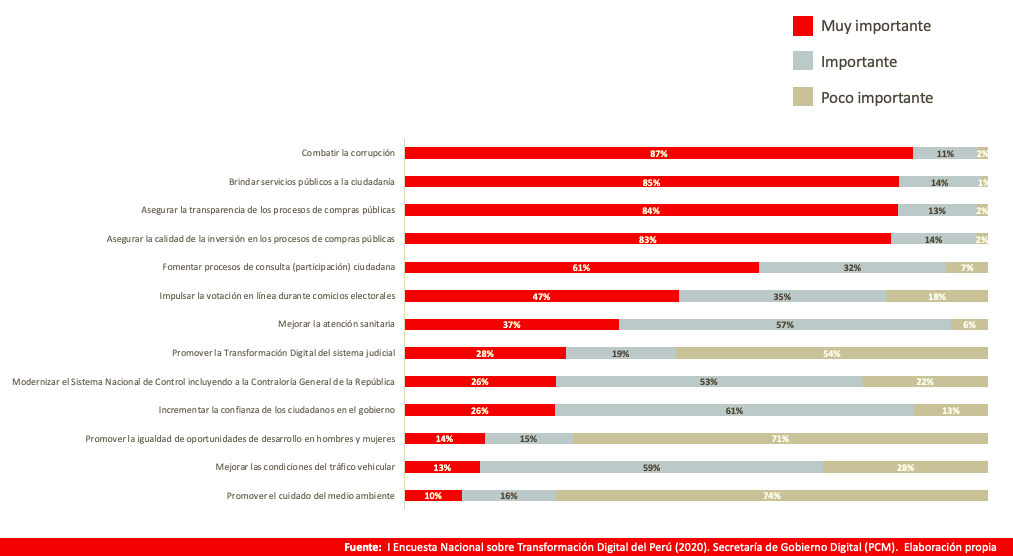
**Relacionamiento de la Causa Directa 3 y sus Causas Indirectas con las Alternativas de solución identificadas.**



Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, tal como se muestra en la Figura 4, se tiene que entre los ciudadanos participantes en la I Encuesta Nacional de Transformación Digital parece haber cierta tendencia a considerar dentro de los desafíos más importantes “la lucha contra la corrupción”, el “brindar servicios públicos digitales a la ciudadanía”, el “asegurar la transparencia y calidad de los procesos de compras públicas”, entre otros. Lo que resulta imperante rescatar de los citados resultados es que entre los desafíos pendientes más importantes para la transformación digital del país, se encuentren entre los 3 primeros, dos retos que están relacionados con la corrupción y la integridad pública.

**Figura 4. Los desafíos más importantes de la transformación digital en el Perú**



**Fuente: Entregable 2 de la Política Nacional de Transformación Digital.**

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado por el CEPLAN[[7]](#footnote-7), las Alternativas de solución son los posibles cursos de acción para la solución del problema público de la PNILCC; en ese sentido, se ha abordado el problema público analizando las acciones que podrían implementarse para atacar las causas del mismo, a fin de reducir y mitigar su persistencia, así como evitar la generación de nuevas circunstancias que agudicen el problema público y finalmente, dar una respuesta oportuna y eficaz ante la ocurrencia de actos de corrupción en la Administración Pública.

En un orden de ideas más específicas, se tiene que se identificaron Alternativas de Solución por cada una de las causas directas e indirectas del problema público, las cuales han sido revisadas y considerad factibles, resultando un total de **25 alternativas**, que pasarán a evaluarse para su validación.

La evaluación de las **25 alternativas** identificadas, consistirá en el análisis de las mismas en base a criterios sugeridos por el CEPLAN en la Guía de Políticas Nacionales, calificados en una escala del 1 al 5, considerándose viables y efectivas aquellas alternativas con puntaje mayor o igual a 15. Los criterios son los siguientes:

* **Viabilidad política (VP):** Se refiere a la aceptación política de la propuesta. Permite verificar la consistencia de la propuesta con las Políticas de Estado y los objetivos del PEDN.
* **Viabilidad social (VS):** Se refiere a la aceptación del público afectado por la política. Esta depende en muchos casos del grado de consistencia de las políticas con sus tradiciones y culturas.
* **Viabilidad administrativa (VA):** hace referencia a la capacidad de gestión y de realizar arreglos institucionales en los ministerios para implementar la alternativa de solución.
* **Efectividad (E):** implica analizar el impacto de la alternativa de solución en el logro del objetivo. Por ello, es importante consultar evidencia sobre intervenciones similares a fin de determinar la efectividad de la alternativa de solución

En línea con lo anterior, en el **Anexo 5** (matriz en formato Excel) se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de las alternativas de solución; sobre las que debe resaltarse que todas han sido seleccionadas por ser complementarias, incluyendo el puntaje alcanzado según los criterios de evaluación supra mencionados e incorporando las evidencias que sustentan cada alternativa de intervención evaluada y seleccionada.

**2.1 Evidencias de las Alternativas de Solución.**

Ahora bien, en base a los criterios establecidos en la Guía de Políticas Nacionales, se han evaluado las alternativas identificadas, sobre la base de la revisión bibliográfica, los resultados de las sesiones de presentación y validación con los actores clave y los aportes de los expertos(as) representantes de las instituciones y organizaciones internacionales.

A continuación, se incluye la descripción y evidencias de las 25 alternativas evaluadas:

**Causa Directa 1:**

**1. Fortalecer el marco normativo en materia de integridad para promover la implementación de mecanismos, herramientas e instrumentos a fin de instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública.**

Por su parte, el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** también ha señalado entre sus principales recomendaciones, i) cultivar una cultura de integridad en el gobierno y permitir una rendición de cuentas efectiva de acuerdo con la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública de 2017, ii) desarrollar un marco de políticas único para promover la integridad del sector público y gestionar situaciones de conflicto de intereses, a fin de lograr una incidencia amplia para el cambio del comportamiento real de los funcionarios públicos, iii) impulsar cambios estructurales más profundos, a fin de establecer un sistema integral que construya una cultura de integridad respaldada por mecanismos apropiados de rendición de cuentas, iv) crear un marco normativo y político único para impulsar la ética pública y la gestión de situaciones de conflicto de interés, y efectivamente incorporar su uso en todo el sector público, v) definir valores comunes a los cuales todos los empleados públicos deben adherirse y establecer las normas concretas de conducta que deben aplicar en su trabajo diario, a fin de establecer para incorporar una cultura de integridad en el sector público, vi) como quiera que los partidos dependen en gran medida de fondos privados, se podría alentar a los donantes privados a compartir la responsabilidad de fortalecer la integridad en el financiamiento de la política, el Perú debería promover una cultura de integridad en el sector público, es decir, entre los destinatarios y usuarios de la financiación, es sólo una parte de la ecuación. También se puede promover una cultura de integridad entre quienes proporcionan la financiación.

Asimismo, en **el “Compromiso de Lima”**, se adoptaron compromisos y acciones concretas respecto de la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”; entre los compromisos asumidos, se encuentra los referidos al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y que consisten en el desarrollo de una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida.

En el mismo orden de ideas la “Asociación Superior de la Federación” (ASF), como agencia anticorrupción de México, analizó y describió las mejores prácticas internacionales de integridad, así como la implementación de controles anticorrupción, para ayudar a las instituciones gubernamentales a formular un programa de integridad para fortalecer la cultura de transparencia, probidad y rendición de cuentas[[8]](#footnote-8).

En esa línea, la **Defensoría del Pueblo**, en el Reporte. La Corrupción en el Perú N° 4: **“Avances y retos en la implementación del Modelo de integridad en el Poder Ejecutivo”** recomienda que se emitan las directivas, lineamientos y demás orientaciones técnicas que sean necesarias para la cabal implementación del modelo de integridad, en función de la estrategia de implementación; de modo que los ministerios dispongan de un marco regulatorio y de herramientas necesarias para facilitar su labor, con particular énfasis en los lineamientos pendientes de emisión sobre los sub componentes del modelo que forman parte de la fase de institucionalización del mismo.

Es importante destacar que la presente alternativa de solución se incluyó dentro de las intervenciones del actual Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2018 - 2021), por cuanto en el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, señaló que entre los objetivos específicos que tuvieron índices de cumplimiento de metas bajos, se encuentra el objetivo específico 1.4. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los (las) servidores(as) civiles y en la ciudadanía, con un índice de cumplimiento del 33 %, de allí que se haya incluido dentro de los retos pendientes, por lo que esta propuesta de acción daría continuidad a lo previsto en la PNILCC actual.

Finalmente, entre las recomendaciones contenidas en el **Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad**, se tiene i) el fortalecimiento de una cultura de integridad entre los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

**2. Fortalecer los mecanismos de control interno, de transparencia y accesos a la información, de rendición de cuentas y otros relacionados con el enfoque integridad.**

De conformidad con lo previsto en el **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** esta Comisión propone como una de las “Medidas para promover la integridad y prevenir y sancionar la corrupción”, el “Instaurar la Máxima Transparencia en el Estado”, a partir de la cual se busca transparentar la forma como las autoridades gestionan lo público y toman decisiones que afectan al colectivo, para ello se apunta a la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que estará a cargo de una Autoridad Autónoma con competencia para sancionar efectivamente los casos de incumplimiento legal, establecer criterios para que las entidades garanticen el principio de máxima divulgación, resolver administrativamente las controversias y capacitar y asesorar a los funcionarios; así como fortalecer el marco normativo aprobando disposiciones legales sobre rendición de cuentas aplicable a los tres poderes del Estado y organismos autónomos, que comprenda tanto la gestión presupuestal como el logro de resultados.

De igual forma, en el **“Compromiso de Lima”** se adoptaron compromisos y acciones concretas respecto del “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática”; entre los asumidos, se encuentran los referidos a la promoción e impulso de integridad y transparencia en el sistema judicial; al desarrollo de una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, a través de la implementación de programas de enseñanza en los diferentes niveles y etapas del sistema educativo; a garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de los servidores públicos; a la promoción de códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad u transparencia, tomando como referencia los “Lineamientos para la Gestión de Políticas de Integridad en las Administraciones Públicas de las Américas”, instando al sector privado a desarrollar códigos de conducta similares, entre otros.

En el mismo orden de ideas y de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú,** se destaca la necesidad de aclarar aún más las funciones y asignar responsabilidades entre los distintos agentes de control interno y con todos los niveles y entidades del gobierno, centrándose en garantizar una función de auditoría interna e independiente, todo ello, con la finalidad de disponer de un sólido sistema de control interno que apoye políticas efectivas de integridad y contribuya activamente en la prevención, detección y respuesta a fraudes y planes de corrupción, lo que finalmente favorecerá un ambiente óptimo para el control interno y de gestión de riesgos, que soporte el compromiso del gobierno peruano con una ambiciosa y prometedora agenda de integridad y lucha contra la corrupción.

**3. Fortalecer la estrategia de comunicación y difusión de información de la SIP y de las oficinas encargadas de ejercer la función de integridad.**

De acuerdo al **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** se ha previsto como propuesta de intervención que “los medios de comunicación del Estado -en coordinación con los medios privados que libremente lo consideren- organizarán y desarrollarán programas y campañas que pongan en valor la importancia de una cultura ciudadana que sustente las prácticas de integridad y la lucha contra la corrupción”. De igual forma y en atención a lo contemplado en el mismo informe se tiene como recomendación “Hacer efectiva la difusión del Código de Ética de la Función Pública, en todas las dependencias del Estado, a nivel nacional, exigible a cada servidor, independientemente de su posición jerárquica”.

En el mismo orden de ideas y de nuevo poniendo a Colombia como ejemplo, la OCDE señala que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos colombianos, con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Este Modelo opera a través de la implementación de varias dimensiones, entre las que resalta la de “Información y Comunicación, que resulta transversal al mismo.

Igualmente, el Modelo de Integridad Pública que se encuentra bajo la rectoría de la Secretaría de Integridad Pública, también contempla como uno de sus componentes a la “Comunicación y Capacitación”, en tal sentido el **Informe de la OCDE sobre “Las Oficinas de Integridad Institucional en el Perú”**[[9]](#footnote-9), sostiene que Además de capacitar, un actor de integridad institucional debe orientar y asesorar a los empleados de la entidad; deben ofrecerles a los servidores públicos un lugar al cual puedan acudir en cualquier momento en caso de dudas o preguntas en materia de integridad. Este rol no aparece de manera explícita en las nueve componentes arriba, pero se puede subsumir en el componente no. 6 como parte de la comunicación y de la capacitación en un sentido más amplio.

Igualmente, se señala en el mencionado Informe que si bien el Perú ha adoptado disposiciones explícitas para proteger a los denunciantes, actualmente no se aplican de manera efectiva y no existe una estrategia para comunicarlas o evaluar sus resultados; dicho señalamiento resulta muy pertinente, ya que ello deja en evidencia la importancia de comunicarlas a fin de difundir su efectividad y sus avances, ya que ello se traducirá en una mayor confianza y adaptación a los modelos de gestión que se propongan.

En el mismo sentido, el Informe de la OCDE antes citado, explica que, respecto de la comunicación, las Oficinas de Integridad Institucional cumplen una función clave en la comunicación tanto interna, a todos los empleados, como externa, a las partes interesadas y los usuarios de los servicios de la institución. Una parte del trabajo de comunicación también implica la difusión sobre los avances en la implementación de las medidas de integridad organizacionales y los resultados de las evaluaciones. Igualmente, las Oficinas de Integridad Institucional pueden sensibilizar a los servidores públicos, y recordarles sus obligaciones. En particular, recordatorios morales oportunos pueden tener un impacto significativo en el comportamiento ético.

**4. Crear un Sistema Nacional de Integridad que fortalezca a las entidades que se vinculan con la materia de integridad y delimite adecuadamente sus funciones, competencias y responsabilidades.**

De conformidad con lo señalado **en el Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, existen metas que no lograron cumplirse y constituyen retos pendientes del Plan Nacional, entre el que destaca la creación del Sistema Nacional de Integridad, lo que también ha sido recomendado por la **OCDE** en su **Estudio sobre Integridad en el Perú**

En acuerdo al **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** se manifiesta la conveniencia de crear el Sistema de Integridad del Poder Ejecutivo cuyo ente rector sea la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y esté conformado por las Oficinas de Integridad Pública en todas las entidades del Poder Ejecutivo, teniendo como principales cometidos: i) promover la ética en la función pública, para lo cual se deberá elaborar y supervisar el cumplimiento de programas de integridad y ética dentro del Poder Ejecutivo; elaborar guías y brindar asesoría para la aplicación de las normas sobre integridad, ética y gestión de intereses; asegurarse de que la información sobre estas materias esté correctamente sistematizada y sea públicamente disponible, ii) diseñar mapas de riesgos de corrupción y proponer herramientas para enfrentarlos en los distintos ámbitos de actuación, iii) generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a fin de desarrollar indicadores que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas, y iv) apoyar la promoción de una cultura de la integridad en la sociedad a través de los organismos del sector público, sector privado, universidades, medios de comunicación y sociedad civil.

Asimismo, el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** señala que para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, así como para mejorar la integridad deben llevarse a cabo tareas complejas que requieren un enfoque multi-nivel y de múltiples actores, de allí que una variedad de instituciones abordan explícita o implícitamente los aspectos necesarios para avanzar en la lucha contra la corrupción; en ese sentido y como en la mayoría de los países, existen varias instituciones públicas en Perú que están directa o indirectamente involucradas en la prevención o detección de la corrupción, o en ambas, de allí que resulte evidente la necesidad de delimitar las funciones y asignar responsabilidades entre los distintos agentes de control interno y con todos los niveles y entidades del gobierno, lo que indefectiblemente fortalecerá las instancias que conforman el sistema anticorrupción.

Por su parte la **Defensoría del Pueblo**, en el Reporte. La Corrupción en el Perú N° 2: **“El sistema anticorrupción peruano: diagnóstico y desafíos”** refiere que “El objetivo de un sistema anticorrupción es promover la participación articulada y coordinada de las instituciones que tienen competencias en materia anticorrupción, con la finalidad de cumplir eficaz y eficientemente con las políticas nacionales de lucha contra la corrupción”, destacando la importancia de que el Perú instituya un sistema nacional de integridad.

De igual forma y de acuerdo al **“Compromiso de Lima”** se adoptaron medidas, tales como la de “Implementar y/o fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública, sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables”. Hacia esa dirección también se adoptó compromisos y acciones concretas respecto del “Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática”; entre los asumidos, se encuentran el referido al “Fortalecimiento de las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio, garantizando a las autoridades las condiciones necesarias para el buen desempeño de sus funciones”.

**5. Fortalecer capacidades en los funcionarios y servidores vinculados directamente con la función de integridad.**

En el **“Compromiso de Lima”** se adoptaron compromisos y acciones concretas respecto de la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”; entre los compromisos asumidos, se encuentra los referidos a la “Elaboración de estadísticas e indicadores que permitan evaluar el impacto de las políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción y, para ello, impulsar el fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia”.

Por su parte,el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** señala que se requieren esfuerzos más ambiciosos de **creación** de capacidades para allanar el camino hacia futuras reformas. Asimismo, continúa señalando que el Perú podría considerar la posibilidad de implementar una capacitación innovadora y específica sobre la ética y sobre cómo enfrentar situaciones de conflicto de intereses, de allí que la socialización profesional permite a los servidores públicos aplicar valores fundamentales en circunstancias concretas, para lo cual se requiere que desarrollen capacidades para ayudarlos a resolver sus dilemas éticos, en ese sentido, debe brindarse capacitaciones sobre materias de ética, que se extienden desde la formación basada en normas, centrada en las obligaciones de los empleados públicos y las sanciones en caso de mala conducta, hasta la formación basada en valores que examina los dilemas éticos en el lugar de trabajo.

Es necesario mencionar lo que explica el citado Estudio de la OCDE, respecto a que, en países como Finlandia, Hungría, Luxemburgo y los Estados Unidos, la capacitación ética se requiere específicamente de todos los nuevos funcionarios públicos. Mientras que, en el Reino Unido, la ética se incluye en la formación inicial para todos los nuevos altos funcionarios. La ética forma parte del concepto de formación de los funcionarios públicos en la República Checa, tanto para la formación previa como para la capacitación durante el servicio.

Finalmente, es pertinente traer a colación la recomendación de la OCDE para Perú, al señalar que el país podría explorar medidas innovadoras que sean viables y aplicables a diversos contextos y grupos objetivo. Específicamente el Perú podría diseñar y llevar a cabo experimentos personalizados con funcionarios públicos y usuarios de servicios públicos como diagnóstico y como una base para las políticas específicas de capacitación en ética pública y manejo de conflictos de intereses.

**6. Implementar canales institucionales, mecanismos virtuales y/o herramientas que promuevan una mayor coordinación y articulación entre las entidades públicas con la SIP.**

En el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** señala que ~~se~~ para garantizar la coherencia y la transferencia de conocimientos entre el nivel nacional y el regional, se podría institucionalizar un mecanismo efectivo de coordinación entre la CAN y las CRA. En línea con lo anterior, la OCDE recomienda institucionalizar un mecanismo efectivo de coordinación entre los niveles central y regional. Según la CAN, la coordinación entre la CAN y las CRA ha sido intermitente en el pasado, y normalmente se limita a llamadas telefónicas e intercambios de correo electrónico. Un flujo continuo de información es clave para asegurar la coherencia de las políticas, aunque las disposiciones actuales parecen depender demasiado de la motivación del personal a nivel regional.

Asimismo, a efectos de institucionalizar la articulación y coordinación entre la Secretaría de Integridad Pública y las entidades, a través de sus oficinas de integridad institucional, **la OCDE**, en el estudio: “Las Oficinas de Integridad Institucional en el Perú: hacia la implementación de un sistema de integridad” **se recomienda especificar y reglamentar de manera más detallada la relación funcional y técnica entre la SIP y las Oficinas de Integridad Institucionales.**

Por su parte, la **Defensoría del Pueblo**, en el Reporte. La Corrupción en el Perú N° 4: **“Avances y retos en la implementación del Modelo de integridad en el Poder Ejecutivo”** le recomida a la Secretaría de Integridad Pública implementar una plataforma virtual para sistematizar, de forma estandarizada, los avances de los ministerios –y en general de toda entidad pública– en la implementación del modelo de integridad. Ello, permitirá que la labor de monitoreo se realice de forma permanente y se emitan de manera oportuna los informes de seguimiento y evaluación de la implementación del modelo.

Así también, en su Reporte La Corrupción en el Perú N° 2: **“El sistema anticorrupción peruano: diagnóstico y desafíos”** la **Defensoría del Pueblo**, advierte que la articulación del sistema (anticorrupción) es débil: i) no todas las instituciones que lo conforman participan directamente en la CAN Anticorrupción; **ii) no existen mecanismos integrados de coordinación ni guías para establecer estrategias concertadas;** iii) pocas instituciones cuentan con oficinas anticorrupción, las cuales, en la práctica, cumplen una labor intrainstitucional y no de articulación.

**7. Implementar mecanismos y herramientas interoperables para la generación y gestión de información en materia de integridad y lucha contra la corrupción.**

En el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** se señala quedurante las entrevistas realizadas en el Perú, varias instituciones manifestaron la falta de información y datos confiables con respecto a la corrupción y la integridad, por lo que se considera que el Perú debeconsiderar la posibilidad de convertir la plataforma de la CAN en un centro deinformación que unificaría y analizaría estadísticas e información proveniente de losmiembros de la CAN, de allí que la OCDE formulara entre sus principales recomendaciones, i) Desarrollar las capacidades de la CAN en la gestión de la información y comunicación mejoraría su impacto y fortalecería su enfoque.

En línea con lo antes expuesto, se tiene que el mismo Estudio de la OCDE ha detallado una experiencia exitosa en Colombia, específicamente lo referido a la creación del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, por parte de la Secretaría de Transparencia de Colombia, que consiste en un portal web que, entre otras tareas de gestión de información y comunicación, aporta importantes indicadores de integridad y anticorrupción.

En el mismo orden de ideas el **“Compromiso de Lima”,** a través del cual se adoptaron compromisos y acciones concretas respecto de la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”; entre los compromisos asumidos, se encuentra los referidos a la Transparencia, acceso al información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y que consisten “Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales”.

**8. Priorizar las intervenciones públicas en áreas, sistemas, procedimientos u otros espacios de mayor riesgo de corrupción.**

En acuerdo al **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** se manifiesta que el riesgo de corrupción atenta contra el desarrollo sostenible del país y afecta a lasempresas, es por ello que la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupciónrequieren del trabajo conjunto del Estado y del sector privado, a través de intervenciones públicas tales como laimplementación de programas de prevención, incentivos y sanciones efectivas.

En el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** se presenta como recomendación i) el diseño de una política específica de gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción, ii) fortalecimiento del marco normativo peruano de control interno y gestión de riesgos.

En efecto, se pueden formular intervenciones públicas que en forma de regulaciones o marco normativo, permita focalizar y priorizar las acciones planteadas para gestionar los espacios e instancias con mayor riesgo de corrupción; en ese sentido la OCDE muestra nuevamente como ejemplo a Colombia, al evidenciar que este país, a través de la Secretaría de Transparencia conjuntamente con el Departamento de la Función Pública, ha formulado un marco normativo metodológico para la gestión del riesgo de corrupción basado en el proceso de gestión de riesgos descrito en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de Colombia, pero destaca la característica inherente de los riesgos de corrupción frente a los riesgos institucionales de las organizaciones públicas. Esto significa que las organizaciones públicas colombianas tienen que desarrollar dos mapas de riesgo diferentes siguiendo pasos y modelos predeterminados y estandarizados.

El valor agregado de tener dos ejercicios separados de gestión de riesgos basados en el mismo modelo metodológico puede tener atributos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede ser visto como oneroso y burocrático, duplicando esfuerzos y desperdiciando valiosos recursos. Por otra parte, se puede argumentar que estos ejercicios aumentan la consciencia de la dirección de alto nivel y el personal sobre la importancia de tener una política anticorrupción sólida con actividades distintas de las principales actividades de control administrativo, financiero y de riesgo.

**Causa Directa 2:**

**9. Implementar mecanismos, herramientas e instrumentos para instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública.**

De conformidad con lo previsto en el **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** esta Comisión propone como una de las medidas referidas a “Fortalecer la Integridad y la Ética en el Sector Público”, la referida al fortalecimiento de una cultura ética en el sector público, difundiendo principios de conducta con valores sociales, y promoviendo la responsabilidad personal, la formación de integridad y la vocación de servicio que deben mantener los trabajadores públicos; así como la efectiva la difusión del Código de Ética de la Función Pública, en todas las dependencias del Estado, a nivel nacional, exigible a cada servidor, independientemente de su posición jerárquica; el desarrollo de programas de capacitación permanente sobre los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética de la Función Pública y en los códigos de conducta aprobados por cada entidad.

De igual forma y dentro de los “Mecanismos de Seguimiento y Promoción de una Cultura de Integridad”, se propone “Apoyar la promoción de una cultura de la integridad en la sociedad a través de los organismos del sector público, sector privado, universidades, medios de comunicación y sociedad civil”.

Por otra parte, y de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú,** se señala que las normas y procedimientos formales, tales como un código de ética, los procesos de Recursos Humanos, disposiciones de rendición de cuentas y la delegación de funciones, están en su mayoría bien documentados. Sin embargo, como ocurre en varios países de la OCDE, parece que en el Perú el verdadero desafío es asegurar que estos procedimientos sean aceptados y bien implementados por todas las partes interesadas dentro de una organización, promoviendo una cultura de integridad.

En ese sentido, la OCDE ilustra en su Estudio el caso de la “Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos: Un marco normativo para la gestión del riesgo de fraude en los programas federales”, en el que señala que uno de los componentes para gestionar los riesgos de fraude es justamente la creación de una cultura organizacional que se traduzca en el compromiso de combatir y luchar contra la comisión de fraudes. Igualmente, México, a través de la ASF, ha elaborado el Estudio Técnico para la promoción de la cultura de integridad en el sector público, a través del cual se analizó y describió las mejores prácticas internacionales de integridad, así como la implementación de controles anticorrupción, para ayudar a las instituciones gubernamentales a formular un programa de integridad para fortalecer la cultura de transparencia, probidad y rendición de cuentas.

Continúa la OCDE en su Estudio, señalando que debe promoverse una cultura de integridad en el sector público, haciendo especial referencia a los destinatarios y usuarios de financiación económica, pero también se puede promover una cultura de integridad entre quienes proporcionan dicha financiación, ya que, de lo contrario, se estaría mirando sólo una parte de la ecuación.

**10. Asegurar canales apropiados de orientación, asesoramiento y consultoría, en temas de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.**

En el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** emitido en el añ0 2016,se destacaque un código de ética y las políticas de conflicto de intereses por sí solas no puedengarantizar el comportamiento ético, al menos pueden ofrecer una guíasobre el comportamiento esperado, esbozando los valores y estándares a los que losfuncionarios públicos deben aspirar; también puedeser parte de una estrategia organizacional más amplia, apoyada por un fuerte compromisode la alta gerencia.

Ahora bien, la alta rotación del personal, la falta de orientación y una actitud débil proveniente de la alta dirección son impedimentos para una cultura organizacional abierta donde se pueda buscar consejo y obtener consultoría para resolver los problemas éticos.

Por lo antes expuesto, es que se debería considerar multiplicar e involucrar a los funcionarios de alto nivel como responsables de los valores y la ética del servicio público, así como gestionar las situaciones de conflicto de intereses dentro de cada organización con el fin de facilitar la implementación y aumentar la conciencia de la ética y valores públicos en práctica; de allí que, muchos países de la OCDE se centran en los altos funcionarios públicos, tanto en términos de desarrollo individual como en términos de normas, procesos y reglas especiales de gestión. **Los directores jerárquicos inmediatos y los administradores o personas dedicadas pueden proporcionar orientación en forma de consultoría y asesoramiento para los funcionarios públicos y así resolver los dilemas éticos en el trabajo y las posibles situaciones de conflicto de intereses, ya sea en persona, por teléfono, por correo electrónico o por medio de comisiones o agencias centrales especializadas.**

Asimismo, en el año 2019 la División de Integridad Pública de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, preparó el Estudio denominado “Las Oficinas de Integridad Institucional (OII) en el Perú. Hacía la implementación de un sistema de integridad” refuerza la idea de que una de las funciones de las OII es que también brindarán orientación y apoyo en lo relacionado con la política de integridad, un modelo que se toma como referencia respecto de dichas funciones es la realizada por la Contraloría General de la Unión de Brasil, los sistemas de integridad requieren personas de contacto para la prevención, que se asegure a través de un procedimiento su institucionalización.

**11. Sensibilizar y capacitar sostenidamente a funcionarios y servidores públicos en los temas relacionados con ética pública, integridad y lucha contra la corrupción.**

Entre otras recomendaciones, el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú,** sostiene que además de desarrollar las capacitaciones específicas de iniciación, el Perú podría ampliar el contenido y alcance de los contenidos de las capacitaciones, como, por ejemplo, capacitar a empleados en posiciones de riesgo, ofrecer cursos de ética especializados y capacitación para los administradores. Así, la OCDE recomienda que los esfuerzos de capacitación deberían consolidarse dentro de SERVIR/ ENAP como la agencia principal, en estrecha coordinación con las oficinas de recursos humanos, la Secretaría de Gestión Pública y la Contraloría General de la República.

Al respecto y en el Estudio antes mencionado, la OCDE ilustra como para Canadá, esta alternativa de intervención también ha sido considerada y aplicada, a través de la Escuela Canadiense de Servicios Públicos, ofreciendo cursos específicos adaptados a los cargos y funciones, incluyendo la orientación del servicio público, la capacitación sobre la gestión del desempeño y la capacitación en la delegación de autoridad.

En el mismo orden de ideas anteriores, se tiene que el **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** propone como una de las medidas referidas a “Fortalecer la Integridad y la Ética en el Sector Público”, la referida a “desarrollar programas de capacitación permanente sobre los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética de la Función Pública y en los códigos de conducta aprobados por cada entidad”; para ello, se sugiere coordinación absoluta entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), y la Secretaría de Integridad Pública.

Por último y con relación a esta alternativa de solución, se tiene que el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, señaló la necesidad de contar con una entidad con competencia técnica normativa encargada de guiar, orientar y capacitar correctamente a los servidores civiles en temas concernientes a la ética pública.

**12. Entrenar a titulares y altos funcionarios de las entidades para ejercer el liderazgo ético en las mismas y para manejar situaciones de crisis que afectan la integridad pública.**

En coherencia con la alternativa de acción del punto precedente, se tiene que también el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** emitido en 2016,sustenta la presente propuesta de solución, ya que recomienda proporcionar orientación sobre ética y conflicto de intereses, elaborando orientaciones específicas para las categorías de funcionarios públicos en situación de riesgo, tales como los altos funcionarios. Estas orientaciones, capacitaciones y/o consultorías (como las llama la OCDE) a los funcionarios de Alto Nivel resultan importantes, ya que se pudo constatar que, en el Perú, el liderazgo político y altos funcionarios públicos no comprenden del todo el vínculo entre un sistema de control interno sólido y el cumplimiento de los objetivos de la entidad y, por lo tanto, la prestación efectiva y eficiente de servicios a los ciudadanos.

En ese sentido, continúa señalando la OCDE en su Estudio que la actitud en los niveles superiores de las organizaciones es un componente crucial en la promoción de la ética, por parte de los ejecutivos más altos de una organización, de allí que, concluye la OCDE, que un buen ambiente de trabajo y un enfoque de apoyo al buen espíritu de equipo sin duda tienen efectos positivos sobre los valores y el compromiso con las expectativas y el logro de los objetivos organizacionales.

Así y aunque la capacitación ética varía mucho de un país a otro, en algunos países como el Reino Unido, la ética se incluye en la formación inicial para todos los nuevos altos funcionarios.

Finalmente, en el año 2020 la OCDE emite el Manual sobre Integridad Pública, en el que se desarrolló todo un capítulo en la cual se deben identificar medidas para atraer, seleccionar y promover el liderazgo íntegro en las organizaciones públicas, haciendo hincapié en la incorporación de la integridad como un valor en los marcos de cualidades de referencia, las descripciones de los puestos de trabajo, los instrumentos de evaluación y los acuerdos de desempeño. **Entre las medidas que se incluyen figuran por ejemplo preguntas para entrevistas personales en las que se pide a los candidatos que reflexionen sobre los modelos éticos que han tenido anteriormente en su lugar de trabajo. Para evaluar el desempeño en materia de integridad, los directores podrían dar ejemplos de cómo demostraron tomar decisiones de manera ética.**

**13. Difundir programas educativos en la televisión, radio y redes sociales que propugne el fortalecimiento de valores en la ciudadanía.**

El **Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción**, ha previsto como una de sus recomendaciones incluida en el punto 3.1 “Política Estatal”, fomentar y promover los valores en la ciudadanía, a través de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

Asimismo, se tiene que el **Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad,** propone dentro de la medida referida a la creación de un “Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo”, que una de las funciones o cometidos del sistema justamente sea la de apoyar la promoción de una cultura de integridad en la sociedad, que use como canal los medios de comunicación social, entre otros.

En la misma línea, el citado Informe Final propone como una de las acciones dentro de “Fortalecer la integridad y la Ética en el Sector Público”, la referida a que los medios de comunicación del Estado -en coordinación con los medios privados que libremente lo consideren- organicen y desarrollen programas y campañas que pongan en valor la importancia de una cultura ciudadana que sustente las prácticas de integridad y la lucha contra la corrupción.

**14. Reformular la política educativa, para establecer la obligatoriedad del curso de educación cívica y valores éticos en los colegios de primaria y secundaria.**

Para esta alternatva de solución, se tiene que su identificación inicial fue el resultado de la priorización realizada a las propuestas concretas formuladas en el Informe del entonces Fiscal de la Nación y Presidente de la CAN[[10]](#footnote-10);dicho Informe constituyó una iniciativa que surgió con la finalidad de replantear la PNILCC y luego de los acontecimientos por actos de corrupción que involucraron a la clase política, empresarial y Altos Funcionarios del país, en los años 2015 y 2016; así, esta iniciativa aglutinó a los miembros de la CAN y tomo como base recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales e instituciones vinculadas al tema.

Así, la presente alternativa de intervención cae dentro del ámbito de la promoción de una cultura de integridad pública que señala la OCDE[[11]](#footnote-11)que abarque al conjunto de la sociedad colaborando con el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas, concretamente, a través de la concientización de la sociedad respecto de los beneficios de la integridad pública y reduciendo la tolerancia a las infracciones de las normas de integridad en el sector público, y desarrollando, cuando proceda, campañas que promuevan la educación cívica en materia de integridad pública, entre las personas y, en particular, en los centros escolares.

En el mismo

orden de ideas y en el marco de la celebración de la Sesión No. 33 de la CAN en el año 2019, se suscribió el “Compromiso por la Educación con Integridad”, que consiste en: promover una cultura de integridad desde la etapa escolar y desarrollar acciones concretas que contribuyan a formar ciudadanos y ciudadanas en valores, conscientes de sus derechos y deberes; dicho compromiso se adoptó en cumplimiento de la PNILCC vigente, que establece la necesidad de fomentar la integridad, a través de la promoción de valores en la sociedad peruana, particularmente desde la educación, de manera que los niños y jóvenes puedan incorporarse a la vida social de forma activa, ética y responsable, anteponiendo el bien común a sus intereses particulares.

Así las cosas y para la implementación del mencionado compromiso, los actores clave más importantes que lo asumieron, se comprometieron a ejecutar las siguientes acciones:

* **Secretaría de Integridad Pública:**
  + Elaborar el material audiovisual dirigido a estudiantes de educación secundaria para promover una educación secundaria para promover una cultura de integridad desde la escuela.
  + Desarrollo de un módulo de sensibilización en valores, principios y deberes de la administración pública, dirigido a estudiante de nivel secundaria y/o universitaria.
  + Participación activa en la campaña de inicio del año escolar 2019.
* **Ministerio de Educación.**
  + Emitir lineamientos de la PNILCC en el sector educación.
  + Brindar asistencia técnica a los especialistas de las DRE y UGEL en el marco de la implementación del CNEB que incluye los componentes de valores y ciudadanía.
  + Promoción del desarrollo de actividades de capacitación de los servidores y funcionarios del sector educación en materia de integridad (curso de ética).
  + Elaboración de recursos educativos que promuevan una cultura de integridad en los estudiantes, entre otros.
* **Poder Judicial:**
  + Implementar la actividad “Justicia en la Escuela”.
  + Realizar acciones para aprobar normas administrativas dirigidas a implementar el Registro Nacional de Procesados (Resolución N° 228-2018-PJ-CE-PJ).
* **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.**
  + Ampliar la línea de acción “Fiscales Escolares” para la prevención de conductas infractores a la ley penal en instituciones educativas.
  + Fortalecer la línea de acción “Jóvenes Líderes” dirigidos a adolescentes entre 13 y 18 años de edad en zonas focalizadas que presentan alto riesgo infractor.
  + Complementar las “Jornadas de acercamiento a la población”, con la participación de las Fiscalías Anticorrupción.
  + Impulsar la línea de acción “Padres Construyendo Hijos de Éxito”, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las relaciones familiares, ampliándolo para implementar una cultura de integridad y lucha anticorrupción desde el ámbito familiar.
* **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.**
  + Capacitaciones en temas de integridad y lucha contra la corrupción a cargo de la Oficina de Integridad dirigidas a estudiantes universitarios que se acojan al programa SECIGRA – DERECHO-
* **Tribunal Constitucional.**
  + Apoyar y difundir en aspectos constitucionales relacionados con los principios y valores constitucionales, los derechos fundamentales, la necesidad de institucionalizar el país y cultivar en los educandos un auténtico sentimiento constitucional.
* **Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.**
  + Actividades de sensibilización para fomentar una política educativa de rescate de valores en los estudiantes, sus padres y sus familias.
* **Asociación de Municipalidades del Perú.**
  + Realizar Campaña de Sensibilización en temas de integridad, valores y lucha anticorrupción, mediante las áreas de educación y cultura de las municipalidades del Perú.
  + Coordinar con las entidades educativas para la difusión y compromiso de una educación por la integridad, en articulación con las distintas municipalidades del país.
* **Contraloría General de la República.**
  + Priorizar la planificación, monitoreo y evaluación en cuanto a la prevención y ejecución de acciones para combatir la corrupción en toda instancia del sector educativo, en el ámbito de sus competencias.
* **Defensoría del Pueblo.**
  + Promoción de la lucha contra la corrupción desde las universidades a partir de las actividades de responsabilidad social.
* **Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.**
  + Apoyo en la difusión del material audiovisual y las acciones que se generen en el marco del compromiso.

Finalmente, cabe resaltar que como uno de los principales retos pendientes mostrados en el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, justamente se tiene lo referido a la promoción de una cultura de valores, respecto de lo cual es necesario concretar la implementación de mecanismos de promoción de principios éticos y valores ciudadanos en colegios, institutos y universidades.

**15. Promover la vigilancia social y participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.**

El **Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción**, ha previsto como una de sus recomendaciones incluida en el punto 3.11 “Sector Privado y Sociedad Civil”, que a través de Comités de Vigilancia se ejerza la participación ciudadana o veedurías ciudadanas en los procesos de contrataciones públicos que los impacten.

Sobre esta Alternativa de Solución, es importante destacar que la OCDE reseña en el **Estudio sobre Integridad en el Perú,** la creación en Colombia, de las Comisiones Regionales de Moralización, a través de las cuales se promueve la participación ciudadana y el control social, llevándose a cabo al menos una reunión trimestral con las organizaciones de la sociedad civil, para atender y resolver sus peticiones, preocupaciones, quejas y reclamos. De igual forma, continúa señalando al respecto que el Perú debería considerar seguir promoviendo los Portales de Transparencia Estándar como un medio para permitir el escrutinio público sobre interacciones entre funcionarios públicos, grupos de interés y particulares. Para ello, el instrumento podría ser ajustado y se podría proporcionar más información sobre la existencia de esta herramienta y cómo utilizarla eficazmente a los fines del control social.

En ese mismo sentido y a través del **“Compromiso de Lima”**, se acuerda “facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica”; así como “Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejoramiento de las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incentivando además mecanismos de participación electrónica”; también, el “desarrollo de una cultura de participación ciudadana para la prevención de la corrupción, con la finalidad de fortalecer los valores cívicos y democráticos”; “incentivar la participación eficaz del sector privado en la formulación de las políticas públicas de lucha contra la corrupción”, entre otras.

**Causa Directa 3:**

**16. Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias y protección del denunciante por hechos de corrupción.**

Entre las recomendaciones contenidas en el **Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad**, se tiene que i) se busca establecer la obligación de las entidades públicas de contar con mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios; ii) asimismo, implementar modelos de canalización de denuncias que permita al ciudadano el acceso rápido así como el monitoreo efectivo y la solución de sus reclamos o denuncias; iii) establecer medidas de protección efectiva al denunciante, al testigo y a la persona involucrada en actos de corrupción que colabore en la investigación. Dichas medidas deben estar orientadas no solamente a garantizar su integridad física sino también su situación laboral; así como la iv) la adopción de disposiciones que sancionen eficazmente el incumplimiento de las normas y de las obligaciones en materia de protección de denunciantes.

Asimismo, el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú** también ha apuntado al fortalecimiento de los mecanismos para la gestión de denuncias con especial énfasis a la protección del denunciante, al recomendar que i) es necesaria la mitigación del riesgo de que los denunciantes presenten informaciones que pueden no constituir divulgaciones protegidas y para evitar exponerlos potencialmente a riesgos innecesarios y sobrecargar el sistema de admisión con cargos no aplicables el Perú deberá aclarar la naturaleza de una divulgación protegida, ii) emprender campañas de concientización, para evitar la posible marginalización profesional de los denunciantes y permitir una compensación justa a los denunciantes que sufren pérdidas de ingresos, iii) incluir como delito en la legislación peruana la amenaza de represalias contra el denunciante, iv) proporcionar canales alternativos formalizados a través de los cuales las personas puedan denunciar y elegir así, donde presentar sus denuncias, v) implementar mecanismos de seguimiento y procedimientos de comunicación, para mantener informados a los denunciantes sobre los resultados de sus denuncias, vi) monitorear y evaluar periódicamente el desempeño del sistema de denuncias del Perú.

En el mismo sentido, **debe destacarse que el “Compromiso de Lima”**, como una instancia de consenso referida a la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, celebrada el 14 de abril de 2018 en la ciudad de Lima y a través del cual se adoptaron 57 compromisos y acciones concretas a realizar en áreas definidas de la sociedad. Así, se tiene que entre los compromisos asumidos, se encuentra los referidos a la protección de denunciantes y que consisten en: i) establecer mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, ii) proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.

Finalmente, en el “Informe Final a la República del Perú” elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC 2016) se efectúan recomendaciones para mejorar la protección de los denunciantes de delitos de corrupción, destacando: a) Adoptar las medidas pertinentes en el sentido de coordinar las medidas y programas de protección de denunciantes existentes en los ámbitos administrativo y penal; y b) Elaborar información estadística por parte de las instituciones responsables referida a aspectos tales como el número de casos en los que se han solicitado y obtenido por los denunciantes y testigos medidas de protección en casos de actos de corrupción, el tipo de la medida otorgada, así como el número de solicitudes denegadas y la razón de tal denegación, en orden de identificar retos y adoptar, si corresponde, medidas correctivas.

**17. Promover la denuncia ciudadana de actos de corrupción.**

En el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú,** se señala que debe aumentarse la conciencia ciudadana para promover la integridad y detectar conductas indebidas; todo ello, a través del fortalecimiento del Sistema de Denuncias.

Asimismo, la OCDE indica en su Informe que las campañas periódicas de concientización que se adaptan específicamente a cada contexto son fundamentales para mejorar la percepción pública de los denunciantes, en ese sentido, las campañas de concientización son más eficaces para establecer percepciones positivas de los denunciantes cuando se asocian con medidas concretas adicionales como la toma de decisiones transparentes y soluciones claras.

En ese orden de ideas, la OCDE recomienda que el Perú puede comprometerse con la sociedad civil como una forma efectiva de aplicar medidas de concientización.

Así, es pertinente señalar la experiencia en Corea; el gobierno implementó estrategias nacionales para aumentar la consciencia del público sobre los beneficios de la denuncia y para fortalecer la protección de los denunciantes. Por ejemplo, la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea (Korean Anti-Corruption and Civil Rights Commission) introdujo y promovió sistemas de protección de denunciantes de interés público para directores generales de empresas privadas, llevó a cabo actividades promocionales utilizando métodos narrativos a través de dibujos animados en Internet y exhibió y transmitió anuncios a través de TV y carteles en el sistema de subterráneos para promover los sistemas de protección de denunciantes.

Por otra parte, además de la concientización llevada a cabo por los gobiernos de los países de la OCDE, varias ONG se encuentran en este campo. Por ejemplo, en el Reino Unido, Public Concern at Work proporciona asesoramiento independiente y confidencial a los trabajadores que no están seguros de sí (o cómo) plantear una preocupación de interés público. De igual forma, realizan actividades de educación política y pública y ofrecen capacitación y consultoría a las organizaciones. En los Estados Unidos, el Proyecto de Responsabilidad del Gobierno (Government Accountability Project), primariamente una organización de abogados, defiende a los denunciantes contra las represalias y promueve activamente la rendición de cuentas de gobiernos y empresas.

**18. Crear programa de recompensas de incentivos monetarios a denunciantes de actos de corrupción.**

Respecto de la presente alternativa de acción, se cuenta con abundante sustento y evidencia; en primer orden, se tiene que el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, ha contemplado como un reto pendiente, la necesidad de desarrollar una estrategia eficaz que permita el fortalecimiento de los incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público, tomando en cuenta experiencias internacionales y realizando el análisis del impacto de dicha estrategia.

Asimismo, el **Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad** en el marco del eje III. “Fortalecer la integridad y la ética en el sector público”, acordó crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público, que proporcionen información útil y no conocida por las autoridades, y que resulte en la aplicación de sanciones por actos de corrupció, proveyendo a los denunciantes de un régimen efectivo de protección.

**19. Unificar los regímenes disciplinarios, a efectos de uniformizar los procedimientos, sanciones, y la predictibilidad de criterios.**

En el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú,** señala que la multiplicidad de regímenes laborales que conviven en el Estado, genera una serie de limitaciones para el desarrollo de la carrera pública y un trato igualitario a los servidores civiles, lo cual incluye la importante debilidad en la uniformización de los procedimientos, sanciones y la predictibilidad de criterios, en casos vinculados a la corrupción.

A corto plazo, indicadores clave de desempeño disponibles públicamente y estandarizados sobre el funcionamiento del régimen unificado (o sobre ambos regímenes) constituirían una valiosa evidencia para evaluar el sistema, informar a la sociedad civil y mejorar no sólo los mecanismos de imposición legal, sino también la estrategia de integridad.

En el mismo orden de ideas, en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción vigente, se advirtió la existencia de sistemas de responsabilidad administrativa (procedimientos, faltas administrativas y sanciones) cuyo funcionamiento es paralelo, redundando así en una falta de uniformidad en los criterios para castigar determinadas conductas limitando los estándares de predictibilidad del sistema y las posibilidades de sanción efectiva en los casos que lo ameritan; además existe una brecha en la capacidad de monitoreo que hace difícil la realización de una efectiva evaluación de las sanciones impuestas, por ello se mostró en el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, la necesidad de desarrollar una mejor articulación de los procedimientos de responsabilidad para garantizar la autonomía de los órganos encargados de conducir los procesos y la necesaria imparcialidad de dichos procedimientos, así como de orientar los esfuerzo a fin de contar en el mediano y largo plazo con un sistema disciplinario sancionador único, con criterios uniformizados y previsible, que también se articule entre las instancias autónomas que garantizan la imparcialidad en el juzgamiento.

Asimismo, y como primer paso al objetivo futuro de un sistema disciplinario sancionador único, se estimó como reto pendiente retomar la coordinación del grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Integridad Pública, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional del Servicio Civil; a fin de formular la propuesta respectiva, con la correspondiente delimitación de las jurisdicciones y responsabilidades institucionales, y el establecimiento de un catálogo único de infracciones y sanciones.

**20. Asegurar la autonomía técnica y funcional, y capacidad operativa de los órganos responsables de conducir la investigación y sanción de las faltas administrativas.**

En el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018 – 2021 se estableció el objetivo específico (3.2.) que implicó “reforzar el sistema disciplinario” y como propuso dos acciones consistente en: “promover un trabajo articulado con miras a delimitar las jurisdicciones y responsabilidades institucionales, y establecer un único inventario de infracciones y sanciones” (numeral 62), y “fortalecer la capacidad operativa de sanción disciplinaria en las entidades mediante mecanismos que garanticen la eficiencia, celeridad e inmediatez en la respuesta administrativa para sancionar faltas a la ética pública y casos de corrupción (numeral 63). Según el Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021, en su balance de metas al 2019, el objetivo específico 3.3 logró el 84% en nivel de cumplimento.

En este contexto, en cuanto a la alternativa de asegurar la autonomía técnica y funcional, y la capacidad operativa de los órganos responsables que conducen la investigación y la sanción por faltas administrativas, el artículo 94º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, si bien regula la existencia del órgano instructor del procedimiento disciplinario -a cargo de la institución del servidor instruido- y cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica, sin embargo, permite que estas pueden ser conformadas por servidores en adición de sus funciones y con una consideración adicional, de preferencia abogado, no señala especialidad, o experiencia; ha sido bastante notorio, que las entidades ante la insuficiencia de personal, le encargan a un servidor, que tiene un puesto como rol principal en la entidad, las investigaciones, y lógicamente no coadyuva a una buena capacidad operativa y autonomía técnica ni funcional. La fase de la impugnación a cargo de SERVIR, la decisiones son revisadas de forma independiente y autónoma, sin bien no existe una análisis de la cantidad de casos que son declarados nulos los diversos criterios y precedentes han buscado dar predictibilidad al sistema.

**21. Potenciar el trabajo de los Órganos de Control Institucional y de la Contraloría General de la República.**

Sobre la presente alternativa de intervención y como ya se mencionara anteriormente, su identificación inicial fue el resultado de la priorización realizada a las propuestas concretas formuladas en el Informe del entonces Fiscal de la Nación y Presidente de la CAN[[12]](#footnote-12); dicho Informe constituyó una iniciativa que surgió con la finalidad de replantear la PNILCC y luego de los acontecimientos por actos de corrupción que involucraron a la clase política, empresarial y Altos Funcionarios del país, en los años 2015 y 2016; así, esta iniciativa aglutinó a los miembros de la CAN y tomo como base recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales e instituciones vinculadas al tema.

En ese sentido, la presente alternativa de solución ha recogido propuestas de acción, priorizadas en el mencionado documento, que en esencia se refieren a lo siguiente:

* Fortalecimiento económico y logístico del Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General de la República establecida mediante Ley 29622.
* Creación de órganos de enlace y firma de convenios para que los procedimientos resulten más expeditivos, ya sean administrativos o judiciales, entre las instituciones involucradas en la lucha contra la Corrupción (Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, CAN, Procuraduría, entre otros).
* Dotación de recursos presupuestales, técnicos y humanos necesarios para el buen funcionamiento de las Procuradurías Anticorrupción y de la Contraloría General de la República a nivel nacional.
* Adopción de procedimientos o memorandos de entendimiento suscritos entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, la policía, el Ministerio de Justicia, SERVIR, a fin de garantizar la cooperación sistemática y continua entre las agencias en relación a los casos de corrupción bajo jurisdicción penal.
* Fortalecimiento, dinamización y descentralización de la Contraloría General de la República para mejorar la investigación y sanción administrativa de los hechos de corrupción.
* Fortalecimiento de las oficinas de control interno de las entidades estatales, a través de la dotación de autonomía y eficiencia. Debiéndose dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control a la Contraloría General de la República.
* Instar a la Contraloría General de la República a la revisión de sus normas y directivas respecto del Control Simultáneo, así como que excepcionalmente asesore en temas de gestión a las entidades estatales, lo que implica replantear las funciones de la OCI (Órgano de Control Institucional) conforme lo recomienda la OCDE.
* Participación de la Contraloría General de la República en los procesos de contratación de obras públicas de gran envergadura, en un rol de veedor.

En línea con lo antes expuesto, debe mencionarse también que la OCDE en su Informe de recomendaciones del año 2016, señaló la necesidad de rediseñar el papel y las operaciones del Órgano de Control Institucional, a fin que éste se concentre en asesorar y apoyar la gestión y proporcionar aseguramiento sobre los procesos de control interno.

**22. Fortalecer la regulación de los mecanismos de investigación, persecución, ~~y~~ sanción, decomiso de bienes y cooperación y asistencia judicial internacional en materia de corrupción, así como desarrollo de competencias de los operadores del subsistema anticorrupción a nivel nacional y subnacional.**

Se mostró en el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, como reto pendiente, la necesidad de contar con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Secretaría de Integridad Pública y las oficinas de integridad institucional de algunos sectores, a fin de concretar la incorporación de todos los órganos intervinientes en los procesos de investigación de delitos, por corrupción. El objetivo es esta línea consiste en establecer espacios de articulación y protocolos de coordinación operativa en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción.

En el informe país del MESICIC -Informe Final aprobado en la sesión plenaria del 11 de marzo de 2021-, se refiere que en el ámbito normativo penal, existe un alineamiento, especialmente por la aprobación de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica (Ley 30424 y modificatorias), sin embargo, hace hincapié en el fraude de etiqueta en el que se incurre con la ley, es decir, que si bien se señala que se sancionará administrativamente a la persona jurídica sin embargo ésta se realiza en la jurisdicción penal y no administrativa. Por otra parte, refiere de la ausencia de normas procedimentales respecto de las situaciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la figura del cohecho transnacional, en este aspecto se debe buscar alinear la ley y la regulación procesal necesaria para considerar situaciones que ocasionen la impunidad.

La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción estableció que los Estados adoptarán (artículo 46º) respecto de la asistencia judicial recíproca, debe ser un mecanismo ágil y amigable, en especial con el soborno transnacional, el Informe MECISIC recomienda que se incorpore como normas. En efecto, un fenómeno que se ha manifestado con mayor intensidad en estos últimos años son los delitos transnacionales y crimen organizado, esto hace necesario reforzar las normas sobre investigaciones conjuntas, sobre la estandarización de las asistencias judiciales, o la posibilidad de que el país de origen de la empresa o la persona corrupta, con imposibilidad de extradición, puedan ser juzgados a pedido de Estado en el cual se ha realizado el hecho delictivo.

Asimismo, es de recordar que el “Informe sobre el Perú en Fase 01” elaborado por el Grupo de Trabajo Anticohecho de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE” se formulan diversas recomendaciones para el combate de la corrupción trasnacional, tanto en relación a la normativa penal y procesal penal, pero que también abarcar la necesidad de reformas legales y operativas a nivel del sector privado, administración tributaria, aspectos contables y de auditoría entre otros.

La recuperación de activos, regulada en el Decreto Legislativo N° 1104 como Pérdida de Dominio; y, posteriormente, mejorada en el Decreto Legislativo N° 1373, con una denominación cambiada: “Extinción de dominio”, permite en la actualidad contar con un sistema en el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el Poder Judicial, que articula la capacidad del Estado para decomisar bienes de origen ilícito a nivel nacional e internacional.

Asimismo, el **Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú,** señala sobre esta alternativa de acción, la importancia de que los funcionarios encargados de investigar y enjuiciar los casos de crímenes contra la administración pública deben ser informados de los requisitos del Acuerdo Tripartito y de la Resolución del Ministerio Público como parte de su capacitación regular.

En ese orden de ideas, la OCDE también recomienda que se podrían impartir regularmente actividades de formación y concientización al personal judicial y al personal de los tribunales sobre la conducta ética, junto con mecanismos de apoyo para investigar y recabar información relacionada con la corrupción; estos esfuerzos deben complementarse con el apoyo abierto y permanente de los altos cargos del gobierno y del Poder Judicial.

Finalmente, es necesario que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura, con apoyo de la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fortalezcan sus labores de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces, fiscales, personal jurisdiccional y fiscal, actualizando los conocimientos en relación a las mejores prácticas y parámetros internacionales, reformas normativas nacionales y en general toda buena práctica relacionada a la investigación y procesamiento de los delitos de corrupción, en especial aquellos que estén vinculados con organizaciones criminales o sean de carácter trasnacional.

**23. Impulsar la interoperabilidad en las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidas que permitan centralizar la información para el análisis estratégico de la corrupción.**

Dentro del acápite 3.3 “Administración de Justicia” y a fin de dotar de las condiciones para afrontar los casos de corrupción de funcionarios, especificamente en la propuesta No. 20 y 24, el **Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción**, ha previsto la “Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia” y la “implementación de mecanismos de interoperabilidad entre las instituciones públicas para dotar de eficacia a las investigaciones penales y procesos penales referidas a delitos contra la Administración Pública”, respectivamente.

Asimismo, en el Informe de Adjuntía N° 01-2020-DP-ALCCTEE **“Interoperabilidad en el sistema de justicia penal: Hallazgos y Recomendaciones para fortalecer su implementación a favor de la lucha contra la corrupción”, la Defensoría del Pueblo** advirtió que estas no cuentan con convenios marco de interoperabilidad implementados ni en proceso de implementación.

En ese orden de ideas y en el marco del mencionado estudio, la Defensoría del Pueblo encontró que cada entidad tiene su propio sistema y registro, lo que impide la tramitación de un expediente único. Las sedes centrales utilizan métodos tradicionales para compartir o intercambiar información con las otras entidades (papel) dilatando el proceso y la tramitación de expedientes, poniendo en riesgo el desarrollo de las investigaciones y dando lugar a la generación de riesgos de corrupción. Asimismo, presentan serias limitaciones para interoperar con sus sedes desconcentradas debido a brechas de infraestructura de red, soporte informático, y falta de personal especializado. De allí que, la Defensoría del Pueblo apuesta por la interoperabilidad y la transformación digital del sistema de justicia penal, dadas las enormes ventajas que ofrecen en el propósito de fortalecer los esfuerzos del Estado en la lucha contra la corrupción, por lo que pone a disposición el Informe sobe “Interoperabilidad en el sistema de justicia penal: Hallazgos y recomendaciones para fortalecer su implementación a favor de la lucha contra la corrupción.

Asimismo, para el fortalecimiento e impulso de la interoperabilidad, se han planteado otras alternativas de intervención, cuyos resultados contribuiran a dicho fortalecimiento; en ese sentido, el **Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021**, presenta como un reto pendiente la institucionalización de espacios de articulación entre los principales órganos participantes en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción, a fin de contar con una actuación conjunta y oportuna en casos especiales vinculados a corrupción, dentro de lo que puede inferirse que figura la gestión de la información interoperable de las entidades vinculadas a la cadena de valor de anticorrupción.

En el mismo orden, el **Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad** también contempla algunas medidas, específicamente las propuestas No. 44[[13]](#footnote-13) y 45[[14]](#footnote-14), que refieren i) la implementación efectiva del gobierno electrónico en todas las entidades de la Administración Pública, en los tres niveles de gobierno, para lo que se ha recomendado medidas más específicas, tales como impulsar la simplificación y digitalización de procesos y servicios para hacerlos más eficientes y accesibles a la ciudadanía; instaurar progresivamente una política de datos abiertos en las transacciones y trámites del Estado, de manera que la información relevante pueda ser fácilmente buscada, accesible y compartida, optimizando la gestión pública, incrementando la transparencia y contribuyendo a reducir los espacios para actos de corrupción. Y ii) el fortalecimiento y dotación de facultades suficientes a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) para impulsar la implementación efectiva de una Política Nacional de Gobierno Electrónico que incorpore las medidas antes referidas; así como que la ONGEI implemente procesos para convertir los datos en información útil que permita continuar simplificando trámites y hacer más eficientes los servicios al ciudadano.

Actualmente, el Poder Judicial viene impulsando el Expediente Electrónico en las áreas civiles, comerciales, laborales, entre otras, encontrándose pendiente impulsar el área penal, para ello, la Presidencia del Poder Judicial, con Resolución Administrativa N° 000138-2020, publicada el 29 de diciembre del 2020, dispuso la implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada.

**24. Fortalecer la capacidad operativa de las entidades vinculadas con la investigación y sanción de casos de corrupción.**

La alternativa de solución que incide en la capacidad operativa en la investigación y sanción de los casos de corrupción implica considerar a varias instituciones autónomas, conforme se les reconoce en la constitución, así el Poder Judicial encargado de condenar o absolver a los acusados por delitos de corrupción (sancionar), desde el año 2016 tiene sub sistema de órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, por el D.S. Nº 010-2017-EF se asignó al Poder Judicial aproximadamente 9,646,768.00 mil soles aproximadamente para la creación de nueve órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional y la implementación de una coordinación.

Actualmente el Poder Judicial tiene la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, creado por Resolución Administrativa N° 318-2018-CE-PJ-, constituida fusionando la Sala Penal Nacional y del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esta Corte tiene competencia nacional para los delitos contra la administración pública, siempre que sea parte de una organización criminal. Los delitos de Corrupción de Funcionarios que no están relacionados con organizaciones criminales son asumidos por las 34 Cortes Superiores a nivel nacional. Entonces, al Poder Judicial como organización tiene una capacidad operativa reducida para los casos de corrupción, que en general son de dos tipos los complejos (asumidos por la Corte Superior Especializada) y los no tan complejos (asumidos por las Cortes a nivel de distrito judicial a nivel nacional), no existe hasta la fecha una cifra concrete que permita evidenciar la magnitud de la demanda para impulsar su capacidad operativa, entendida esta como la cantidad de órganos suficientes para resolver toda la carga de los casos de corrupción. Es notorio también la necesidad de esta institución de contar con infraestructura adecuada, personal con alto perfil y competencia, esto incluye a jueces, especialistas y apoyo para manejar casos altamente complejos.

Las otras dos instituciones vinculadas con la investigación de los casos de corrupción son el Ministerio Público que tiene la dirección y responsabilidad de formular la acusación como resultado de una buena investigación, asimismo, su órgano de apoyo la Policía Nacional del Perú, a nivel de investigación ellos están encargados de elaborar los informes de las denuncias provenientes de los casos de corrupción. Ambas instituciones, deben trabajar en conjunto, sus problemas en cuanto a la capacidad operativa están vinculados la necesidad de contar con infraestructura adecuada, personal altamente capacitado, tanto de fiscales y personal de apoyo, de igual manera en la policía.

Una modalidad que se optó para los casos complejos de corrupción fue la creación de equipos especiales, en el año 2016 el Fiscal de la Nación por la autonomía y facultades que le corresponde para afrontar los graves casos de corrupción descubiertos, con trascendencia internacional, el Fiscal de la Nación con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5050-2016-MP-FN, conformó el Equipo Especial de Fiscales con dedicación exclusiva en la investigación penal de la empresa Odebrecht, en la misma lógica del equipo especial con dedicación exclusiva, el Fiscal de Nación con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1550-2019-MP-FN conformó un equipo para el caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, en cual involucraba a particulares y funcionarios públicos (jueces y fiscales) de distintos niveles, cuya investigación y procesamiento judicial requiere un tratamiento especial y diferenciado en función al nivel jerárquico al que pertenecen. El contexto descrito denota de la necesidad de especialidad y permanencia, en tal sentido existe Proyectos de Ley, como el Nº 3165/2018-PE, que propone crear la Fiscalía Suprema Anticorrupción y el Sistema Fiscal Especializado en delitos contra la administración pública.

El principal encargado de la investigación no tiene un centro especializado de peritos, de manera institucional, el Informe de la Defensoría Nº 168, que abordó el tema del archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión, un problema de la cantidad de absoluciones es la pericia “en peculado y en colusión los peritos tienen excesiva carga, no hay cantidad suficiente” “toda la fiscalía trabaja con un solo perito contador para 1200 casos. En este sentido el Fiscal de la Nación en el año 2018 presentó un proyecto de Ley al Congreso de la República, Proyecto de Ley Nº 3177/2018-MP, solicitando que se crea el Instituto Nacional de Formación de Peritos Forenses del Ministerio Público.

El fortalecimiento de la capacidad operativa busca que los principales encargados de la investigación y la sanción tengan los recursos humanos y monetarios, así como la infraestructura y la logística necesaria para responder a la expectativa de la capacidad de sanción del Estado en los casos de corrupción.

**25. Implementar y/o fortalecer mecanismos de articulación permanente y protocolos de actuación conjunta para la optimización de investigaciones penales de casos de corrupción.**

La alternativa de solución que propone la implementación y/o fortalecimiento de mecanismos de articulación, permanente y conjunta para optimizar las investigaciones penales en casos de corrupción permitirá paliar otros de los grandes problemas de ineficacia de la capacidad sancionadora en el sistema de justicia penal, haciendo caer en archivo o sobreseimiento de los casos de corrupción, entre ellas, probablemente por la falta de coordinación o protocolos adecuados con los órganos de apoyo u otras entidades públicas, que muchas veces tienen la condición de agraviados (en ellas se encuentran las pruebas). La referencia principalmente está relacionado con el responsable y director de las investigaciones en los casos de corrupción, el representante del Ministerio Público, el fiscal.

El Ministerio Público, fundamentalmente desde su máximo órgano que es la Fiscalía de la Nación en estos años ha estructurado un sub sistema bastante similar a la del Poder Judicial, así tiene las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios que conocen e investigan los delitos cometidos por Funcionarios Públicos, se trata de los delitos de corrupción y los delitos conexos, asimismo tiene Fiscalías de competencia nacional, denominadas Fiscalías Supra Provinciales y Fiscalías Superior Nacionales conforme a la Resolución Fiscal de la Nación No. 1833-2012-MP-FN.

Los diversos órganos especializados en materia de corrupción del Ministerio Público, con competencia supranacionales, y las de competencias ordinaria por materia, tiene el objetivo principal de acopiar todas las pruebas necesarias para formular, concluido la investigación preparatoria, una acusación o sobreseimiento de la investigación a los funcionarios públicos por delitos de corrupción, en esta función es importante la articulación permanente con las entidades agraviadas, con los organismos de auditoría (Contraloría General de la República), con los peritos institucionales, se requiere de un sistema de coordinación institucionalizado. En cuanto a la relación de los Fiscales con la Policía Nacional (órgano de apoyo) tienen un Protocolo de Actuación Interinstitucional de carácter sistémico y transversal para la aplicación del Código Procesal Penal, aprobado por D.S. Nº 10-2018-JUS, sin embargo, no existe algo específico para temas de corrupción.

A la fecha hubo varios intentos de mejorar la articulación entre las entidades encargadas de la persecución penal, así el 17 de julio de 2012, se firmó un Convenio Tripartito los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuyo objeto fue implementar la actuación conjunta, eficaz y eficiente en casos de corrupción de funcionarios, especialmente para los casos graves, complejos y de repercusión nacional, el Convenio tuvo como base otro Convenio Marco Tripartito de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial, del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, el problema es que su vigencia tiene caducidad a los dos años, en esta lógica de cooperación en el año 2017, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suscribieron el 07 de diciembre de 2017, el Compromiso para la Lucha contra la corrupción.

Otro avance en el trabajo conjunto se realizó en el año 2013, en donde el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior – La Policía Nacional del Perú, y el Ministerio de Justicia elaboraron Protocolos de actuación conjunta relacionado con las medidas limitativas de derechos de allanamiento, impedimento de salida, intervención de las comunicaciones telefónicas, y el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, así como la guía de actuación conjunta contra la delincuencia organizada y el crimen organizado, los protocolos fueron aprobados por el Poder Judicial con Resolución Administrativa Nº 134-2014-CE-PJ, así como por el Ministerio de Justicia por Resolución Ministerial Nº 0243-2014-MINJUS. Asimismo, en el año 2018, bajo la coordinación del MINJUS se aprobó el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la prevención y represión de los delitos de corrupción de funcionarios, por Resolución Ministerial 0174-2016-JUS.

Como se puede observar los avances a partir de los convenios y protocolos han significado una buena práctica para mejorar las acciones y gestión de los representantes institucionales, estas buenas prácticas son consideradas y publicadas por el Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción – MESICIC de la OEA, sin embargo, estas buenas prácticas deben ser institucionalizadas y adaptadas de manera permanente y sostenida, para ello es necesario evaluar una actualización de dichos mecanismo, se necesita de encargados que hagan seguimiento de los resultados de los mecanismos, esto servirá para incorporar las mejoras necesarias y resuelva los problemas de articulación construida a la fecha desde las personas no desde una mirada de proceso con mejora continua.

**3. Análisis Costo Beneficio de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (PNILCC).**

El análisis costo-beneficio de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (PNILCC) busca en primer término determinar la rentabilidad social de la misma, así como cuantificar lo que el país pierde o gana al reducir la ocurrencia de actos de corrupción en la administración pública, concentrándose en determinar cuáles son las consecuencias en términos monetarios.

En dicho contexto, las alternativas de solución identificadas apuntan a mitigar o reducir las limitaciones o deficiencias generadas de las causas del problema público identificado. En efecto, las alternativas de solución enmarcan el entorno en el que se determinarán los propósitos y cursos de acción de la política destinados a lograr la situación futura deseada formulada.

En el mismo orden de las ideas anteriores, debe destacarse que las intervenciones identificadas como las alternativas de solución, deben ejecutarse de manera complementaria para lograr el escenario futuro al que se apuesta con la actualización de esta política nacional.

En ese sentido, también es pertinente resaltar que el costeo realizado se ha considerado solo un escenario, ***el de implementar la política***, y esto a razón de que el Estado tiene una posición claramente definida respecto al establecimiento de una cultura de integridad y a la lucha contra la corrupción; así, viene ejecutando acciones concretas a nivel de las entidades involucradas, lo que continuará haciendo y todo apunta a pensar que lo intensificará en los próximos años, en esa línea de pensamiento, sería vano e inoficioso esbozar un escenario sin política, el cual no se ajustaría a la realidad y su aporte perdería fuerza en el análisis global.

Ahora bien, el documento “Cálculo del tamaño de la corrupción y de la inconducta funcional en el Perú” propone una metodología de cálculo del tamaño de la corrupción basada en los resultados de las intervenciones de control posterior que se han efectuado en el país en los últimos años, y en las cuales se ha identificado la existencia de un posible perjuicio económico o daño patrimonial al Estado sobre la ejecución presupuestal por nivel de gobierno y por grupo genérico de gasto (inversiones, bienes y servicios, etc.)[[15]](#footnote-15).

De acuerdo a este documento se estimó que para el 2019 alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se pierde por corrupción e inconducta funcional y, en términos de perjuicio económico al Estado, ello representa alrededor del 3% del Producto Bruto Interno (PBI) de ese mismo año; similar al cálculo efectuado por el historiador Alfonso Quiroz (2013)[[16]](#footnote-16).

En consecuencia, el análisis de los costos se ha modelado en base a una estructura de costos tipo, en los que en gran medida incurriría el equipo que gestiona la política, este análisis parte de la base de lo que costaría un equipo humano que cumple un rol gestor y de articulación muy importante, que impulsa las acciones que conforman las alternativas propuestas en la política, operando estratégicamente con los sectores y/o entidades e instituciones involucradas, los cuales obviamente contarán con presupuestos acordes a las acciones que deben desplegar en la línea de lo que dicta la PNILCC.

**1.6.1 Cálculo de los Costos.**

Se ha realizado a partir de la sumatoria de costos de las alternativas de solución de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

A continuación, se detallan las 25 alternativas que se costearon, ver Cuadro N° 1.

**Cuadro N° 1 Detalle de Alternativas de Solución de la PNILCC costeadas**

|  |
| --- |
| **Alternativas de Solución** |
| 1. Fortalecer el marco normativo en materia de integridad para promover la implementación de mecanismos, herramientas e instrumentos a fin de instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública. |
| 2. Fortalecer los mecanismos de control interno, de transparencia y accesos a la información, de rendición de cuentas y otros relacionados con el enfoque integridad. . |
| 3. Fortalecer la estrategia de comunicación y difusión de información de la SIP y de las oficinas encargadas de ejercer la función de integridad. |
| 4. Crear un Sistema Nacional de Integridad que fortalezca a las entidades que se vinculan con la materia de integridad y delimite adecuadamente sus funciones, competencias y responsabilidades. |
| 5. Fortalecer capacidades en los funcionarios y servidores vinculados directamente con la función de integridad. |
| 6. Implementar canales institucionales, mecanismos virtuales y/o herramientas que promuevan una mayor coordinación y articulación entre las entidades públicas con la SIP. |
| 7. Implementar mecanismos y herramientas interoperables para la generación y gestión de información en materia de integridad y lucha contra la corrupción. |
| 8. Priorizar las intervenciones públicas en áreas, sistemas, procedimientos u otros espacios de mayor riesgo de corrupción. |
| 9. Implementar mecanismos, herramientas e instrumentos para instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública. |
| 10. Asegurar canales apropiados de orientación, asesoramiento y consultoría, en temas de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. |
| 11. Sensibilizar y capacitar sostenidamente a funcionarios y servidores públicos en los temas relacionados con ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. |
| 12. Entrenar a titulares y altos funcionarios de las entidades para ejercer el liderazgo ético en las mismas y para manejar situaciones de crisis que afectan la integridad pública. |
| 13. Difundir programas educativos en la televisión, radio y redes sociales que propugne el fortalecimiento de valores en la ciudadanía. |
| 14. Reformular la política educativa, para establecer la obligatoriedad del curso de educación cívica y valores éticos en los colegios de primaria y secundaria. |
| 15. Promover la vigilancia social y participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. |
| 16. Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias y protección del denunciante por hechos de corrupción. |
| 17. Promover la denuncia ciudadana de actos de corrupción. |
| 18. Crear programa de recompensas de incentivos monetarios a denunciantes de actos de corrupción. |
| 19. Unificar los regímenes disciplinarios, a efectos de uniformizar los procedimientos, sanciones, y la predictibilidad de criterios. |
| 20. Asegurar la autonomía técnica y funcional, y capacidad operativa de los órganos responsables de conducir la investigación y sanción de las faltas administrativas. |
| 21. Potenciar el trabajo de los Órganos de Control Institucional y de la Contraloría General de la República. |
| 22. Fortalecer la regulación de los mecanismos de investigación, persecución, ~~y~~ sanción, decomiso de bienes y cooperación y asistencia judicial internacional en materia de corrupción, así como desarrollo de competencias de los operadores del subsistema anticorrupción a nivel nacional y subnacional. |
| 23. Impulsar la interoperabilidad en las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidas que permitan centralizar la información para el análisis estratégico de la corrupción. |
| 24. Fortalecer la capacidad operativa de las entidades vinculadas con la investigación y sanción de casos de corrupción. |
| 25. Implementar y/o fortalecer mecanismos de articulación permanente y protocolos de actuación conjunta para la optimización de investigaciones penales de casos de corrupción. |

**Fuente: Elaboración propia**

En la Tabla N° 1 se muestran los costos (en millones de soles) según el horizonte de tiempo establecido para la PNILCC.

**Tabla N° 1 Costos de la PNILCC**



Fuente: Elaboración propia

Es importante precisar que, en lo que respecta a los costos referidos a la gestión de trámites en el Estado y a equipamiento se consideró la opinión de Especialistas de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, para otros costos como los incurridos en Publicidad se tomó como referencia lo gastado por el Estado en algunos de sus Sectores durante el 2020.

El detalle de lo mostrado en la Tablas N° 1 se puede observar en el Anexo 2.

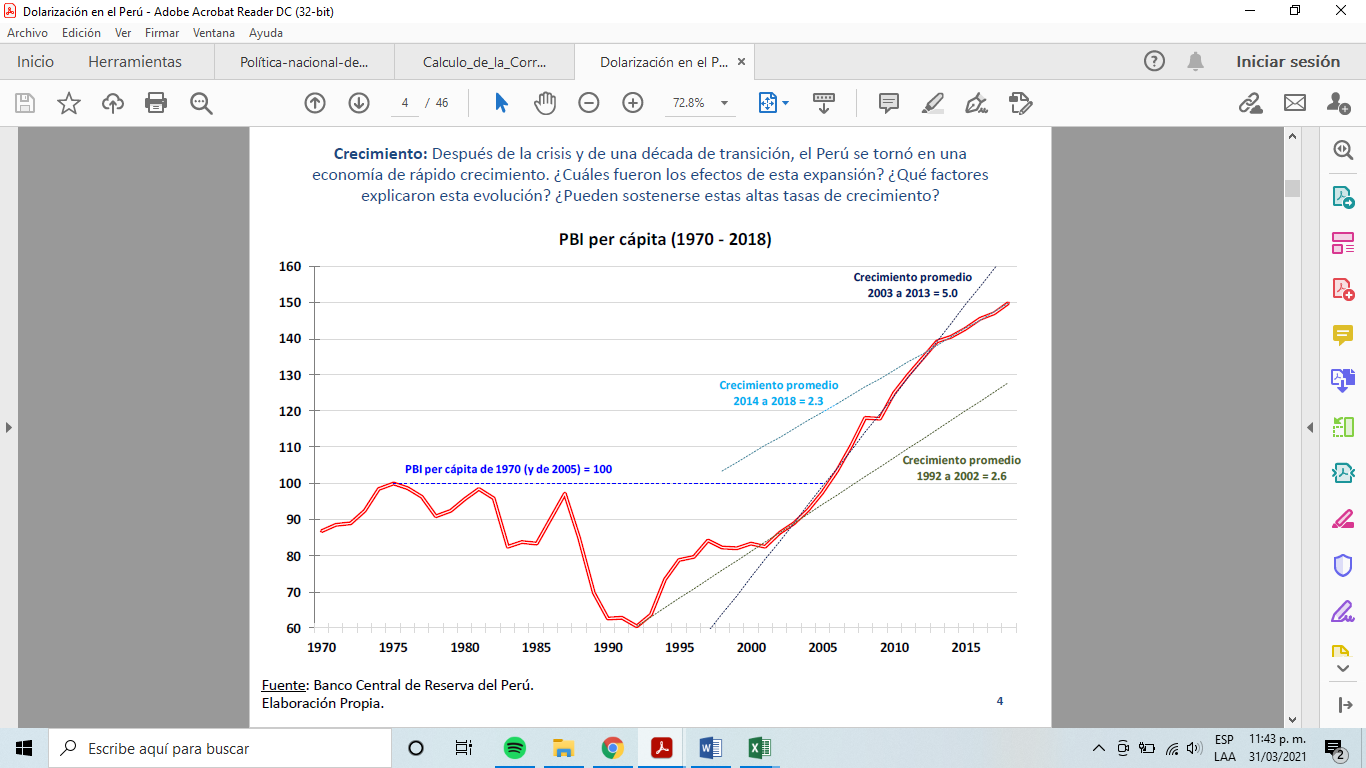
**1.6.2 Cálculo de los Beneficios**

Los beneficios de la PNILCC son aquellos que se obtienen de reducir la ocurrencia de actos de corrupción en la administración pública, en términos del incremento del PBI, lo que se entendería como la disminución del perjuicio económico al Estado por corrupción e inconducta funcional (expresado como % del presupuesto público ejecutado). En ese sentido, los montos anuales proyectados de la disminución del perjuicio económico al Estado, estimados a partir del PBI, representarán los ingresos de la política.

Para ello, se realizó la proyección del Producto Bruto Interno del país para el período de intervención de la PNILCC. De manera preliminar es importante considerar lo siguiente:

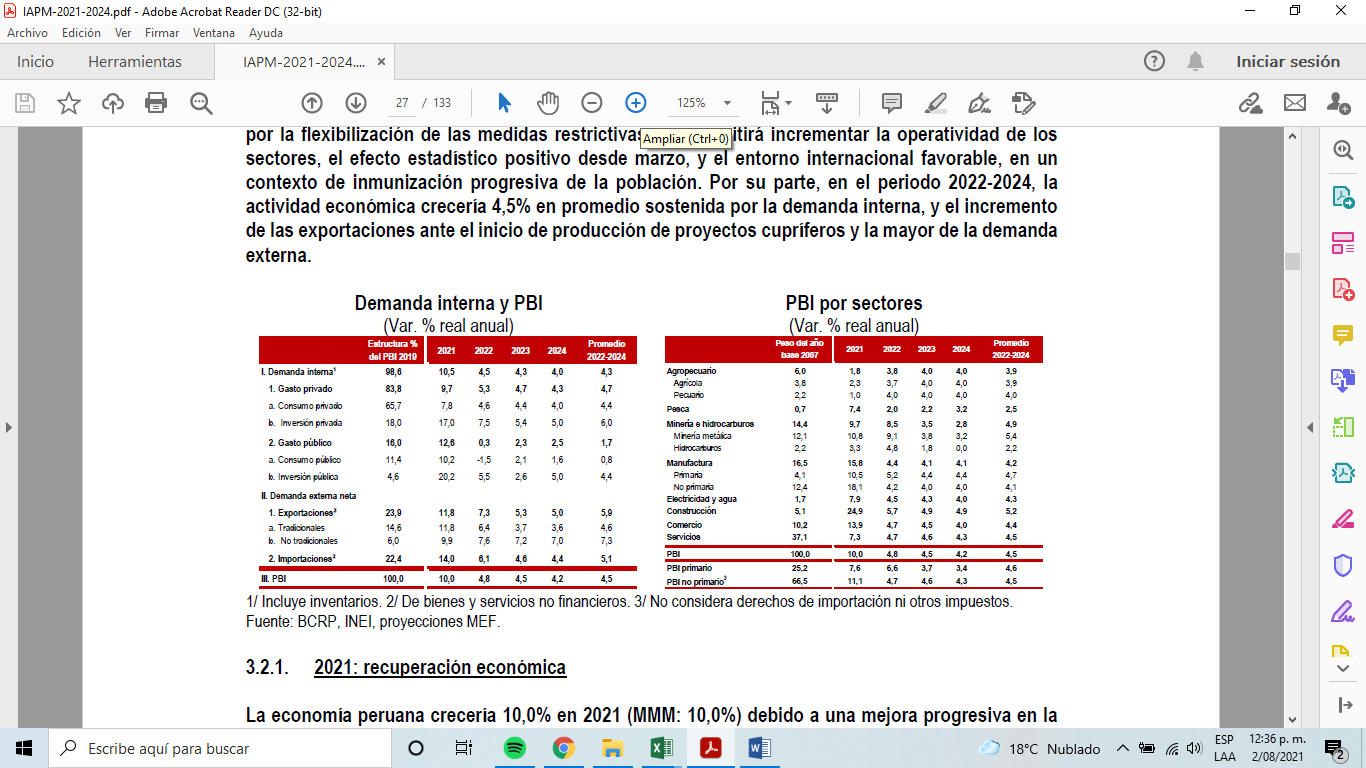
* El PBI del Perú estaba creciendo un promedio de 3% anual en los últimos 7 años, sin embargo, el año 2020 sufrió un retroceso como consecuencia de la pandemia del COVID19 (se registró una caída aproximada del 11%[[17]](#footnote-17)).
* El comportamiento de la economía peruana de los últimos 30 años evidenció diferentes etapas, en la década de los 90 se realizaron reformas estructurales y el PBI tiene incluso tasas de 2 dígitos, del 2001 al 2013 hay una tasa de crecimiento promedio anual del 5%; del 2014 en adelante la tasa de crecimiento es moderada (Ver Figura 1).
* Se prevé que el PBI regrese a los niveles del 2018 dentro de cuatro años aproximadamente, asimismo la tasa de crecimiento anual sería más discreta que la de años anteriores.
* Para el pronóstico del PBI en los próximos cuatro años se consideran las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas que sugieren que la actividad económica crecería 4,5% en promedio, sostenida por la demanda interna, y el incremento de las exportaciones ante el inicio de producción de proyectos cupríferos (gran minería). Para ello es importante tomar en cuenta el comportamiento de los últimos años (otra etapa de crecimiento).
* Si bien es cierto, el panorama es alentador, no hay que perder de vista que, factores como la inestabilidad política, podrían alterar las proyecciones mencionadas.

**Figura N° 1 Comportamiento del PBI en las últimas décadas.**



Fuente: BCRP

**Figura N° 2 Demanda interna y PBI, PBI por sectores**



Fuente: Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2021-2024 del MEF (página 27)

Para el pronóstico del PBI se han utilizado las tasas de crecimiento proyectadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para el periodo 2021-2024 (actualizadas al 30 de abril de este año), Ver Figura N° 2. La estimación del periodo 2025-2030 se hizo utilizando la fórmula TENDENCIA de Microsoft Excel, a partir del año 2022. Los resultados fueron los siguientes:

**Tabla N° 2 Proyección del PBI (2021-2030)**



Fuente: Elaboración propia / BCRP /MEF /INEI

Se observa que en el año 2021 hay un crecimiento del PBI muy superior al del promedio de los siguientes años, eso se debe a que el año previo fue atípico.

Por otra parte, con respecto al porcentaje del presupuesto público ejecutado que se pierde por corrupción e inconducta funcional, se ha tomado como línea base el dato obtenido por el Documento *Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria*; este fue de 14.9%. Según lo propuesto por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el 2030 se estima que este porcentaje sería del 12%.

A continuación, se muestra la proyección de la disminución del porcentaje del presupuesto público ejecutado que se pierde por corrupción e inconducta funcional, considerando el horizonte de análisis de la política.

**Tabla N° 3 Proyección de la disminución del porcentaje del presupuesto público ejecutado que se pierde por corrupción (2021-2030)**

Fuente: Elaboración propia

Si a los porcentajes obtenidos los multiplicamos por el % del Producto Bruto Interno (PBI) que expresa la disminución del perjuicio económico al Estado obtenemos el beneficio anual expresado como % del PBI (Ver Tabla N° 4).

**Tabla N° 4 Beneficio anual expresado como % del PBI**



Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se muestra el beneficio económico en los años que forman parte del horizonte de análisis de la política.

**Tabla N° 5 Beneficio económico de la PNILCC**



Fuente: Elaboración propia

Para estimar los beneficios de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se evaluó el Valor Actual Neto (VAN) de los beneficios derivados de reducir la ocurrencia de actos de corrupción en la administración pública.

**Beneficio Neto**

En la tabla que se muestra a continuación se observa el detalle del Beneficio Neto de la PNILCC.

**Tabla N° 6 Beneficio Neto de la PNILCC**



**Fuente: Elaboración propia**

Al Beneficio Neto se le aplica una tasa social de descuento, determinada oficialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, de 9%, de modo que se pueda calcular el Valor Neto presente de la inversión. En ese sentido, se asume que si el valor es igual o mayor a cero implica rentabilidad social. Al respecto, de aplicar la tasa social de descuento al Beneficio Neto se obtiene el valor de **S/. 7,433 millones**, en consecuencia, al ser mayor a cero, permite afirmar que permite afirmar que la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es rentable socialmente.

**Apéndice 1**

**Supuestos asumidos para el análisis de costos**

Para realizar el análisis de costos se asumieron los siguientes supuestos:

* En lo que respecta a los costos del equipo humano se ha tomado como referencia lo que plantea la Ley SERVIR para la compensación de los diferentes niveles de puestos en una Organización (ver Decreto Supremo Nº 138-2014-EF, Reglamento de Compensaciones de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias y Directiva Nº 003-2016-SERVIR/GPGSC “Reglas procedimentales para valorizar los puestos de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, cuya aprobación se formalizó a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 100-2016-SERVIR-PE). En ese sentido se costea una estructura como la que se muestra a continuación y que cumple con los criterios de valorización señalados:



* Se ha considerado una tasa promedio de crecimiento salarial anual del 1%.
* Se ha considerado una tasa promedio de crecimiento anual del 10% para lo referente a costos comunicacionales.
* Se ha considerado una tasa promedio de crecimiento anual del 6% para alquileres de equipamiento de cómputo.
* Se ha considerado una tasa promedio de decrecimiento anual del número de trámites generados del 10%.

**Apéndice 2**

**Costos estimados por cada Alternativa de Solución de la PNILCC**



































































**Apéndice 3. Histórico del Producto Bruto Interno (PBI) por sectores productivos**

**ANEXOS**

**ANEXO 1**

**PROYECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS**

A continuación, se presenta un análisis específico de las cuatro perspectivas definidas para la evaluación del problema público de esta Política: “Ocurrencia de la corrupción en la Administración Pública”. Para tal fin, el primer paso fue identificar variables estratégicas; es decir, factores con una incidencia significativa sobre la proyección de la perspectiva. Luego, en cada variable estratégica se determinó un escenario tendencial, que es una proyección que asume el comportamiento histórico de la variable; y un escenario óptimo, que presenta la mejor situación que se podría esperar de la variable estratégica. También se presenta un escenario exploratorio, en el que se presentan situaciones ajenas a la variable que podrían tener una incidencia significativa en su proyección.

* **Evaluación de la variable estratégica**

Posteriormente, se hace una valoración de los tres escenarios (tendencia, óptimo y exploratorio) de cada variable, y para ello se considera -de manera especial- los objetivos y líneas de acción (alternativas de solución) que se plantean en la nueva Política Nacional. Así, se define si la variable estratégica analizada tendrá, al 2030, una proyección muy negativa (escenario tendencial), muy positiva (escenario optimo), o alguna intermedia, según el cuadro “Calificación de las variables estratégicas”.

* **Evaluación de la perspectiva**

Evaluadas todas las variables estratégicas de la perspectiva, se obtiene una conclusión sobre la proyección de la perspectiva, la cual puede ser tendencial, si la mayoría de variables tiene una proyección negativa; óptima, si la mayoría de variables tiene una proyección positiva, o intermedia, según el cuadro “Análisis de la perspectiva”. Definido el tipo de proyección de la perspectiva, se cuantifica la situación futura deseada de la misma, a partir de la data actual e histórica de la perspectiva, se define cuantitativamente la situación futura deseada.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSPECTIVA CIUDADANA** | | | | |
| **Variable estratégica (1)** | **Escenario tendencial (2)** | **Escenario óptimo (3)** | **Escenario Exploratorio (4)** | **Análisis de la variable estratégica** |
| Recurrencia de casos emblemáticos de corrupción | Aparecen nuevos casos de corrupción que vinculan a altas autoridades y funcionarios públicos. Los procesos por casos de corrupción que se vienen siguiendo, en el sistema de justicia, contra altas autoridades se dilatan y no se logran sentencias justas ni oportunas. | Casos emblemáticos de corrupción llegan a término, con sentencias justas y oportunas contra altas autoridades políticas. Se reducen significativamente los casos que vinculan a altas autoridades tanto a nivel nacional como subnacional. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva moderada.** Si bien, la aparición de nuevos casos de corrupción es una variable difícil de controlar, el fortalecimiento del Sistema de Justicia Anticorrupción, coadyuvará a lograr sanciones justas y oportunas; lo cual será un desincentivo para que aparezcan nuevos casos de corrupción. |
| Coherencia entre el liderazgo político y la implementación de decisiones públicas en materia de integridad | Altas autoridades, funcionarios y servidores públicos distanciados de los principios de integridad pública; o vinculados con personajes comprometidos con casos de corrupción que perjudican la imagen institucional y generan desconfianza en las entidades públicas. | Altas autoridades, funcionarios y servidores públicos se apropian y posicionan en la sociedad el enfoque de integridad pública como el nuevo estándar de las entidades de la administración pública. | Otros discursos como el de modernización de la gestión, estado abierto, digitalización se posicionan con mayor fuerza que el de enfoque de integridad en el aparato público. | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva**. Toda vez que la Política plantea una línea de trabajo de comunicación sostenida con altas autoridades y funcionarios con capacidad de decisión en las entidades públicas. Asimismo, se prevé fortalecer los mecanismos de comunicación, tanto de la Secretaría de Integridad Pública, como los de las instancias que ejercen la función de integridad. |
| Recomposición de la agenda publica | El problema de la corrupción persiste como uno de los tres más importantes del país. La corrupción se mantiene como una de las preocupaciones principales de la ciudadanía, pues se asocia con el mal desempeño de las entidades públicas y con los demás problemas que aquejan a la sociedad. | La problemática de corrupción empieza a superarse y ya no figura dentro de los tres problemas principales del país. Ello, en merito a las medidas de prevención, difusión y comunicación del enfoque de integridad, adoptadas en el marco de la Política Nacional que empiezan a mostrar resultados. | Aparecen otras problemáticas de gran relevancia y preocupación social: salud, desempleo, pobreza, entre otras. | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva.** En tanto, la implementación de la Política Nacional contribuirá a posicionar el discurso de integridad y a visibilizar el trabajo del Estado en esta materia. Por otro lado, también se prevé que a partir de la pandemia por el brote de la covid-19, habrá un reposicionamiento de las problemáticas nacionales, en donde la salud, la pobreza, y la falta de empleo, que tendrán lugares más importantes de los que actualmente ocupan. |
| **Análisis de la perspectiva ciudadana:**  A partir del análisis de las **3 variables estratégicas** se advierte que, al 2030, esta perspectiva tendrá una **proyección de** **mejora** **moderada**. Si bien la aparición de nuevos casos de corrupción que vinculen a altas autoridades y funcionarios con capacidad de decisión es un escenario tendencial crítico, constituye un aspecto central de la estrategia de la Política Nacional posicionar el discurso de integridad en altas autoridades, funcionarios con capacidad de decisión y servidores públicos. Asimismo, se prevé un trabajo sostenido con la ciudadanía, a efectos de que conozca el trabajo que desde el estado se viene desarrollando en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Por otro lado, la estrategia de esta Política también apunta a fortalecer al Sub Sistema Anticorrupción.  De acuerdo, la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción de Proética (2019), la corrupción es el segundo problema más importante del país, el 62 % de participantes refirió que este era uno de los 3 problemas más importantes del país. En ese sentido, considerado que del análisis de comportamiento de datos sobre percepción de corrupción de los últimos 10 años se observó un nivel de varianza del 12 %.  **En ese sentido, de acuerdo a las proyecciones vistas a partir de las variables estratégicas y en función al análisis de los datos históricos sobre esta variable, se espera que al 2030 la percepción ciudadana sobre la problemática de corrupción pase de un nivel alto (60 % - 80 %) a un nivel medio (41 % - 60 %).**  Operacionalización de la variable percepción ciudadana de corrupción:  (0-20 %) “muy baja”; (21 % - 40 %) “bajo”; (41 % - 60 %) “Media”; (61 % - 80 %) “Alta”; y (81 % - 100 %) “Muy alta”. | | | | |

1. Aspectos que tienen una alta incidencia en la modelación y construcción del escenario futuro.
2. Es el escenario de futuro que refleja el comportamiento de las variables estratégicas, respetando la continuidad de su patrón histórico.
3. Es el mejor estado posible de cada variable estratégica frente al cual puede compararse cualquier situación pasada, presente o futura
4. Son posibles modificaciones en el comportamiento de algunas variables estratégicas que generan cambios significativos en el futuro, diferentes a los previstos en el escenario tendencial.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSPECTIVA ECONÓMICA** | | | | |
| **Variable estratégica** | **Escenario tendencial** | **Escenario óptimo** | **Escenario Exploratorio** | **Análisis de la variable estratégica** |
| Institucionalización de una estrategia de prevención en el gasto público | Estrategia de prevención limitada y se focaliza solo en la gran inversión. | Estrategia de prevención fortalecida, con un enfoque de apoyo a la gestión y se desarrolla en todo nivel. | Incremento significativo del gasto público en obras y/o programas asistenciales que reduce las posibilidades de implementar una estrategia de prevención apropiada. | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva**. En tanto, la implementación de la Política Nacional además de abordar un enfoque de integridad, en la actuación del funcionario y servidor pública, plantea un enfoque de riesgos de corrupción, con mayor transparencia y vigilancia ciudadana.  Por otro lado, si bien existe la posibilidad de que aparezcan nuevas situaciones de emergencia, no es un escenario probable. |
| Capacidad de los Órganos de Control superior | Persisten limitaciones operativas en los Órganos de Control Superior (Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Oficinas de Servicio Civil y Procuraduría General) para el ejercicio de sus funciones. Dichas limitaciones afectan su capacidad operativa limitando el impacto de su trabajo. | Los Órganos de Control Superior (Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Oficinas de Servicio Civil y Procuraduría General) se ven fortalecidos, asegurando su plena autonomía y recursos económicos. Progresivamente, se van mejorando el presupuesto para asegurar el adecuado funcionamiento de los OCI. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva moderada** en la evaluación de esta perspectiva.  El fortalecimiento de los Órganos de Control Superior ha constituido una estrategia de la actual Política; no obstante, aún no se cierran las brechas en términos de recursos económicos. Si bien este trabajo será progresivo, el impacto es positivo moderado; en tanto que, al incrementarse el gasto público, los recursos para el fortalecimiento serán limitados. |
| Mejora en la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad | Persiste una cultura y resistencia a implementar un adecuado y eficiente Sistema de Control Interno. Las entidades públicas no priorizan la implementación de su sistema de control interno, el cual no contribuye con la implementación del modelo de integridad | La mayoría de entidades públicas tiene implementado un Sistema de Control Interno eficiente, lo que contribuye con la implementación del modelo de integridad |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá proyección **positiva moderada**. La implementación del SCI al año 2020 es del 57%, es un modelo reformulado en el año 2019, una implementación amplia en las entidades públicas con un sistema eficiente y de maduración permanente aportaría a la eficacia de la prevención. Si bien es un proceso que viene bien encamino y con recursos optimizados, lograr su plena implementación a nivel subnacional, representará un reto mayor al 2030. |
| Alcance en la implementación de la Función de Integridad | En razón de su reciente implementación se ha logrado un alcance diferenciado en la implementación de la función de integridad, el cual se ha visto desacelerado por la pandemia. Se ha logrado cobertura a nivel de ministerios del Poder Ejecutivo y aún existe una brecha en los niveles subnacional. La función de integridad no logra el alcance esperado, debido a su desconocimiento por parte de altas autoridades y funcionarios con capacidad de decisión. | Se alcanzan avances notables en la cobertura y calidad en la implementación de la función de integridad, en merito a una estrategia de comunicación y difusión sostenida por altas autoridades. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá un impacto **positivo** en la evaluación de esta perspectiva. En tanto, la Política Nacional además de abordar un enfoque de integridad, en la actuación del funcionario y servidor pública, plantea una línea de trabajo con altas autoridades para posicionar el discurso de integridad en las entidades públicas. Asimismo, la creación de un Sistema Nacional de Integridad dará un mayor impulso al proceso de implementación de la función de integridad. |
| **Análisis de la perspectiva económica:**  A partir del análisis de las **4 variables estratégicas** se advierte que, al 2030, esta perspectiva tendrá una **proyección de mejora** **moderada**. Si bien el incremento del gasto público en obras y programas de asistencia social se presenta como un riesgo crítico, el primer objetivo prioritario de esta Política es Fortalecer la Capacidad Preventiva de las entidades públicas, y bajo este marco, dos líneas de acción prioritarias son maximizar el alcance de la función de integridad e instituir una estrategia articulada de riesgos de corrupción. Siguiendo ese orden de ideas, también se va a fortalecer el control interno de las entidades públicas y a los órganos de control institucional de la Contraloría General de la República.  La Contraloría General de la República, en su Informe “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria”, hace una valorización –en el marco de servicios de control posterior– del perjuicio ocasionado al Estado, proyectando una medición agregada de la corrupción e inconducta funcional a nivel nacional. Así, sobre la base de la extrapolación del perjuicio identificado sobre el monto de la materia observada en una auditoría, se identificó que alrededor del 14.9% de la ejecución presupuestaria se habría perdido en un año por este fenómeno.  **De acuerdo a la evaluación realizada de proyección de mejora moderada, se espera que al 2030 el perjuicio económico que causa la corrupción al Estado disminuya, en términos de lograr una reducción del porcentaje estimado por la CGR, pasando de una pérdida aproximada de la ejecución presupuestaria del 15 %, es decir del presupuesto nacional del 2021, a una pérdida del 12 %, en el 2030.** | | | | |

**Perspectiva estatal: capacidad preventiva y capacidad sancionadora frente a la corrupción**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSPECTIVA ESTATAL: CAPACIDAD PREVENTIVA** | | | | |
| **Variable estratégica** | **Escenario tendencial** | **Escenario óptimo** | **Escenario Exploratorio** | **Análisis de la variable estratégica** |
| Institucionalización de un Sistema Nacional de Integridad | Fortalecimiento limitado en términos de recursos y competencias de las entidades vinculadas con la prevención de la corrupción, con una débil articulación que no favorece la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. | Conformación de un Sistema Nacional de Integridad que asegure la articulación efectiva para la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá proyección **muy positiva**, pues este es un aspecto contemplado en la Política Nacional que tiene alta relevancia y respaldo por la OCDE. |
| Incorporación del enfoque de integridad en la gestión de la entidad pública | La institución de una cultura de integridad presenta avances modestos debido al desconocimiento y/o poco interés que suscita esta temática en altas autoridades y funcionarios con capacidad de decisión. | La institución de una cultura de integridad logra avances sobresalientes debido al reconocimiento e interés que suscita en altas autoridades y funcionarios con capacidad de decisión, reforzándose la cultura de integridad a nivel institucional. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá proyección **positiva**. Toda vez que la estrategia planteada en la Política Nacional desarrolla una línea de trabajo específica con altas autoridades y funcionarios con capacidad de decisión. Asimismo, se plantea fortalecer la estrategia de comunicación de la SIP y de las instancias que ejercen la función de integridad. |
| **Análisis de la perspectiva estatal – Capacidad Preventiva**:  A partir del análisis de las 2 variables estratégicas se advierte que, al 2030, esta perspectiva tendrá una **proyección óptima**. Ello en razón a que las dos variables estratégicas son líneas de trabajo prioritarias de la Política Nacional y gozan de un amplio reconocimiento y acepción por su alta relevancia tanto a nivel nacional como internacional, pues ambas son recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  De acuerdo, a línea de base construida por la Secretaría de Integridad Pública, durante el primer trimestre del 2019, 169 entidades habían implementado la función de integridad; y el Índice de Capacidad Preventiva fue 0.26, en una escala de 0 a 1, donde 0 supone la ausencia de mecanismos estandarizados de prevención de la corrupción y 1, un nivel óptimo de prevención.  **En ese sentido, tomando en consideración el análisis descrito en el párrafo anterior, se espera que al 2030, a partir de las medidas adoptadas por la Política Nacional, se logre una efectiva implementación de la función de integridad en las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y del incremento del Índice de Capacidad Preventiva (Estándar de Integridad 2021): en entidades del nivel nacional a 0.7, entidades del nivel regional a 0.5 y, del nivel local a 0.3.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSPECTIVA ESTATAL: CAPACIDAD SANCIONADORA** | | | | |
| **Variable estratégica** | **Escenario tendencial** | **Escenario óptimo** | **Escenario Exploratorio** | **Análisis de la variable estratégica** |
| Incremento de casos de corrupción por periodo | Incremento significativo de los casos de corrupción a partir del mayor gasto ejecutado y los del limitado alcance de la función de integridad y los débiles mecanismos de control interno. | Disminución considerable y consistente por periodo de los casos de corrupción, a partir de la adecuada implementación de la función de integridad y el control interno de las entidades públicas. Así como del fortalecimiento de las entidades que conforman el sistema de justica anticorrupción. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva moderada.** Si bien en esta variable estratégica, el incremento del gasto público representa un factor crítico, incrementar el alcance de la función de integridad, optimizar el sistema de control interno de las entidades públicas y el fortalecimiento de los Órganos de Control Institucional son medidas priorizadas por la Política Nacional que mitigaran ese riesgo. De igual manera, el fortalecimiento de las entidades del Sistema de Justicia Anticorrupción, coadyuvará a reducir considerablemente los casos en trámite y desincentivará que aparezcan nuevos casos de corrupción. |
| Nivel de fortalecimiento de las instituciones del Sub Sistema Anticorrupción | Persisten limitaciones en términos de recursos económicos: monetarios, humanos y logísticos. Los operadores encargados de la investigación no cuentan con equipos multidisciplinarios suficientes para los casos de corrupción. | Se mejora significativamente los recursos de las entidades del Sistema de Justicia. Se cierran las brechas en terminas de personal, recursos económicos y logísticos.  Se implementan centros de apoyo especializado (equipo forense anticorrupción) que cuenta con los suficientes recursos y tecnología para realizar eficientemente su trabajo; asimismo, se mejora | El Estado no cuenta con recursos públicos suficientes para fortalecer a las entidades del sistema de justicia anticorrupción, debido a la situación económica del país y a la aparición de nuevas problemáticas que requieren la priorización del gasto público. | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva moderada.**  Si bien fortalecer la capacidad sancionadora constituye un objetivo prioritario de la Política Nacional, y en ese marco, un tema central es fortalecer a las entidades vinculadas con la investigación y sanción de casos de corrupción, los recursos siempre resultan limitados, y existen muchas problemáticas que requieren al igual que esta una priorización en el gasto público. |
| Nivel de avance en la articulación de las instituciones del Sub sistema Anticorrupción | Entidades del sistema de justicia desarticuladas, con información y bases de datos que no interoperan, sin protocolos de actuación conjuntos | Entidades del sistema de justicia debidamente articuladas con información y bases de datos que interoperan, con adecuados protocolos de actuación. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva.**  Mejorar la articulación es una de las alternativas de solución priorizadas en la Política Nacional, con ello se busca lograr eficiencia y mayor eficacia en las entidades vinculadas con la investigación y sanción de casos de corrupción. En esa línea, cabe resaltar que los avances tecnológicos representan una oportunidad para avanzar de forma más acelerada en la articulación interinstitucional. |
| Nivel de fortalecimiento de la sanción administrativa | Persisten limitaciones para una oportuna sanción administrativa. La regulación continúa dispersa y el procedimiento de sanción es poco predecible e ineficiente, generando mayor impunidad. Tampoco existe información actualizada y disponible sobre los resultados. | Mejora la capacidad de sanción administrativa de las entidades públicas, a partir de un marco normativo integral, que asegura un procedimiento predecible y eficiente, con investigaciones que se realizan en plazos breves. Asimismo, exista un sistema que permita asegura el monitoreo de los procedimientos e información confiable. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una proyección **positiva moderada.**  Si bien unificar el marco normativo y asegurar la capacidad de los órganos encargados de los procedimientos es una medida pendiente desde hace mucho tiempo, asegurar su optima implementación en las entidades de la administración pública, puede ser un objetivo más complejo de lograr. |
| **Análisis de la perspectiva estatal – Capacidad Sancionadora:**  A partir del análisis de las **4 variables estratégicas** se advierte que, al 2030, esta perspectiva tendrá una proyección de **mejora** **moderada**. El incremento de casos de corrupción ha sido una constante desde que se implementó el Nuevo Código Procesal Penal, e incluso cuando se creó el Sub Sistema Anticorrupción; no obstante, habiendo transcurrido 4 años desde su implementación progresiva y considerando el fortalecimiento que se va realizar a nivel de recursos económicos, y de organización; así como los importantes proyectos que hay en materia de interoperabilidad, digitalización y fortalecimiento tecnológico, se espera mayor eficiencia en el desempeño de los operadores del sistema.  Analizando la data disponible, generada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se tiene que, a diciembre del 2018, teníamos una carga procesal total de 40759 casos por denuncias de corrupción, de los cuales, 33931 (83.2 %) correspondían a casos en trámite y 6828 (16.8 %), a casos en ejecución de sentencia. En el 2020 hubo un incremento de la carga procesal total aproximado de 8000 casos, pasando a 48777 casos por denuncias de corrupción; no obstante, la proporción de los casos en trámite (40623 – 83.3 %) y en ejecución de sentencia (8154 – 16.7 %) se mantuvo constante, en relación al año 2018.  **En ese sentido, se espera que al 2030, el porcentaje de sentencias en ejecución se incremente en un 50%, pasando de 16.7% en el 2020 a 25% en el 2030.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSPECTIVA DE LA TOLERANCIA** | | | | |
| **Variable estratégica (1)** | **Escenario tendencial (2)** | **Escenario óptimo (3)** | **Escenario Exploratorio (4)** | **Análisis de la variable estratégica** |
| Nivel de comprensión del discurso de integridad en la ciudadanía. | La integridad no es considerada un aspecto central de la función pública. Persiste el desconocimiento sobre su implementación y su eficacia en el logro de los objetivos institucionales y del desarrollo del país. | La integridad es considerada como un aspecto esencial de la función pública, de vital importancia para asegurar el adecuado desempeño de funcionarios y servidores públicas. La ciudadanía conoce más sobre su contenido y eficacia para el desarrollo del país. | Otros discursos de modernización de la gestión, estado abierto, digitalización se posicionen con mayor fuerza en la sociedad. Otros problemas como la inseguridad ciudadana, la pobreza, la falta de empleo se posicionan con mayor relevancia en la sociedad. | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una incidencia **positiva** en la proyección de esta perspectiva. Puesto que en la Política Nacional se plantea el desarrollo de campañas sostenidas para comunicar el enfoque de integridad, así como todo el trabajo que se realiza desde el Estado para asegurar una cultura de integridad. |
| Nivel de incidencia de la corrupción menor | Se mantienen niveles altos de corrupción blanca, aquella que vincula al ciudadano con funcionarios de mandos medios/bajos, a efectos de tener beneficios, agilizar trámites, o evitar multas. | La corrupción menor es reducida, a partir del discurso de integridad y cultura de valores internalizado en el servidor público; asimismo, el ciudadano es menos proclive a aceptar beneficios a cambio de pagos indebidos. |  | De la evaluación de los escenarios tendencial y óptimo, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una incidencia **positiva moderada** en la proyección de esta perspectiva. El incremento de la pobreza y el desempleo a causa de la pandemia, pondrá en situación de vulnerabilidad a muchas más personas, que van a depender de los servicios públicos y programas de asistencia social, y debido a los limitados recursos y deficiencia en su distribución serán más vulnerables a la comisión de actos de corrupción. |
| Nivel de comprensión y sensibilidad de la ciudadanía frente al problema de la corrupción | Ciudadanía indiferente a la problemática de corrupción y con una cultura de tolerancia medio/alta frente a la corrupción, especialmente a la corrupción baja. | Ciudadanía intransigente con la corrupción en el aparato público, intolerante frente a la corrupción a todo nivel. | Ciudadanía distanciada de las entidades públicas, descontenta con el funcionamiento del Estado. | De la evaluación de los escenarios tendencial, óptimo y exploratorio, se advierte que esta variable, al 2030, tendrá una incidencia **positiva** en la proyección de esta perspectiva. Puesto que en la Política Nacional se tiene prevista una línea de trabajo vinculada con la ciudadanía, para mejorar su comprensión sobre el problema y reducir su nivel de tolerancia. |
| **Análisis de la perspectiva Tolerancia**:  A partir del análisis de las **3 variables estratégicas** se advierte que, al 2030, esta perspectiva tendrá una proyección de **mejora** **moderada**. Si bien el incremento de la corrupción menor se presenta como un riesgo crítico, se destaca que el segundo objetivo prioritario de esta Política es Fortalecer la Integridad del servidor público, y en esa línea se prevé trabajar en fortalecer la cultura de integridad de los servidores públicos; así como desarrollar una estrategia de promoción de la integridad con la ciudadanía, a efectos de que comprendan los efectos de la corrupción y sensibilizar respecto de esta problemática.  De acuerdo, la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción de Proética (2019), el porcentaje de personas con tolerancia alta o media frente a la corrupción es bastante elevado. Así, tenemos que el porcentaje de personas con la alta tolerancia representa el 5%, la tolerancia media, el 68%, y el rechazo definido, el 27%. Esta política plantea tener una incidencia significativa en el rechazo definido. En dicha categoría se encuentran personas están en total desacuerdo con la corrupción y, por tanto, no la justifican y mucho menos, la aceptan. Se podría decir que son intransigentes o intolerantes con esta.  De acuerdo a la proyección de las variables estratégicas y en función a los datos señalados en el párrafo anterior, se espera que al 2030 se incremente el porcentaje de personas que tienen un rechazo definido frente a la corrupción, pasando de un porcentaje bajo de personas que tienen un rechazo definido (0 – 33 %) a un nivel porcentaje medio (34 % - 67 %).  Operacionalización de la variable nivel de ciudadanos tolerantes media frente a la corrupción:  (0-20 %) “muy bajo”; (21 % - 40 %) “bajo”; (41 % - 60 %) “Medio”; (61 % - 80 %) “Alto”; y (81 % - 100 %) “Muy alto”. | | | | |

**Calificación de la variable estratégica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Descripción** |  |
| Proyección muy negativa | La variable analizada tiene una proyección al 2030 muy similar a la que se describe en el escenario tendencial. | **ESCENARIO TENDENCIAL** |
| Proyección negativa | La variable analizada tiene una proyección negativa al 2030 pero presenta ligeras mejoras frente a la que se describe en el escenario tendencial. |  |
| Proyección negativa moderada | La variable analizada tiene una proyección al 2030 que muestra una mejora considerable en relación la situación descrita en el escenario tendencial pero aún se encuentra lejos del escenario óptimo; no obstante, mantiene más atributos del escenario tendencial. |  |
| Proyección positiva moderada | La variable analizada tiene una proyección al 2030 que muestra una mejora considerable en relación la situación descrita en el escenario tendencial pero aún se encuentra lejos del escenario óptimo; no obstante, mantiene más atributos del escenario óptimo. |  |
| Proyección positiva | La variable analizada tiene una buena proyección al 2030 pero no logra la situación que se describe en el escenario óptimo. |  |
| Proyección muy positiva | La variable analizada tiene una proyección al 2030 muy similar a la que se describe en el escenario óptimo | **ESCENARIO ÓPTIMO** |

**Análisis de la perspectiva**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categorías** | **Descripción** |
| Proyección tendencial | Las variables estratégicas de la perspectiva, marcadamente, tienen una proyección negativa o muy negativa. |
| Proyección negativa moderada | La mayoría de variables estratégicas de la perspectiva tienen una proyección negativa o negativa moderada, pudiendo tener alguna con una proyección positiva o positiva moderada. |
| Proyección neutral | Las variables estratégicas de la perspectiva tienen una proyección negativa en algunos casos y positiva en otros; o son neutrales en todos los casos. |
| Proyección de mejora moderada | La mayoría de variables estratégicas de la perspectiva tienen una proyección positiva o positiva moderada, pudiendo tener alguna con una proyección negativa o negativa moderada. |
| Proyección optima | Las variables estratégicas de la perspectiva, marcadamente, tienen una proyección positiva o muy positiva. |

**ANEXO 2**

**Aspiraciones de las Personas.**

Así las cosas y como quiera que para determinar hacia donde deben apuntar las intervenciones del Estado en su lucha contra la corrupción, se han considerado los resultados obtenidos de los procesos de recopilación, análisis y validación de la información y evidencias que se desarrollaron para la actualización de la política. Entre los desarrollados, se ha puesto especial atención a los resultados del ***Taller “Hacia Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”*** (en adelante el Taller para elaboración del PNILCC)**,** el cual fue realizadopara la correcta implementación de la **PNILCC vigente**, a fin de priorizar las propuestas de intervención estatal para la lucha contra la corrupción; así, en esa dirección, se consideraron como insumos principales las propuestas de acciones/intervenciones resultantes del citado Taller (que se listan más adelante en **Anexo 1.1**), y se procedió a realizar una sistematización de las mismas, con la finalidad de seleccionar a través de la aplicación de una metodología de evaluación y calificación, las Alternativas de Solución, en acuerdo a lo esperado por los actores principales involucrados.

Asimismo, se destaca que entre los participantes del mencionado evento se encuentran los representantes de los siguientes poderes y entidades: Congreso de la República, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, Acuerdo Nacional, Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo, Presidencia del Consejo de Ministris (PCM), Ministerio de Justicia (MINJUS), Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética) y Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).

**Contexto del Taller.**

En ese sentido, se realizaron las sesiones de trabajo con el objetivo de ir determinando los elementos para la elaboración de las propuestas de intervenciones, acciones y recomendaciones que contendría el Plan; para ello, se consideraron las limitaciones en la disposición de la información sobre la epidemiología de la corrupción y por supuesto, las limitaciones en el tiempo disponible para la emisión de las propuestas mencionadas para el Plan, ya que se contó con 50 días para ello.

Respecto de las limitaciones conceptuales y metodológicas, se centraron en los conceptos “corrupción”, “integridad”, “anticorrupción”, los que tienen diversos enfoques y no siempre encajan entre sí; así como sobre las limitaciones de los insumos, ya que hay diversas iniciativas y documentos previos, que provienen de enfoques, conceptos y objetivos diferentes entre sí.

Asimismo, se destaca que la fuente para la construcción de conceptos, han sido insumos legitimados por el Estado y la opinión pública, tales como:

i) La Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobada por D.S. 092-2017-PCM;

ii) El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016;

iii) El Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú.

iv) Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016 (noviembre 2016) [[18]](#footnote-18);

v) Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente (2017);

vi) Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (diciembre 2016);

vii) 100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción (junio 2017).

**Metodología del Taller.**

Se recolectaron y organizaron los insumos en acuerdo a los siguientes procedimientos:

* 1. Procedimiento conceptual:
     + Organización de los conceptos, enfoques y ejes de trabajo de los insumos conceptuales
     + Integración de los conceptos “integridad” y “anticorrupción”
     + Resultado: una secuencia lógica de integración conceptual
  2. Procedimiento de clasificación de recomendaciones
     + Clasificación de las recomendaciones de las fuentes base
     + Elaboración de tablas matriz de clasificación de recomendaciones
     + Resultado: tres tablas de recomendaciones (prevención, riesgos, sanción)
  3. Procedimiento de priorización
     + Calificación de la importancia y temporalidad de las recomendaciones de los insumos.
     + Incorporación de nuevas recomendaciones específicas (si fuera necesario)
     + Priorización de recomendaciones.

**La secuencia conceptual aplicada para la determinación de las propuestas de intervenciones y acciones fue la siguiente:**

1. Enfoques (Plan 2012-2016)
2. Ejes (Política de integridad)
3. Objetivos específicos (Política de integridad)
4. Recomendaciones
   * + Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016 (noviembre 2016).
     + Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente (2017).
     + Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (diciembre 2016).
     + 100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción (junio 2017).

**Resultados.**

* + Clasificación de recomendaciones de los documentos base en tres matrices de clasificación (prevención, riesgos, sanción) correspondientes a los ejes.
  + Organización de las recomendaciones en grupos temáticos en cada matriz de clasificación.

Resultado: tres matrices de clasificación de recomendaciones ordenadas en grupos temáticos.

Para llegar al resultado antes señalado, se aplicó el siguiente procedimiento de priorización de las intervenciones, acciones y recomendaciones:

Procedimiento de priorización

* Importancia. Califique según más prioridad (1) o menos prioritario (3) para reducir la corrupción:
  + 1 (es la base una acción/reforma/iniciativa, es la consecuencia final de una reforma)
  + 2 Medianamente importante (es una estrategia para una reforma)
  + 3 Importante (es una herramienta para una reforma)
* Temporalidad. Considera que se puede lograr a…
  + 1 corto plazo (1 año)
  + 2 mediano plazo (2 años)
  + 3 largo plazo (4 años)

Posteriormente al taller, se estudió cada recomendación en base a criterios complementarios, como por ejemplo: secuencia y acumulación; experiencias previas y accesibilidad,

**Consideraciones sobre los resultados.**

a) Se precisaron recomendaciones similares, sin embargo, provienen de documentos diferentes.

b) La redacción de las intervenciones y recomendaciones tienen diferentes tonos y estilos de redacción.

c) Las recomendaciones están tomadas literalmente de su fuente original.

El mencionado Taller, así como las sesiones de construcción colaborativa se orientaron a registrar los conocimientos, experiencias, y perspectivas de los servidores públicos, expertos y especialistas en la materia y miembros de la CAN, sobre cómo serían impactadas o cómo desean serlo, por la política en cuya construcción estaban participando. En ese sentido, se determinaron los elementos bases para la formulación del plan de trabajo a través del cual se priorizaron objetivos y alternativas de intervenciones, considerando para ellos insumos conceptuales tales como i) Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobada por D.S. 092-2017-PCM, ii) Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 y iii) Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú; también se tuvo como base insumos de recomendaciones contenidas en los siguientes documentos: i) Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016 (noviembre 2016), ii) Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente (2017), iii) Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo (diciembre 2016), y iv) 100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción (junio 2017).

De igual forma, se han considerado evidencias documentales, resultados de encuestas y otras herramientas aplicadas en el marco de eventos, estudios e investigaciones más relevantes respecto de lucha contra la corrupción e integridad pública, nacionales e internacionales, como por ejemplo el “Compromiso de Lima”.

**Aspiraciones y expectativas Resultantes del Taller.**

En ese orden de ideas, las aspiraciones y expectativas resultantes del Taller fueron recopiladas y organizadas de acuerdo a la importancia y temporalidad de las propuestas de intervenciones formuladas.

Así, los participantes en el Taller, clasificaron las recomendaciones contenidas en los documentos considerados “insumos conceptuales” (arriba listados), así como formularon propuestas de acciones e intervenciones en los siguientes ejes de intervención:

* + - 1. **Prevención:** Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción.
      2. **Riesgo:** Identificación y Gestión de Riesgos.
      3. **Sanción:** Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.

En consecuencia y partiendo del contexto anteriormente expuesto, y de los resultados del análisis realizado a la información suministrada por los actores referidos, así como de la complementación de dichos insumos a través de la revisión de las evidencias documentales, dinámicas aplicadas en el marco de eventos, estudios e investigaciones más relevantes respecto de lucha contra la corrupción e integridad pública, nacionales e internacionales, se tiene una aproximación bastante fidedigna sobre lo que esperan las personas, que se resume a continuación:

**Eje 1. El fortalecimiento de la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción** se plantea a través de lasacciones e intervenciones formuladas[[19]](#footnote-19) que se resumen de la siguiente forma:

1. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.
2. Instauración de una cultura de integridad y de ética pública.
3. Gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses.
4. Interoperabilidad y Gestión de Información.
5. Creación del Sistema Nacional de Integridad.

**Eje 2. La Identificación y Gestión de Riesgos** se plantea a través de lasacciones e intervenciones formuladas[[20]](#footnote-20) que se resumen de la siguiente forma:

1. Garantía de Integridad en las contrataciones públicas (obras, bienes y servicios).
2. Fortalecimiento de la gestión de denuncias y mecanismos de protección al denunciante.
3. Impulso de una Carrera pública meritocrática (Servicio Civil).
4. Consolidación del control interno y fortalecimiento de la identificación y gestión de riesgo al Interior de cada Entidad Pública.

**Eje 3. La Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción** se plantea a través de lasacciones e intervenciones formuladas[[21]](#footnote-21) que se resumen de la siguiente forma:

1. Consolidación y reforzamiento del procedimiento administrativo disciplinario.
2. Reforzamiento del Sistema de Justicia Penal, a través del fortalecimiento de la Administración de justicia.
3. Fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Control.
4. Fortalecimiento de los mecanismos para recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública.
5. Fortalecimiento del sistema de defensa jurídica del Estado.

**ANEXO 2.1**

Del Taller **“Hacia el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción”**, se recogieron los siguientes resultado

|  |  |
| --- | --- |
| **Propuesta de intervención, acción y /o recomendación** | **Nombre del Documento que sustenta la propuesta intervención, acción y /o recomendación.** |
| La CAN debe integrar más miembros con derecho a voto. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Se debe fortalecer la autonomía de la CAN con la finalidad que coadyuve a las políticas públicas contra la corrupción | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer a la Coordinación General de la CAN para que asuma la responsabilidad de implementar las recomendaciones del Estudio de Integridad en el Sector Público elaborado por la OCDE | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La CAN deberá llevar los registros estadísticos de las denuncias administrativas y penales y sus resultados a nivel nacional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La CAN debe evaluar de manera periódica el marco normativo anticorrupción con el fin de identificar vacíos o deficiencias, implementando mejoras al mismo. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) constituye un espacio fundamental para articular esfuerzos y coordinar acciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para proponer políticas dirigidas a prevenir y sancionar la corrupción. La Comisión Presidencial de Integridad considera muy importante fortalecer la CAN mediante las siguientes propuestas: - Incorporar entre sus miembros a los titulares del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Unidad de Inteligencia Financiera, Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones. - Incorporar entre sus miembros, una vez que estas instituciones sean creadas, a los titulares de la Procuraduría General del Estado, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Oficina de Integridad. - Evaluar la ampliación del derecho a voto a otros miembros de la CAN. - Asegurar la asignación de recursos adecuados a la Coordinación General de la CAN, a fin de que pueda cumplir eficiente y oportunamente sus funciones.  - Fortalecer los consejos regionales anticorrupción e institucionalizar un mecanismo de coordinación eficaz entre ellos y la CAN. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Para fortalecer la Unidad de Coordinación General (UCG) de la CAN, el Perú podría enmendar la Ley para clarificar los criterios de selección del Coordinador General y aclarar las reglas de ejercicio del cargo y remoción. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La CAN podría beneficiarse al enfocarse en su mandato central de garantizar la coordinación y la coherencia de las políticas de integridad y debería dar seguimiento y comunicar la situación de los planes nacionales anticorrupción. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Desarrollar las capacidades de la CAN en la gestión de la información y comunicación mejoraría su impacto y fortalecería su enfoque. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La Unidad de Coordinación General de la CAN podría fortalecerse incorporándola formalmente en la estructura organizacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como Organismo Técnico Especializado. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para apoyar las funciones de la CAN, el Perú podría fortalecer el conocimiento sobre gestión pública de la Unidad de Coordinación General y crear una o dos posiciones adicionales dedicadas a la gestión y análisis de datos cuantitativos. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La CAN podría fortalecerse ampliando su composición con actores clave que actualmente no forman parte de la Comisión; idealmente, esto ocurriría antes del desarrollo del próximo Plan Nacional Anticorrupción (2017-21). | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para garantizar que los objetivos políticos se traduzcan en acciones concretas, el Plan Nacional Anticorrupción y otras decisiones de la CAN deben ser incluidos en los planes operativos de sus miembros. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para promover aún más el impacto y aumentar el apropiamiento de las instituciones miembros de la CAN, se podrían fomentar discusiones y decisiones técnicas mediante el establecimiento de dos sub-comisiones técnicas o grupos de trabajo: uno sobre prevención y el otro sobre cumplimiento de las imposiciones legales. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Perú podría considerar la posibilidad de otorgar a otros miembros de la CAN el derecho de voto para aumentar el apropiamiento y la responsabilidad de las decisiones tom|adas en la comisión por todos sus miembros. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA) deberían seguir promoviendo el desarrollo de planes regionales anticorrupción, garantizando que los mismos se construyan de manera participativa, con la participación de todos los actores clave. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Perú podría fortalecer las capacidades de las secretarías técnicas de las CRA a través de una estrategia centrada de desarrollo de capacidades y podría transferir fondos nacionales para apoyarlas. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para garantizar la coherencia y la transferencia de conocimientos entre el nivel nacional y el regional, se podría institucionalizar un mecanismo efectivo de coordinación entre la CAN y las CRA. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Un mecanismo, por ejemplo, una plataforma intranet o reuniones conjuntas periódicas, podría ayudar a garantizar el intercambio de experiencias e información entre las regiones a fin de mejorar el aprendizaje mutuo en el diseño y la aplicación de los planes regionales anticorrupción. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Aprobación del Código Electoral Nacional propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer el poder de investigación y sanción de la ONPE. Dotar con el personal necesario. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Supervisión permanente por parte de la ONPE de los recursos que financian a los partidos políticos. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Hacer efectiva la prohibición de donaciones anónimas a los partidos políticos. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Transparencia en la financiación privada a los partidos políticos. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementar el programa de financiamiento público conforme a lo establecido por la Ley N° 30414. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Prohibir que personas condenadas y procesadas por delitos graves como Corrupción, Narcotráfico, Lavado de Activos, Crimen Organizado y Terrorismo se presenten como candidatos de elección popular. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Exigir la bancarización obligatoria de todos los aportes dinerarios, ingresos y gastos de los partidos políticos a partir de una UIT y establecer sanciones pecuniarias y políticas correspondientes para los casos de incumplimiento. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Disponer que las organizaciones políticas conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Estado, publiquen el detalle del origen de sus fondos en calidad de declaración jurada y bajo responsabilidad de su tesorero y secretario general. La misma que deberá ser anual y realizarse a través de su portal web y/o diario oficial El Peruano. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Prohibir que personas condenadas por delitos graves, tales como corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, se presenten como candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, prohibir que las personas que sean condenadas por delitos graves, tales como corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, sean fundadores o ejerzan cargos directivos en las organizaciones políticas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que los candidatos declaren en sus respectivas hojas de vida, los procesos judiciales por este tipo de delitos en los que se encuentren comprendidos al momento de la postulación. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer como requisito para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, la presentación de una declaración jurada, que se hará pública, con la siguiente información: -El monto de impuestos pagados en los últimos cinco años. -Las fuentes y montos de sus ingresos de los últimos cinco años. Sus bienes inmuebles y muebles inscribibles en el país y en el exterior. -Cuentas bancarias, títulos valores, instrumentos financieros, en el país y en el exterior, así como el monto al que ascienden. - Las actividades, cargos o empleos, públicos y privados, remunerados o no, de los últimos cinco años. - Las personas jurídicas de las que ha sido socio o accionista en los últimos cinco años. - Las asociaciones civiles de las que ha formado parte en los últimos cinco años. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Asignar a la ONPE la facultad de calcular, en base a estudios de mercado y al historial de reportes, los costos de la campaña electoral de cada organización política, las que deberán acreditar la fuente de los ingresos calculados por el organismo electoral, admitiéndose prueba en contrario y permitiéndose los mecanismos de impugnación correspondientes al debido proceso. El incumplimiento de esta acreditación dará lugar a la imposición de sanciones pecuniarias y políticas que, en función a su gravedad, podrán llegar a la suspensión temporal o inhabilitación definitiva en el Registro de Organizaciones Políticas | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer un régimen de responsabilidades y sanciones -pecuniarias y políticas- por la recepción de aportes ilícitos y otras infracciones a la legislación sobre el financiamiento a la política, que comprenda tanto a los autores directos como a quienes pudieran encontrarse comprometidos a partir del ejercicio de los cargos directivos que ocupen en las organizaciones políticas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Hacer efectivo el impedimento de donaciones anónimas en favor de una organización política o de su campaña electoral, y sancionar a la organización política y al aportante que no hayan cumplido con revelar su identidad. Tratándose de las organizaciones políticas, las sanciones deberán comprender, en los casos más graves, sanciones de naturaleza política, tales como la suspensión o cancelación definitiva del registro. En el caso del aportante infractor, la sanción deberá ser pecuniaria. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Exigir la bancarización obligatoria de todos los aportes dinerarios, otros ingresos y gastos de las organizaciones políticas, a partir de una UIT, y establecer las sanciones pecuniarias y políticas correspondientes para los casos de incumplimiento. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que, durante el periodo de elecciones, los medios de comunicación estén obligados a reportar a la ONPE información sobre las contrataciones de publicidad que celebren con candidatos u organizaciones políticas. El plazo para dicho reporte es de siete días hábiles luego de celebrada la contratación. El reporte deberá contener, cuando menos, los detalles de los sujetos contratantes, el objeto y condiciones de contratación y el monto total a pagar por la prestación del servicio, debiendo adjuntarse una copia del contrato. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción y se sanciona con la inhabilitación del medio de comunicación para ser contratado para la transmisión de la franja electoral durante toda la campaña. La ONPE deberá publicar en su página web, de inmediato, la información que reciba de los medios de comunicación | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Prohibir que capitales extranjeros financien a las organizaciones políticas, salvo para actividades de formación, capacitación e investigación. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Las organizaciones políticas no podrán declarar ingresos procedentes de actividades de proselitismo que superen el 10% del total de sus ingresos obtenidos en cada ejercicio anual o proceso electoral. Deben identificar a cada uno de los aportantes cuya contribución total supere una UIT. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Incrementar a 200 UIT el tope de aportes, en dinero o en especies, de personas naturales y jurídicas a las organizaciones políticas en cada ejercicio anual o proceso electoral. Las personas naturales y jurídicas que aporten a las organizaciones políticas montos superiores a una UIT estarán obligadas a declarar ante la ONPE, en un plazo máximo de tres días de realizado el aporte; la ONPE facilitará dicha declaración empleando medios virtuales y hará pública la información en su portal web. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Asegurar que en la Ley de Presupuesto General de la República de cada año se incluya el monto correspondiente al financiamiento público directo a las organizaciones políticas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Disponer que las organizaciones políticas, en virtud del artículo 35 de la Constitución, publiquen el detalle del origen de sus fondos en calidad de declaración jurada y bajo responsabilidad de su tesorero y secretario general. La publicación deberá ser anual y realizarse a través de su portal electrónico y el diario oficial. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer un régimen de sanciones administrativas, pecuniarias y políticas, además de penales, por la entrega de información falsa o incompleta a las autoridades del sistema electoral, aplicable a los candidatos, representantes o personeros de las organizaciones políticas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Asegurar el ejercicio efectivo de facultades coactivas a los organismos del sistema electoral para garantizar el cumplimiento de las sanciones a las organizaciones políticas o personas naturales | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Fortalecer a la ONPE y al JNE, y dotarlos de los recursos tecnológicos, profesionales y presupuestales que sean necesarios para supervisar y fiscalizar, eficaz y oportunamente, con el máximo rigor, en los ámbitos nacional, regional y local, las obligaciones de las organizaciones políticas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| El programa de financiación pública contenido en la Ley de Organizaciones Políticas debe contar con recursos suficientes y ser aplicado efectivamente. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Con el fin de aumentar la confianza en los partidos políticos, el umbral actual para las donaciones anónimas podría ser prohibido o disminuido. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La transparencia en la financiación privada debería incrementarse para permitir el escrutinio público de los financieros de las campañas; al mismo tiempo, el Perú debería llevar a cabo verificaciones aleatorias de las actividades de las campañas para evaluar mejor en las actividades y gastos reales y detectar de manera más efectiva la financiación ilícita y no declarada. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Considerando que los partidos dependen en gran medida de fondos privados, se podría alentar a los donantes privados a compartir la responsabilidad de fortalecer la integridad en el financiamiento de la política. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para prevenir de manera más efectiva el abuso de los recursos estatales por parte de los partidos políticos y en las campañas, el Perú debería aumentar el uso de la educación y la concientización. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú debería fortalecer el poder de la ONPE para exigir documentos, materiales o testigos adicionales relacionados con los informes financieros, así como brindar los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Con el fin de asegurar una disuasión eficaz contra las actividades prohibidas y mejorar la conformidad, el Perú debería fortalecer las sanciones y mecanismos de imposición legal correspondientes. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Dado que los partidos necesitan apoyo para cumplir con los reglamentos, la asistencia técnica podría fortalecerse a través de una capacitación adaptada y de guías fáciles de usar para los funcionarios de esos partidos. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se debe permitir a los ciudadanos registrar las sospechas de violaciones de las regulaciones de financiamiento de campañas a través de un mecanismo de denuncias específico. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Transparentar información referida a empresas sancionadas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La OSCE deberá publicar un listado actualizado de las personas capacitadas por dicha entidad para ser jefes de logísticas y transparentar sus hojas de vida actualizadas. Las entidades públicas deberán consultar esta información cada vez que requieran contratar a un funcionario para dichas labores. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Todas las entidades públicas deben participar en el proceso de estandarización de productos dirigidos por Perú Compras, con la finalidad de impulsar la utilización de compras corporativas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Eliminar la posibilidad de que el Estado contrate publicidad con medios de comunicación sin llevar a cabo un proceso de selección. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Modificación de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento referido específicamente a los cambios introducidos por el Decreto Legislativo 1341 respecto a la prohibición de contratar a los ministros de Estado, Viceministros y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, debiendo volver al texto anterior. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Modernizar y rediseñar integralmente la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), de manera que garantice que cualquier ciudadano pueda acceder fácilmente a los documentos de cualquier proceso de contratación, incluyendo las adjudicaciones de menor cuantía, valiéndose de un solo indicador de búsqueda. La documentación deberá ser publicada en la página web del SEACE dentro del plazo de 24 horas después de haberse generado. Debe designarse a los responsables en cada entidad de enviar y publicar esta información y establecerse las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. La información cargada en la página web del SEACE debe corresponder a todos los documentos vinculados al proceso de selección, desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo aquellos documentos vinculados a la etapa de ejecución contractual (adendas, aprobaciones de adicionales de obra, laudos, sentencias judiciales, entre otros). | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que el Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE) verifique la veracidad de la información consignada por las personas naturales y jurídicas que figuren en el Registro Nacional de Proveedores. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Disponer que el Registro Nacional de Proveedores incluya información desagregada de las contrataciones de bienes, servicios y obras que el proveedor haya realizado con el Estado en los últimos cinco años, así como las del año corriente | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que el OSCE publique anualmente en su página web, en formato accesible, los datos agregados por tipos de procesos (adjudicaciones de menor cuantía, subastas inversas, convenios marco, entre otros) y cantidades que ejecuta cada entidad en materia de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| El OSCE deberá publicar un listado actualizado de las personas capacitadas por dicha entidad para ser jefes de logística y publicar sus hojas de vida actualizadas. Las entidades deberán consultar esta información cada vez que requieran contratar a un funcionario para cumplir estas labores. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Reformar y potenciar la Central de Compras Públicas (Perú Compras), de manera que esta entidad se constituya en el organismo técnico de alcance nacional que propenda a organizar las grandes compras de bienes, servicios y obras de todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno y que, además, pueda brindar asesoría a todas las entidades en esta materia. El potenciamiento de esta entidad implica necesariamente dotarla de la autonomía y especialización suficiente a través del aumento de su presupuesto y en la reformulación de su organización, de manera tal que cuente con un consejo directivo integrado por personas de trayectoria destacada, como órgano máximo de la entidad. Los miembros de este consejo directivo deberán ser elegidos por concurso público y deberá garantizarse su estabilidad en el cargo | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Todas las entidades públicas, de los tres niveles de gobierno, deben participar en el proceso de estandarización de productos dirigido por Perú Compras, para que en el plazo máximo de dos años se haya logrado estandarizar la mayoría de productos de consumo regular de todas las entidades, con la finalidad de favorecer la utilización del mecanismo de compras corporativas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer, bajo responsabilidad, la obligación de las entidades de informar mensualmente en su página web sobre el avance físico y la ejecución presupuestal de las obras públicas contratadas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Disponer que el valor referencial de todos los procesos de contratación de bienes, servicios y obras sea público. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Evitar el fraccionamiento indebido de compras estableciendo un monto máximo anual para las adjudicaciones de menor cuantía que celebre cada entidad, vinculado a un porcentaje máximo de su presupuesto. Los casos que superen estos topes deberán ser autorizados por el titular de la entidad, bajo responsabilidad. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que las adjudicaciones que se realicen bajo la modalidad de postor único sean necesariamente autorizadas por el titular de la entidad correspondiente en cada caso. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que los procesos de contratación de gobierno a gobierno incluyan en su Comité Especial a un representante de la Contraloría y a uno del OSCE. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer responsabilidad y sanciones efectivas para los funcionarios que no cumplan con llevar a cabo los pagos de contratos públicos cuando corresponda, dentro del periodo previsto por la ley. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Eliminar la posibilidad de que el Estado contrate publicidad con medios de comunicación sin llevar a cabo un proceso de selección. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que el arbitraje en materia de contratación pública sea únicamente institucional, tomando en cuenta las ventajas que tiene este sobre el arbitraje ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad. Para estos efectos, las instituciones arbitrales deberán ser acreditadas por el OSCE. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear una procuraduría especializada en arbitrajes derivados de contrataciones con el Estado que se encargue de monitorear y asesorar a los procuradores que tienen a su cargo la defensa en estos arbitrajes. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer que las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción no puedan contratar con el Estado. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Hacer efectiva la difusión del Código de Ética de la Función Pública, en todas las dependencias del Estado, a nivel nacional, exigible a cada servidor, independientemente de su posición jerárquica. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Tomando como base el Manual Nacional sobre Principios, Deberes y Prohibiciones Éticas de la Función Pública, desarrollado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), cada entidad deberá elaborar un Código de Conducta para sus servidores de acuerdo con las funciones que le corresponda. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Encargar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en coordinación con la Oficina de Integridad', el desarrollo de programas de capacitación permanente sobre los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética de la Función Pública y en los códigos de conducta aprobados por cada entidad. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas deberán desarrollar programas especiales para fortalecer la cultura de integridad entre sus miembros, considerando la importancia que tienen para el resguardo de la seguridad ciudadana y la soberanía nacional, respectivamente. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público, que proporcionen información útil y no conocida por las autoridades, y que resulte en la aplicación de sanciones por actos de corrupción. Los denunciantes deberán contar con un régimen efectivo de protección. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Los medios de comunicación del Estado -en coordinación con los medios privados que libremente lo consideren- organizarán y desarrollarán programas y campañas que pongan en valor la importancia de una cultura ciudadana que sustente las prácticas de integridad y la lucha contra la corrupción. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Modificar la legislación de gestión de intereses, en los términos propuestos por la Asociación Civil Transparencia, contemplando las siguientes características principales: - Precisar que la gestión de intereses, realizada de acuerdo a ley, es una actividad legítima y que puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. - Establecer un sistema de co-responsabilidad tanto para los gestores de intereses como para los funcionarios que participan en estas actividades. - Eliminar la diferenciación entre gestores de intereses propios y de terceros, estableciendo un mismo sistema de obligaciones y responsabilidades. - Simplificar el registro de gestores de intereses, de manera tal que cada entidad cuente con información al respecto y que sea de acceso público. - Cada entidad deberá publicar anualmente un informe que resuma el número de los actos de gestión de intereses, incluyendo los nombres de los gestores y de las personas e instituciones a las que representan. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Complementar las medidas vigentes para evitar los conflictos de interés, en los siguientes términos: - Establecer la obligación de los funcionarios que, por su posición, hayan tenido acceso a información privilegiada, de suscribir convenios de confidencialidad prohibiendo el uso o divulgación de dicha información, bajo responsabilidad. - Establecer que los exfuncionarios no puedan llevar a cabo actos de gestión de intereses en cualquier entidad pública por el plazo de un año. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Asegurar la efectiva publicación de las agendas oficiales de los altos funcionarios de las entidades del Estado en el portal web del organismo correspondiente. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Como objetivo a largo plazo, el Perú debería considerar la elaboración de un marco normativo único de políticas destinadas a promover la integridad y la gestión de conflictos de intereses, incluyendo la definición del termino conflicto de intereses; mientras tanto, el Perú debe garantizar que el Manual Nacional de Principios Éticos, Obligaciones y Prohibición en la función pública desarrollado por la CAN sea efectivamente incorporado y utilizado en todo el sector público involucrando a SERVIR, SGP y Oficinas de Recursos Humanos a niveles organizacionales. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú debería clarificar las funciones y responsabilidades de los organismos que participan en el desarrollo y la gestión de la ética pública y de las políticas de conflictos de intereses, atribuyendo la función principal a SERVIR para garantizar la coherencia con las políticas de gestión de recursos humanos, la capacitación y su aplicación; se podría garantizar la coordinación con la SGP y la CGR mediante la plataforma proporcionada por la CAN. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para resolver los problemas éticos relacionados con el trabajo, SERVIR debería asegurar orientación, asesoramiento y consultoría, mediante altos funcionarios responsables de la ética pública y de la gestión de conflictos de interés dentro de cada organización. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| SERVIR podría elaborar directrices específicas con ejemplos prácticos de situaciones de conflicto de intereses y cómo identificarlas y resolverlas, incluidas directrices sobre la aplicación de códigos a nivel organizacional, de modo que se haga hincapié en la apropiación y el impacto en el comportamiento. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrían elaborar orientaciones específicas para las categorías de funcionarios públicos, reguladores del mercado financiero, auditores, funcionarios fiscales, asesores políticos, funcionarios de aduanas, inspectores del nivel central del gobierno y la oficina ministerial. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podría implementar una campaña de concientización en el sector público sobre ética pública como una actividad compartida y coordinada entre SERVIR, la SGP y la CAN, destinada también al sector privado, a la sociedad civil y a los ciudadanos. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Los esfuerzos de capacitación deberían consolidarse dentro de SERVIR/ ENAP como la agencia principal en estrecha coordinación con las oficinas de recursos humanos, la SGP y CGR. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú podría considerar la posibilidad de implementar una capacitación innovadora y específica sobre la ética y sobre cómo enfrentar situaciones de conflictos de intereses. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para ayudar a priorizar y enfocar los esfuerzos de capacitación y mejora su relación costo beneficio, SERVIR podría hacer una evaluación de las necesidades de capacitación en ética prestando especial atención al desarrollo de los gerentes de alto nivel. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para garantizar un monitoreo y evaluación efectivos, SERVIR podría diseñar herramientas y procesos, incluyendo encuestas, evaluaciones de las directrices proporcionadas en el código y datos estadísticos sobre acciones disciplinarias y de divulgación. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para permitir el seguimiento y la evaluación de la aplicación del Código de Ética de la Administración Pública y publicar informes anuales de progreso, deberían elaborarse indicadores claros y transparentes. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Deben establecerse criterios claros y coherentes de violaciones y sanciones por violar el código de ética y política de conflictos de intereses. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Los formularios de declaraciones juradas (intereses) podrían ampliarse para incluir información sobre cargos externos (pagos y no pagos), obsequios y empleos previos según el nivel de riesgo asociado al puesto de funcionario público. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú podría fortalecer el papel de la CGR para auditar las declaraciones juradas otorgándole más poderes para cruzar la información a través de acuerdos con las unidades tributarias y financieras. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú fue pionero en América Latina al introducir una Ley de lobby, aunque actualmente sus reglamentos no son efectivos. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Las responsabilidades del registro y políticas de lobby podrían trasladarse a una fortalecida Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (ANTAI). | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Considerando que no hay beneficios claros para que los lobistas se registren, el Perú debería introducir incentivos positivos reduciendo la carga administrativa del cumplimiento con el registro y la presentación de informes, eliminando la necesidad de proporcionar una constancia de la actividad de gestión de intereses. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El poder de la sanción podría darse a una ANTAI fortalecida que debe asegurar su aplicabilidad para todos los funcionarios públicos; al mismo tiempo, el Tribunal Administrativo Especial aún no implementado, previsto en la Ley, podría incorporarse al Tribunal de Transparencia y acceso a la Información Pública. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Debe garantizarse un acceso fácil y transparente al registro y a los resúmenes de los informes de lobby a fin de reducir los problemas reales o percibidos de tráfico de influencias; el Perú tendrá que encontrar un nivel operable de divulgación pública para equilibrar los derechos de privacidad y de acceso a la información. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú ha avanzado en el aumento de la transparencia de la interacción entre los sectores públicos y del sector privado a través de otras normas complementarias y podría continuar en este camino optimizando los Portales de Transparencia y su uso. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para empezar a cambiar la percepción pública negativa respecto al lobby, el Perú debería llevar a cabo campañas públicas que explicaran el papel un lobby transparente y el valor de su regulación. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrán proporcionar actividades de concientización y capacitación específica sobre acciones lobistas tanto para los funcionarios públicos como para el sector privado. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Concretamente, el Perú debería concientizar el valor de la autorregulación complementaria dentro del sector privado y debería alentar a las empresas a asumir su parte de la responsabilidad en el fortalecimiento de la integridad. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Deberían establecerse mecanismos para la revisión periódica de las normas y directrices de las actividades de lobby en el Perú con el fin de identificar brechas en la implementación y oportunidades de mejoras; una vía para evaluar el marco normativo podría ser la consulta pública. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Reformular la política educativa para impulsar desde edad temprana la formación de valores. Debiendo ser obligatorio el curso de educación cívica y valores éticos en los colegios de primaria y secundaria. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Difundir programas educativos en la televisión, radio y redes sociales que propugne el fortalecimiento de valores en la ciudadanía. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| El curso de deontología debe ser obligatorio en todas las facultades de las universidades estatales y privadas, e institutos de educación superior | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Introducir mecanismos de sanción efectiva e inmediata para casos de incumplimiento del Código de Ética de la función pública. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Modificar la Ley de gestión de intereses (Ley Nº 28024) conforme a los estándares internacionales para dotarle de eficacia. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Publicitar el Código de Ética de la Función Pública y spot publicitario de la CAN. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Establecer una autoridad que supervise el cumplimiento del Código Ética de la función pública e imponga sanciones. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Establecer la obligación de las entidades públicas de contar con mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios. Asimismo, implementar un modelo digital de canalización de denuncias que permita al ciudadano el acceso rápido así como el monitoreo efectivo y la solución de sus reclamos o denuncias. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer medidas de protección efectiva al denunciante, al testigo y a la persona involucrada en actos de corrupción que colabore en la investigación. Dichas medidas deben estar orientadas no solamente a garantizar su integridad física sino también su situación laboral. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Adoptar disposiciones que sancionen eficazmente el incumplimiento de las normas y de las obligaciones en materia de protección de denunciantes | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Para mitigar el riesgo de que los denunciantes presenten informaciones que pueden no constituir divulgaciones protegidas y para evitar exponerlos potencialmente a riesgos innecesarios y sobrecargar el sistema de admisión con cargos no aplicables el Perú deberá aclarar la naturaleza de una divulgación protegida. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú deberá considerar aclarar que las denuncias que no conducen a una investigación completa o al enjuiciamiento siguen siendo elegibles para la protección legal. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para evitar la posible marginalización profesional de los denunciantes, el Perú debería emprender campañas de concientización, permitir una compensación justa a los denunciantes que sufren pérdidas de ingresos y asegurar un reclutamiento justo de los funcionarios basados en el mérito y en el compromiso de promover el interés público. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La amenaza de represalias podría incluirse como delito en la legislación peruana. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para garantizar que los posibles denunciantes puedan elegir dónde desearían presentar sus denuncias, el Perú debería proporcionar canales alternativos formalizados a través de los cuales las personas puedan revelar información, opciones internas y externas podrían funcionar simultáneamente. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para promover la coherencia, evitar prejuicios y optimizar el uso de los recursos internos, el Perú debería establecer criterios para guiar a los investigadores en cuanto a si las denuncias merecen una investigación completa. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Con el fin de mantener informados a los denunciantes sobre los resultados de sus denuncias y promover la rendición de cuentas, el Perú debería implementar mecanismos de seguimiento y establecer procedimientos de comunicación. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para aplicar eficazmente la ley (29542), el Perú debería considerar la posibilidad de promover una estrategia de comunicación amplia y emprender mayores esfuerzos de concientización a través de diversos canales. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú puede comprometerse con la sociedad civil como una forma efectiva de aplicar medidas de concientización (vinculados a las denuncias y protección al denunciante) | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Para evaluar su propósito, implementación y efectividad, el Perú debería considerar la revisión de su legislación de protección de denunciantes. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La efectividad del sistema de denuncias del Perú podría ser monitoreada y evaluada regularmente recopilando sistemáticamente datos e información. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Mejorar la ley de protección al denunciante de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe (Decreto Legislativo n° 1327). | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Reformar constitucionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura para fortalecer su autonomía y la selección de sus integrantes. Requisitos de los consejeros iguales a lo que se requieren para ser Fiscal o Juez Supremo. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer al Consejo Nacional de la Magistratura con el personal necesario para que los procedimientos disciplinarios sean más expeditivos. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Reformar constitucionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura con el fin de: - Modificar su composición y asegurar su idoneidad, autonomía e independencia. - Seleccionar, al menos a la mitad de sus miembros, a través de un concurso público de méritos que garantice la máxima transparencia, convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, con el apoyo operativo de SERVIR. -Establecer un nuevo modelo de evaluación permanente del desempeño de los jueces y fiscales que asegure su integridad e independencia. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Mediante la aplicación del control interno, incluida la gestión de riesgos, como parte integrante de los procesos de gobernanza, de gestión y operacionales, el Perú podría cerrar la brecha entre el marco conceptual de control interno y de gestión de riesgos y la implementación a nivel de entidad. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Las funciones de control interno y gestión de riesgos podrían integrarse en reformas más amplias de la gestión pública mediante el fortalecimiento y la formalización de la cooperación entre instituciones del Sistema Nacional de Control e instituciones públicas clave. Estas funciones deberían vincularse con iniciativas y políticas como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la gestión basada en resultados, las reformas de la gestión pública, los planes fiscales de mediano plazo y la descentralización. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La metodología y la aplicación de la autoevaluación del sistema de control interno podrían mejorarse acentuando la concientización y la comprensión individuales y desarrollando las capacidades de todos los jefes de departamentos y directorios, así como de los empleados que ocupan puestos claves. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Perú debería determinar y asignar las diversas funciones y responsabilidades con respecto al control interno y la gestión de riesgos al separar claramente las políticas y procesos de control financiero y gerencial de la función de auditoria interna. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El papel y las operaciones de los OCIs deberían ser rediseñadas para centrarse mejor en asesorar y apoyar a la dirección superior, asegurando la adecuación de los procesos de control interno para mitigar los riesgos y asegurando que los gerentes y el personal de las entidades gubernamentales participan activamente en las actividades de control y gestión de riesgos; para reflejar esto, los OCIs podrían ser renombrados como Oficinas de Auditoria Interna y Aseguramiento (OAIA). | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrían explorar formas prácticas de mejorar y normalizar la coordinación entre las partes interesadas, asegurar la armonización de normas y herramientas metodológicas, asignar funciones y responsabilidades claras, separar los deberes y salvaguardar la independencia institucional e individual y la objetividad en el ámbito del control y auditoria externa e interna. (Cap. 5: Control Interno) | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La eficacia del marco normativo de control interno y gestión de riesgos, incluida la concientización del valor agregado del control interno entre la dirección superior y el fortalecimiento de la independencia y la objetividad de la función de auditoria interna podría beneficiarse de la introducción de comités o consejos de riesgo y auditorias independientes. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrían explorar soluciones para desarrollar un ambiente de control interno optimo basado en integridad y transparencia para asegurar que los valores éticos se apliquen de manera coherente a través de los procesos y procedimientos organizacionales: se podría supervisar y evaluar la madurez del ambiente de control, incluidos los aspectos estructurales y de comportamiento. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrían diseñar una política específica de gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Transparentar los informes de auditoría y control, a través de la página web de la Contraloría General de la República (CGR), dentro del plazo de 24 horas después de haber sido generados, así como los demás documentos relevantes que se deriven del expediente. Se establece la responsabilidad del funcionario encargado en caso de incumplimiento. Asegurar, al mismo tiempo, el fácil acceso por parte de cualquier ciudadano a la integridad de estos documentos; se debe señalar una sumilla de cada uno de ellos en el buscador, de manera que estos resulten más fáciles de identificar. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Requerir que los funcionarios de la CGR cuenten con experiencia o conocimiento comprobado en temas de gestión pública. Asimismo, se propone un sistema permanente de capacitación en estas materias. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Garantizar los recursos para que los funcionarios de las oficinas de control institucional dependan funcional y presupuestalmente de la CGR, a fin de asegurar su autonomía e independencia en su función de control externo. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Precisar que los órganos del Sistema Nacional de Control deberán respetar la validez de las decisiones que los funcionarios públicos adopten en cumplimiento estricto de la discrecionalidad que les otorga la ley. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Garantizar el debido proceso en todos los procedimientos de control permitiendo en cualquier momento el acceso de las personas involucradas a la revisión de sus expedientes. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Recomendar que la CGR establezca como infracción administrativa la emisión de informes manifiestamente infundados elaborados por funcionarios del Sistema Nacional de Control y asegurar un mecanismo de sanción imparcial y transparente, que cuente con las garantías del debido proceso. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer la obligación de que las normas que emita la CGR cuenten con un Análisis de Impacto Regulatorio debidamente fundamentado y público. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Encargar a la Secretaria de Gestión Pública que, en el plazo máximo de un (1) año, desarrolle la metodología, los lineamientos normativos y de gestión para mejorar el Sistema de Control Interno en todas las entidades públicas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Fortalecimiento de las oficinas de control interno de las entidades estatales, para dotarlas de autonomía y eficiencia. Debiéndose dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control a la Contraloría General de la República. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementar en breve plazo el Sistema de Control Interno en todas las entidades del Estado. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Reformar constitucionalmente la forma de cómo se designa al Contralor. La misma que debe ser realizado por el Pleno del Congreso con mayoría calificada. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer a la Contraloría General de la República y su autonomía. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Invocar a la Contraloría General de la República la revisión de sus normas y directivas respecto del Control Simultáneo. Además que excepcionalmente pueda asesorar en temas de gestión a las entidades estatales, lo que implica replantear las funciones de la OCI (Órgano de Control Institucional) conforme lo recomienda la OCDE. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Potenciar las herramientas de SINAD e INFOobras. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Control permanente a los Gobiernos Regionales, Municipales Provinciales y Distritales. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementar la Ley 30251, respecto a las Declaraciones Juradas a los funcionarios públicos y servidores públicos. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Ejecutar el proyecto del “Observatorio de la Gestión Pública”. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La implementación de la auditoría forense para casos penales en relación con fiscalías especializadas anticorrupción | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Se debe evaluar la realización de más auditorías de desempeño y menos auditorías financieras y de cumplimiento conforme a la recomendación de la OCDE | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Un integrante de la Contraloría General de la República deberá participar como veedor en los procesos de contratación de obras públicas de gran envergadura. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Ampliar los supuestos de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD (Rendición de Cuentas) a los funcionarios públicos de alta dirección de las entidades públicas que gestionan el presupuesto institucional y/o se implican en los procesos de contrataciones públicas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Publicitar los resultados de la Evaluación Funcional del Jefe y Personal del órgano de Control Institucional (Directiva 002-2017-CG/DPROCAL) en su portal web de semestral. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Difusión de los beneficios de la protección al denunciante para que los ciudadanos se involucren con la lucha contra la corrupción. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Concientización y adopción de programas anticorrupción en las empresas privadas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Participación ciudadana como comités de vigilancia o veedurías ciudadanas en los procesos de contrataciones y obras públicas que la involucran. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Sancionar la corrupción privada. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Establecer alianzas y acuerdos de colaboración entre el Estado y el sector privado para promover la integridad en la actividad empresarial. Asimismo, fomentar que las empresas grandes y multinacionales trasladen sus prácticas anticorrupción a sus proveedores. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Exigir el establecimiento progresivo de un programa de prevención contra prácticas de corrupción debidamente certificado a las siguientes personas jurídicas: Las que contraten con el Estado a partir de determinado monto, bajo cualquier modalidad, como requisito de elegibilidad. Las que cuenten con concesiones otorgadas por el Estado. Las que reciban ciertos beneficios tributarios o monetarios del Estado, como requisito para acceder a dicho beneficio. Las que tengan valores registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y las que operan en sectores regulados. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear mecanismos de apoyo estatal para que las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) puedan adoptar programas de prevención contra prácticas de corrupción, de acuerdo con sus características. Los mecanismos de apoyo deben incluir asistencia técnica. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Incluir en el régimen de responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas los delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos. Según corresponda, los programas de prevención contra prácticas de corrupción podrán considerarse como eximentes de responsabilidad, | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Los gremios empresariales y los colegios profesionales deberán establecer, de forma obligatoria, instancias autónomas e independientes que evalúen y sancionen casos de transgresión de sus códigos de ética. Las resoluciones finales que dicten estas instancias deberán ser publicadas en sus páginas web. Además, deberán publicar un balance agregado sobre cantidad de denuncias, motivos, procedimientos y sanciones impuestas durante el año. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector privado que proporcionen información útil y no conocida por las autoridades y que resulte en la aplicación de sanciones por actos de corrupción. Los denunciantes deberán contar con un régimen efectivo de protección. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Elaborar una guía que proporcione al sector privado una orientación clara sobre la regulación anticorrupción, que incluya la sistematización de toda la legislación y precedentes judiciales, ejemplos de prácticas corruptas, criterios del Ministerio Público para iniciar investigaciones por delitos de corrupción y formular acusaciones, así como los criterios del Poder Judicial, entre otros. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| La Comisión de ética del Congreso de la República deberá publicar las acciones realizadas y los resultados de su labor, incluyendo las sanciones impuestas en el portal web institucional de manera semestral. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Establecer que en el caso específico de los congresistas que sean condenados con prisión efectiva mediante sentencia firme por delitos dolosos derivados de hechos previos al inicio de su función parlamentaria, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria será automático y no requerirá aprobación de ningún órgano del Congreso de la República. El Presidente de Congreso comunicará al congresista sentenciado su desafuero y dará cuenta al Pleno sobre esta situación. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| A mediano y largo plazo, con la finalidad de reducir la impunidad y proteger los derechos de los acusados, el Perú debería considerar avanzar hacia un régimen disciplinario administrativo con un único inventario de infracciones y sanciones correspondientes, y una delimitación más clara de jurisdicciones y responsabilidades institucionales. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| La consecución de un régimen administrativo más coherente y simplificado a largo plazo requerirá medidas inmediatas a corto plazo. Como prioridad, es necesario reforzar la coordinación y la comunicación bajo los auspicios de la CAN y se requieren esfuerzos más ambiciosos de desarrollo de capacidades para preparar el camino para futuras reformas. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| A corto plazo, la legislación y los procedimientos actuales podrían clarificarse y alinearse para garantizar una mejor coordinación entre las autoridades responsables de los procedimientos penales y administrativos relativos a los funcionarios públicos. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| A corto plazo, el estatuto de limitación de las faltas disciplinarias debería evaluarse con miras a fortalecer la disuasión contra las conductas ilícitas. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| A corto plazo, indicadores clave de desempeño disponibles públicamente y estandarizados sobre el funcionamiento del régimen unificado (o sobre ambos regímenes) constituirían una valiosa evidencia para evaluar el sistema, informar a la sociedad civil y mejorar no solo los mecanismos de imposición legal, sino también la estrategia de integridad. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Establecer un régimen único de responsabilidad administrativa en la administración pública. Donde conste las infracciones y sanciones expresas y precisas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Los procedimientos administrativos deben tener un plazo de prescripción aproximado de 5 años. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Incorporar medida de abstención para casos graves. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| SERVIR debe encargarse de los procedimientos administrativos de todas las entidades públicas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer económicamente y logísticamente el Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General de la República establecida mediante Ley 29622. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Prohibición de indulto para caso de delitos contra la Administración Pública (Reforma constitucional del artículo 118 de la Constitución Política). | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Supresión del antejuicio a Congresistas, Ministros, Presidente de la República y otros altos funcionarios públicos cuando sean investigados por delitos contra la Administración Pública (Reforma constitucional del artículo 100 de la Constitución Política). | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Propuesta legislativa que propone la Ley general de protección al denunciante de delitos contra la Administración Pública. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Propuesta legislativa que propone incorporar el artículo 214-A del Código Penal referido a sancionar los delitos de Corrupción Privada. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Propuesta legislativa que propone modificar el artículo 425 del Código Penal que considera a los árbitros como funcionarios públicos siempre y cuando entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, formen parte de la controversial arbitral. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Propuesta legislativa que propone la creación de los Comités de Vigilancias Ciudadanas o Veedurías Ciudadanas en los procesos de contrataciones estatales e inversión pública. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Propuesta legislativa que propone la repartición institucional de la recuperación de activos en el exterior. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Respeto a la autonomía e Independencia del Ministerio Público y Poder Judicial para continuar con el adecuado desarrollo de los procesos penales de corrupción y conexos. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Dotar con el presupuesto necesario al Ministerio Público y Poder Judicial en un porcentaje de hasta el 3% del Presupuesto del Sector Público. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Que las instituciones involucradas en la lucha contra la Corrupción (Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Policía Nacional, Ministerio de Justicia, CAN, Procuraduría, entre otros), tenga órganos de enlace y convenios para que los procedimientos resulten más expeditivos, ya sean administrativos o judiciales. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Concluir adecuadamente el proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Creación e implementación de la Fiscalía Suprema Anticorrupción y articule todo el Subsistema. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción a nivel nacional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecimiento de la unidad de peritos de las fiscalías especializadas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementación de la Oficina de Análisis Estratégico de la Criminalidad. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Promover en breve plazo la disminución de fiscales provisionales a nivel nacional y aumentar la cantidad de fiscales titulares para ello se deberá dotar del presupuesto necesario. El cargo de provisional debe ser excepcional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Capacitación especializada para fiscales y asistentes de la función fiscal sobre ética, técnicas especiales de investigación de los delitos contra la administración pública, y Contrataciones con el Estado. Incluye Fiscalías Especializadas Anticorrupción y Fiscalías Supremas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La Fiscalía Suprema de Control Interno y oficinas desconcentradas deberán publicar las acciones realizadas y los resultados de su labor, incluyendo las sanciones impuestas en el portal web institucional de manera semestral. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| El Ministerio Público a través de RENADESPPLE debe estar a cargo del Registro único de Sanciones a funcionarios y servidores públicos por delito contra la administración pública (y otros). | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer la Cooperación Judicial Internacional para la lucha contra la Corrupción. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Programa de persecución estratégica del delito: Fiscal escolar anticorrupción. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Impulsar las Audiencias Públicas con los ciudadanos a nivel nacional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementar la participación de la Sociedad Civil en los Órganos de Control del Ministerio Púbico conforme a la Ley N° 28149. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecimiento de los juzgados y Salas del Poder Judicial especializadas en delitos de Corrupción. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Reformular la organización de la Corte Suprema para disminuir la provisional en el Poder Judicial en todas las instancias. La provisionalidad es la excepción. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Capacitación especializada para jueces y auxiliares de justicia sobre ética, delitos contra la administración pública, y Contrataciones con el Estado. Involucra Juzgados Anticorrupción y Salas Supremas | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La OCMA y ODECMA deberán publicar las acciones realizadas y los resultados de su labor, incluyendo las sanciones impuestas en su portal web institucional de manera semestral. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementar la participación de la Sociedad Civil en los Órganos de Control del Poder Judicial conforme a la Ley N° 28149. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Fortalecer la cultura de integridad entre sus miembros (PNP). | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Crear e implementar la Autoridad Autónoma para la Transparencia y Acceso a la información Pública | Plan de Gobierno |
| Crear en la Policía Nacional un cuerpo de élite anticorrupción, altamente calificado y permanentemente evaluado, que apoye eficientemente la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Capacitación especializada para el cuerpo de élite anticorrupción sobre ética, delitos contra la administración pública, y Contrataciones con el Estado. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La necesidad de reforma constitucional para la creación de la Procuraduría General del Estado. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Dotarle de los recursos presupuestales, técnicos y humanos necesarios para su buen funcionamiento a las Procuradurías Anticorrupción y de la Contraloría General de la República a nivel nacional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Crear un Sistema de Justicia Especializado en Delitos de Corrupción conformado por cuerpos especializados del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, en trabajo coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría General de la República. Dicho Sistema deberá estar integrado por personal de elevado nivel ético, altamente calificado y sometido a permanente evaluación. El Estado deberá asegurar la participación y el apoyo de organismos y fuentes de cooperación internacional, a fin de darle la máxima eficiencia al Sistema.  Este Sistema deberá contar con los recursos necesarios, incluyendo tecnología, información, inteligencia, entrenamiento, presupuesto y metodologías de investigación de alto impacto, que se enfoquen tanto en la intervención en flagrancia así como en la efectiva investigación de graves casos de corrupción. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Como parte del sistema se deberá: Crear, en el más corto plazo, al menos 20 juzgados anticorrupción en las regiones que registran alta incidencia de delitos de corrupción. - Crear la Fiscalía Suprema en Corrupción y Crimen Organizado, así como fiscalías especializadas anticorrupción en las regiones que se requiera. - Crear en la Policía Nacional un cuerpo de élite anticorrupción, altamente calificado y permanentemente evaluado, que apoye eficientemente la investigación penal dirigida por el Ministerio Público. - Crear en el Ministerio Público el Registro de Peritos del Estado, altamente calificados, al que se acceda mediante concurso público y cuya idoneidad sea permanentemente evaluada | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer la plena autonomía del proceso judicial de pérdida de dominio de los bienes de fuente presuntamente ilícita, distinto del proceso penal, a fin de que se convierta en una herramienta idónea para combatir la corrupción y afectar económicamente el crimen organizado. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Reducir y sancionar la dilación excesiva de los procesos judiciales y la ejecución de las sentencias que afectan a los ciudadanos. Para tal efecto, se deberá: - Crear el Sistema Único de Información en Línea que conecte a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia. - Fortalecer el sistema de información en línea, a fin de permitir al ciudadano conocer el estado de su proceso, sin necesidad de acudir a las sedes judiciales. - Expandir el uso del expediente electrónico con firma digital y potenciar el sistema electrónico de notificaciones judiciales. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Asegurar el cumplimiento de la obligación de los jueces especializados, salas superiores y supremas, de publicar todas sus sentencias en el portal web del Poder Judicial en un plazo no mayor a 72 horas de emitidas. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| En un plazo máximo de tres años, reducir drásticamente el número de jueces y fiscales provisionales y supernumerarios, de manera que su existencia sea estrictamente excepcional. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| El Ministerio del Interior deberá dictar una directiva que elimine la calificación penal en los atestados de la Policía Nacional. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Transparentar la elección del Presidente del Poder Judicial y de los presidentes de las cortes superiores de Justicia, estableciendo plazos de público conocimiento y procedimientos específicos que incluyan la presentación de planes de gestión por parte de los candidatos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Ampliar a cuatro años el mandato del Presidente del Poder Judicial para facilitar la implementación de planes de reforma, modernización judicial y lucha contra la corrupción. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Respaldar la creación de la Procuraduría General del Estado, como ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y dotarla de los recursos presupuestales, técnicos y humanos necesarios para que cumpla cabalmente sus funciones. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear la Procuraduría contra el Crimen Organizado, que se encargue de los delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y procesos de pérdida de dominio para enfrentarlos sistémicamente. Asimismo, dotarla de los recursos necesarios para su buen funcionamiento, el acceso a fuentes de información y la mejora en el diseño de las estrategias de defensa jurídica del Estado. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Facultar a las procuradurías para obtener información de la Unidad de Inteligencia Financiera en la recuperación de activos durante la ejecución de sentencias. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Solicitar a las organizaciones de la sociedad civil la creación de un observatorio que evalúe y monitoree la implementación de las medidas propuestas por la Comisión Presidencial de Integridad en el presente informe. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Se deberían adoptar procedimientos o memorandos de entendimiento escritos entre el Ministerio Público, la policía, el Ministerio de Justicia, SERVIR y la Contraloría General de la República exigiendo y garantizando la cooperación sistemática y continua entre las agencias en relación a los casos de corrupción bajo jurisdicción penal. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Código de Procedimiento Penal de 2004 debe aplicarse rápida y sistemáticamente en todas las regiones mediante la promulgación de reglamentos de aplicación pertinentes y la realización de actividades de formación y concientización para las autoridades regionales encargadas del cumplimiento de la ley. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Las Comisiones Regionales Anticorrupción podrían utilizarse para compartir conocimientos y concientizar a las agencias y a través de las regiones sobre los riesgos y los desafíos específicos de la corrupción de cada región, generando la promoción de difusión de experiencias y búsqueda de sinergias (homogeneización de prácticas de gestión). Es posible su realización a través de la realización de reuniones o mesas de trabajos para el diálogo. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Podrían organizarse reuniones mensuales entre representantes del MP y el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que sus representantes puedan discutir en forma confidencial y privada cualquier preocupación de interferencia política en los nombramientos judiciales o en los casos en curso, a fin de asegurar que dicha conducta sea detectada y sancionada. Esta propuesta se realiza en consecuencia a las situaciones acontecidas durante el año 2013, caso repartija. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrían impartir regularmente actividades de formación y concientización al personal judicial y al personal de los tribunales sobre la conducta ética, junto con mecanismos de apoyo para recabar información relacionada con la lucha contra la corrupción. La percepción muy negativa hacia el Poder Judicial (la institución más corrupta del país), acompañados a la existencia de casos de corrupción judicial en el país, generó que se recomendará el fortalecimiento de la supervisión interna y externa del Poder Judicial con la finalidad de aumentar la confianza en la ciudadanía. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Deberían introducirse mecanismos para asegurar que la asignación de casos tenga en cuenta la experiencia, conocimientos y la capacitación del fiscal, evitando situaciones de conflicto de intereses. A partir de los últimos años, se registró el aumento de la creación de unidades legales especializadas en la lucha contra la corrupción. Acorde con esta tendencia, se están creando un alto nivel de especialización en sus organismos de investigación y sanción. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| El Perú debería considerar la posibilidad de aplicar un conjunto de criterios más flexibles o dejar un margen de discrecionalidad a la hora de decidir qué casos se transfieren a las oficinas nacionales especializadas del MP y a la Sala Penal Nacional. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Considerando que la falta de recursos puede obstaculizar el éxito de las investigaciones, el Perú debería explorar maneras de asegurar que los casos estén debidamente financiados por el MP. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se necesitan medidas urgentes para reducir el número de puestos vacantes tanto en el Poder Judicial como en el MP, eliminar el uso de jueces y fiscales provisionales y aumentar la continuidad del personal de investigación en casos concretos, incluidos fiscales y jueces, en la mayor medida posible. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Podrían proporcionarse orientación y capacitación en forma anual al Poder Judicial y a los fiscales en materia de delitos de corrupción, así como en cuestiones y temas pertinentes, como la contratación pública. Perú también debería considerar la posibilidad de implementar un programa de tutoría informal a través del cual los fiscales y miembros del poder judicial puedan recabar asesoramiento de otros fiscales o jueces con experiencia en casos de corrupción. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Se podrían proporcionar formación y orientación conjuntas a los fiscales y a la policía sobre las técnicas de investigación pertinentes para casos de corrupción, en particular para obtener y analizar información fiscal y financiera; el Perú debería también tomar medidas para reducir la rotación de personal en la policía (específicamente DIRCOCOR) con el fin de mantener la experiencia y la capacidad y crear confianza. | Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú |
| Crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo, conformado por la Oficina de Integridad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector de este sistema, y por los funcionarios responsables de la integridad gubernamental que deberán ser designados en todas las entidades del Poder Ejecutivo. Las funciones del Sistema serán: - Promover la ética en la función pública, para lo cual se deberá elaborar y supervisar el cumplimiento de programas de integridad y ética dentro del Poder Ejecutivo; elaborar guías y brindar asesoría para la aplicación de las normas sobre integridad, ética y gestión de intereses; asegurarse de que la información sobre estas materias esté correctamente sistematizada y sea públicamente disponible: - Diseñar mapas de riesgos de corrupción y proponer herramientas para enfrentarlos en los distintos ámbitos de actuación. - Generar y administrar información cuantitativa y cualitativa en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a fin de desarrollar indicadores que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas. - Apoyar la promoción de una cultura de la integridad en la sociedad a través de los organismos del sector público, sector privado, universidades, medios de comunicación y sociedad civil. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Encargar la supervisión obligatoria y la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer la bancarización obligatoria de las transacciones que sean iguales o superiores a diez UIT en el caso de i) constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles; ii) transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; y iii) la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Otorgar a la UIF la facultad de enviar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información de inteligencia sobre lavado de activos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Habilitar legalmente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para proporcionar información sobre entroncamientos y vínculos familiares a solicitud de las autoridades competentes en materia de investigación y detección de delitos de corrupción y lavado de activos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Encargar a la Secretaría de Gestión Pública que en el plazo máximo de un año, evalúe todos los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de todas las entidades públicas del país y disponga la eliminación de procedimientos que no se consideren justificados o que puedan introducirse dentro de otros procedimientos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear una plataforma digital centralizada en la que se publiquen obligatoriamente todos los reglamentos de cualquier entidad de la Administración Pública antes de ser promulgados, para recibir comentarios por vía electrónica. Los proyectos de reglamentos deben ser publicados en su integridad, así como un resumen en lenguaje amigable. Cualquier persona con su sola identificación podrá comentar los proyectos y, en el mismo sentido, los comentarios que se publiquen serán de acceso para todo aquel que ingrese a la plataforma y deberán ser procesados por la institución antes de que se publique la norma. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Diseñar con urgencia y prioridad una política de digitalización de los archivos relevantes de las entidades públicas del país, con el fin de cautelar la información y documentación que pueda ser materia de investigación de presuntos casos de corrupción. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Implementar efectivamente el gobierno electrónico en todas las entidades de la Administración Pública, en los tres niveles de gobierno. Para tal efecto, deben adoptarse las siguientes medidas: Impulsar la simplificación y digitalización de procesos y servicios para hacerlos más eficientes y accesibles para la ciudadanía. Instaurar progresivamente una política de datos abiertos en las transacciones y trámites del Estado, de manera que la información relevante pueda ser fácilmente buscada, accesible y compartida, optimizando la gestión pública, incrementando la transparencia y contribuyendo a reducir los espacios para actos de corrupción. Crear un programa de asistencia al ciudadano para facilitar la utilización efectiva de los servicios que brinda el gobierno electrónico. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Fortalecer y dotar de facultades suficientes a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) para impulsar la implementación efectiva de una Política Nacional de Gobierno Electrónico que incorpore las medidas antes referidas. Asimismo, encargar a la ONGEI implementar procesos para convertir los datos en información útil que permita continuar simplificando trámites y hacer más eficientes los servicios al ciudadano. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Impulsar la simplificación administrativa y el gobierno electrónico. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Antes del 31 de enero de 2017, los altos funcionarios, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza deberán presentar ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses que contenga información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo. Cada entidad, bajo responsabilidad, publicará esta declaración en su portal web. Posteriormente la declaración jurada de intereses deberá ser presentada a su respectiva entidad anualmente, así como al asumir y cesar en el cargo. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Crear el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que estará a cargo de una Autoridad Autónoma con competencia para sancionar efectivamente los casos de incumplimiento legal, establecer criterios para que las entidades garanticen el principio de máxima divulgación, resolver administrativamente las controversias y capacitar y asesorar a los funcionarios. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Aprobar una ley de rendición de cuentas aplicable a los tres poderes del Estado y organismos autónomos, que comprenda tanto la gestión presupuestal como el logro de resultados. Asimismo, mejorar la legislación vigente sobre rendición de cuentas y presupuesto participativo en los gobiernos regionales y municipales. Todos los directivos públicos deben rendir cuentas a través de la publicación, en la página web de la entidad, de un informe anual con sus principales logros y dificultades. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Promover la transparencia en el sector Defensa, eliminando la frase "y en general, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional" del artículo 12 del Decreto Legislativo 1129. En concordancia con el artículo 15° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicho artículo quedará redactado de la siguiente manera: "Los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional son de carácter secreto". | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Fortalecer a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada mediante Decreto Legislativo N° 1353. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Que todos los funcionarios públicos firmen la Declaración Jurada de Intereses antes de ingresar a la función pública. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Retomar la implementación de la Ley del Servicio Civil y elaborar un cronograma para que las entidades públicas ingresen a este servicio. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Promover activamente que los gerentes públicos ingresen al régimen del servicio civil en la categoría de directivos públicos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Identificar los mil puestos directivos clave, cuyos titulares deberán ser seleccionados a través de procesos especializados desarrollados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Esta entidad deberá entregar ternas de candidatos propuestos a la entidad correspondiente. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Establecer un régimen único de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que cuente con un listado completo de infracciones y sanciones. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Impedir el ingreso o reingreso a la función pública -por cualquier modalidad, incluidos puestos de confianza- a las personas que sean condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos, aun cuando hayan cumplido la pena. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Destituir de la función pública a las personas que sean condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| La implementación adecuada del Decreto Legislativo 1295 que establece el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el cual pretende que funcionarios o servidores públicos que trabajan en la administración Pública no cuenten con registros de antecedentes penales ni judiciales por delitos contra la Administración Pública, además que no registren graves inconductas funcionales. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Los Colegios profesionales de todo el país deben tener un rol más activo en sancionar a sus agremiados que no respetan las normas éticas, además de crear un registro efectivo sobre la mala práctica profesional. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Deberán (los Colegios Profesionales) financiar cursos gratuitos para sus agremiados sobre deontología. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Medición del desempeño de todos los funcionarios y servidores públicos | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Reformular el Plan Nacional Anticorrupción y los Planes Regionales Anticorrupción, los mismos que deberán complementarse. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Actualizar el Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción en cada entidad (2017-2021). | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| La implementación sostenida de mecanismos de participación ciudadana donde puedan rendirse cuentas claras de las acciones de interés del gobierno regional y local. Audiencias Públicas. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Realizar un “inventario normativo” de las leyes que regulan los procedimientos o programas anticorrupción en las entidades públicas y unificarlas. El mismo que debe unificar conceptos e incluir un único inventario de infracciones y sanciones administrativas y penales. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Identificar los procedimientos sensibles a actos de corrupción en las entidades del Estado. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Implementar mecanismos de interoperabilidad entre las instituciones públicas para dotar de eficacia a las investigaciones penales y procesos penales referidas a delitos contra la Administración Pública. | 100 medidas para la lucha contra la corrupción |
| Desarrollar y aprobar un Plan Nacional de Infraestructura, como política de Estado, que transparente y haga predecibles las decisiones públicas y privadas en los próximos veinte años, enmarcado en el Acuerdo Nacional. Este plan deberá incluir las obras emblemáticas a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Asegurar que todos los contratos de las grandes obras públicas de infraestructura cuenten con cláusulas anticorrupción. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Disponer que entre la fecha de adjudicación del proyecto y la fecha de cierre del contrato, el inversionista deba contar con un porcentaje adecuado de financiamiento comprometido para evitar la especulación y la negociación indebida de adendas de bancabilidad. Asimismo, asegurar la ejecución efectiva de las garantías de cumplimiento cuando las bases del concurso o las estipulaciones del contrato así lo establezcan. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Fortalecer la autonomía de los organismos reguladores de servicios públicos estableciendo que sus gerentes sean designados por sus respectivos consejos directivos. | Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad |
| Determinar el direccionamiento estratégico de la CAN al 2021, considerando que el país ha priorizado su incorporación a la OCDE para el año del Bicentenario de la Independencia del Perú | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Aprobar la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción dentro de la cual se establezca que el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (PNLCC) es la herramienta de implementación de dicha política | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Creación del Sistema Funcional de Integridad que tenga como ente rector a la CAN | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Analizar la incorporación de actores clave como miembros de la CAN y establecer un mecanismo de coordinación estratégica | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Es necesario iniciar las acciones para la asignación del presupuesto coherente y adecuado para la lucha contra la corrupción a cargo de la CAN | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Adecuada colaboración entre las diferentes entidades del sector público para lograr una efectiva interoperabilidad de los sistemas | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Implementación de las Declaraciones Juradas que permitan prevenir el conflicto de intereses | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Fortalecimiento de la labor de investigación de los delitos de corrupción conforme a lo observado a lo observado en el Informe Defensorial N° 168 sobre el archivo fiscal de denuncias | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Intercambio de información entre la UIF y el JNE, así como un mayor otorgamiento de autonomía de la UIF-Perú para el acceso a la información | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Mejorar en los procesos de selección y ascenso que permitan el ingreso y permanencia de los mejores efectivos dentro de la Policía Nacional del Perú | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Contar con mecanismo adecuados de monitoreo y seguimiento, incorporando las acciones del plan anticorrupción (sectorial e institucional) en los instrumentos de planificación estratégica; asimismo realizar evaluación de impacto que permitan determinar la efectividad de los referidos planes. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Realizar evaluaciones de seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Acelerar el proceso de tránsito al Servicio Civil debe ser una de las principales obligaciones del Estado | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Mejorar el Sistema de Contrataciones del que fortalezca y amplíe el Programa de Acompañamiento y Seguimiento | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| La herramienta INFOBRAS debe ser potenciada con el marco normativo que permita su actualización permanente | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Realizar estudios de impacto del marco normativo respecto de la efectividad del sistema punitivo del Estado | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Mejorar la regulación y la adopción de medidas más eficientes y óptimas para la protección a los denunciantes, testigos y peritos en las investigaciones por delitos de corrupción | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Ampliar la articulación de la información estadística que dichas entidades (de la Administración de Justicia) elaboran, además de lograr consolidar esta data tanto en el ámbito administrativo como penal | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Implementar un adecuado sistema de monitoreo y evaluación de la efectividad de los órganos jurisdiccionales y fiscalías en materia de delitos de lavado de activos | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Incorporación de mecanismos de protección que faciliten las denuncias de parte de los ciudadanos y de los propios servidores públicos ante las Secretarías Técnica de Procesos Disciplinarios | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Evaluar la coexistencia de dos sistemas sancionadores en el ámbito administrativo: el Proceso Administrativo Sancionador (PAS) a cargo de la Contraloría General de la República y el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) a cargo de las entidades del sector público y del Tribunal del Servicio Civil, en segunda instancia. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Uniformización de los criterios, protocolos, y marco de acción de las Oficinas de Fortalecimiento Ético o Comités Anticorrupción que se están conformando en algunas entidades del Estado | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Fortalecer los programas formativos en la promoción de la ética ciudadana en los diversos niveles educativos | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Las capacitaciones en temas de integridad, ética en la función pública, implementación del Sistema de Control Interno, contrataciones públicas, prohibiciones e incompatibilidades en la función pública, régimen disciplinario, entre otros; deben incorporarse al Plan de Desarrollo de las Personas de las entidades al fin de darle continuidad. Asimismo, deben implementarse mecanismo que verifiquen la efectividad de dichas capacitaciones. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Dar continuidad al concurso de Buenas Prácticas Anticorrupción, organizado por la Coordinación General de la CAN. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Estandarizar los procedimientos de denuncia y fortalecer la labor de difusión a la ciudadanía de los mecanismos de denuncias de actos de corrupción, así como generar sinergias con las distintas instancias del Estado que reciben denuncias de corrupción a fin de promover los canales de atención disponibles a la ciudadanía. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Promover instrumentos jurídicos que regulen la obligatoriedad de las audiencias de rendición de cuentas y la capacitación de la sociedad civil interesada en participar en las mismas | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Los gremios empresariales deben implementar mecanismos efectivos para el cumplimiento de sus códigos de ética y la imposición de sanciones a los asociados que los vulneren | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Es necesario elaborar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores una estrategia comunicacional de los logros y avances del Perú en la lucha contra la corrupción, a efectos de que el sector público, el privado y la sociedad civil organizada repliquen una misma información y mensaje, y ello denote un trabajo coordinado y articulado | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Se debe fortalecer a la Coordinación General de la CAN para que asuma la responsabilidad de coordinar las acciones para implementar las recomendaciones del Estudio de Integridad en el Sector Público, elaborado por la OCDE | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Otorgar mayor impulso a la celebración de tratados o convenios internacionales de extradición cooperación y asistencia judicial mutua con aquellos países que tenemos un mayor tráfico comercial o migratorio. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Especializar a los funcionarios y servidores públicos, en materia de extradición y asistencia judicial internacional, además de enfocarse en los requisitos y procesos que establece la normativa nacional y en mejorar las capacidades respecto de lo establecido en los instrumentos internacionales y en el derecho comparado | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Es necesario dar una adecuada estructura organizacional a la Coordinación General de la CAN, de manera que se le permita cumplir las funciones contenidas en su Ley de creación y reglamento; alcanzar los objetivos del PNILCC; e implementar los Acuerdos de la CAN. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción debe ser el instrumento que permita la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, de tal manera que se logre coherencia entre el desarrollo de las acciones del PNILCC y la política nacional. | Informe de la Evaluación Final de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 |
| Fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) como la entidad responsable de una política de Estado que prevenga, investigue y sancione los hechos de corrupción. | Plan de Gobierno |
| Contar con una política de reforma y modernización del Estado, tendiente a reducir los hechos de corrupción en el ámbito público | Plan de Gobierno |
| Reforma del sistema político y electoral para prevenir el ingreso de recursos del narcotráfico y otras actividades ilícitas en los partidos y en campañas electorales | Plan de Gobierno |
| Fortalecer, dinamizar y descentralizar la Contraloría General de la República para mejorar la investigación y sanción administrativa de los hechos de corrupción | Plan de Gobierno |
| Mejorar la investigación y la sanción penal de los hechos de corrupción. | Plan de Gobierno |
| Establecer la “muerte civil” y la imprescriptibilidad en los casos graves de corrupción. | Plan de Gobierno |
| Reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Sistema de Justicia | Plan de Gobierno |
| Mejorar el control interno en las instituciones del Estado. | Plan de Gobierno |
| Mejorar la investigación y sanción de los hechos de corrupción | Plan de Gobierno |

**ANEXO 3**

**Análisis de Tendencias.**

**Tendencias Nacionales.**

En cuanto a las **tendencias nacionales**, se puede ver que en el horizonte de acción al 2050 la PNILCC deberá contemplar las siguientes tendencias:

* **Aumento de la Desigualdad de Género.** Debe iniciarse el análisis de esta tendencia, haciendo mención a lo señalado por la UNODC, *“La corrupción ……. perjudica con mayor dureza a las personas en situación de pobreza, especialmente a las mujeres, quienes representan una proporción mayor de los pobres en el mundo.”[[22]](#footnote-22)*, en ese sentido, resulta evidente que esta tendencia implica un riesgo respecto del logro de la situación futura deseada, por cuanto, la corrupción estaría impactando con mayor fuerza en la sociedad, viendo incrementados sus efectos negativos sobre una población muy específica, en este caso las mujeres. Se debe considerar que, al ser las mujeres el grupo más afectado por actos de microcorrupción (de acuerdo a la XI Encuesta Nacional Anual sobre Percepciones de Corrupción, realizada por Proética), pudiera generarse un círculo vicioso y eterno, al incrementar el número de personas que pertenece a uno de los grupos más vulnerables frente a los actos de corrupción. En ese sentido, se precisa que el aumento de la desigualdad de género podría ocasionar que la corrupción se focalice en un grupo vulnerable, generando, de esta forma, mayor desigualdad y, por tanto, un mayor impacto del problema “ocurrencia de la corrupción en la administración pública”. Cabe precisar, que la relación de esta tendencia no debe ser entendida en términos de que el grupo afectado es más propenso a incurrir en actos de corrupción, sino que sobre éste el impacto del problema sería mayor

No obstante, debe resaltarse que, si se avanza en el logro de la situación futura deseada, al disminuirse los actos de corrupción en virtud del incremento del estándar de integridad en la gestión pública, ello quitaría presión al problema estructural de desigualdad y exclusión social.

* **Aumento de la Pobreza.** En la misma línea de la tendencia anterior y como quiera que la corrupción afecta de manera desproporcionada y perjudica con mayor dureza a las personas en situación de pobreza, también resulta evidente el riesgo que agudiza el problema público y dificulta el logro de la situación futura deseada, por cuanto, a mayor pobreza, mayor es la población que será vulnerable a los actos de corrupción, así como mayor también serán las medidas asistencialistas que deba adoptar el Estado para contrarrestar dicha situación, generando así que se destinen recursos para ello, que bien podrían dirigirse a inversión en capital humano o en mejorar la provisión de servicios públicos. En términos estrictos, el incremento de la pobreza tiene un impacto indirecto en el problema público, ya que el Estado deberá prever mayores recursos para implementar políticas redistributivas, tales como programas sociales, servicios públicos, entre otros, los cuales son espacios donde se generan mayores riesgos de corrupción, más aún considerando la limitada capacidad operativa de las entidades públicas para hacer frente a estos riesgos. Por lo que, si se incrementan significativamente los riesgos de corrupción en este tipo de intervenciones públicas, se pone en riesgos la solución del problema pública, ocurrencia de la corrupción.
* **Aumento de la Trata de Personas.** Respecto de esta tendencia, debe señalarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene la existencia de un vínculo directo con actos de corrupción de las autoridades en el país de destino ya sea porque están implicadas en el negocio o porque, aun sabiendo de la existencia de situaciones en que ciertas personas son sometidas a estos terribles abusos, no intervienen[[23]](#footnote-23); así que la incidencia del aumento de este delito es un riesgo como quiera que ello pone presión sobre el problema de la corrupción, por cuanto los servidores públicos respectivos seguramente se verán sobornados para no intervenir en el mejor de lo casos.
* **Incremento de actos delictivos.** De conformidad con lo indicado por el CEPLAN en su documento prospectivo al 2050, se indica que los hechos delictivos se incrementarán en el período 2020-2030 (influenciado por supuesto por el Covid19); no obstante, a pesar que para el periodo 2013-2018, la tasa de victimización por robo de dinero, cartera o celular continuó siendo mayor en comparación a los otros tipos de delitos, la presente tendencia se ha incluido entre aquellas que constituyen un riesgo para el logro de la situación futura deseada, como quiera que la CIDH en la investigación antes mencionada, sostiene que *“…****la corrupción es una plaga*** *insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y* ***permite el florecimiento de la delincuencia organizada. …****”* (resaltado agregado), de allí que, a mayor número de actos delictivos, se incrementan las oportunidades para el surgimiento de prácticas delictivas asociadas; por ejemplo, sostiene la CIDH que *“… el narcotráfico genera una situación de “violencia y corrupción” que puede alcanzar niveles intolerables y que amenaza con destruir el tejido social, político y económico de un país, sea por la violencia que este ejerce contra sus agentes o por la corrupción que instala en organismos policiales. …”.*

**Tendencias Políticas**.

* **Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia.** De acuerdo a la ENAHO, en el periodo 2007-2018 más del 50% de personas mayores de 18 años consideró que la democracia en el Perú funcionaba mal o muy mal, registrándose la tasa más alta de insatisfacción en 2008 (64,8%), y la más baja, en 2012 (44,5%). Asimismo, según lo citado por el CEPLAN en su documento de prospectiva, de acuerdo al INEI, la situación de la gobernabilidad y la democracia en un país están estadísticamente asociados con la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil; así como con el incremento de la tasa de acceso a la educación y al crecimiento del PBI per cápita.

No obstante lo antes expuesto sobre los hechos asociados al mal funcionamiento de la democracia, debe destacarse lo señalado por la CIDH, respecto de los actos o prácticas de corrupción que impactan grandemente sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas; así las cosas y adicional a lo señalado, la percepción sobre este mal funcionamiento de la democracia, constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada, ya que aleja al ciudadano de las entidades estatales y, en general de la política, generando pesimismo, desconfianza y limitando, de esta forma, su rol de vigilante y condición de actor clave en la lucha contra la corrupción. Asimismo, se envía un mensaje equivocado a la sociedad respecto de la normalidad que implica ver a las autoridades públicas utilizar al Estado para beneficios privados, desviando el cumplimiento de sus funciones propias.

En esa dirección, resulta obvio que la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia crea un caldo de cultivo para los actos de corrupción, y a su vez, los Estados donde existe una corrupción extendida no pueden cumplir con sus obligaciones para el logro de sus fines, de manera tal, que es evidente el impacto en el logro del objetivo general de la política.

* **Menor confianza en partidos políticos.** De acuerdo a lo señalado por el CEPLAN, hasta 2018, el nivel de desconfianza en los partidos políticos era de 93,2%, con lo cual y en comparación con los datos registrados en 2016 (90%), presenta una tendencia creciente comparado con los datos registrados en 2016 (90%). Asimismo, y antes de la pandemia por COVID-19, al 2030, se esperaba que, la democracia llegue a su madurez y los partidos políticos formen alianzas para reducir la cantidad y mejorar la calidad; sin embargo, con el impacto del COVID-19, los expertos reafirman que, para el periodo 2020-2021, la confianza en los partidos políticos disminuirá significativamente; y para el periodo 2022-2030, si bien habrá crecimiento en la confianza en los partidos, esta será mínima.

Ahora bien, la desconfianza en los partidos políticos es un problema global que principalmente, se genera por cuanto su reputación se ha visto involucrada por escándalos de corrupción en los últimos años; en esa dirección la CIDH manifiesta, que, entre los principales sucesos, se encuentra la venta de votos, financiamiento dudoso de las campañas electorales, entre otros. Del mencionado contexto, resulta forzoso concluir que la desconfianza en los partidos políticos constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada, pues ésta se traduce en un menor interés por parte de la ciudadanía en participar en la política del país, debilitando con ello el proyecto democrático, distanciando al ciudadano de las entidades públicas y generando desconfianza en las autoridades y funcionarios, y problemas de gobernabilidad. Asimismo, crea una cultura de individualista en la sociedad y muchas veces representa una justificación para la comisión prácticas antiéticas, por ejemplo, la evasión de impuestos. También se debe mencionar que esta desconfianza muchas veces parte, desde la competencia electoral, los candidatos ya se encuentran comprometidos para el desvío del poder que detentarán para satisfacción de intereses privados. De allí que el compromiso de los altos funcionarios, necesario para la adopción del estándar de integridad en la gestión pública sea inexistente desde el inicio.

* **Mayor Desconfianza en los Poderes del Estado**. Esta tendencia que señala el CEPLAN, se encuentra relacionada directamente, en términos de impacto sobre el logro del objetivo general de la política, con las dos tendencias nacionales precedentes, ya que, a mayor desconfianza en los Poderes del Estado, igual desconfianza en el sistema democrático, por cuanto la división e independencia de los poderes públicos, constituye uno de los pilares más importantes del sistema.

En ese sentido, se tiene que el documento de prospectiva del CEPLAN sobre las Tendencias Nacionales al 2050, señala que la confianza en los poderes del Estado podría entenderse, como la seguridad o certeza de que sus instituciones ejecutiva, legislativa y judicial cumplirán su papel y funciones de manera correcta. En dicha forma correcta de desempeñarse se encuentra una variada gama de materias, sin embargo y para el análisis del impacto en la situación futura deseada, se considera que la desconfianza en los Poderes del Estado genera apatía y pesimismo en la ciudadanía, respecto a la resolución de la problemática de corrupción del país, percibiéndola como inherente a la administración pública y como una realidad compleja, difícil de cambiar a la que el ciudadano tiene que acostumbrarse. Este problema se vuelve más complejo cuando surge por la penetración y ramificación de la corrupción desde las más altas esferas del gobierno, hacia todos los poderes de Estado, permitiendo que los esquemas criminales capturen el Estado y lo ponga a su servicio.

Así las cosas, se muestra evidente que dicho esquema constituye un riesgo para la efectiva adopción del estándar de integridad en la gestión pública, ya que no sólo no incrementará, sino que lo más probable es que desaparezca.

* **Mayor Institucionalidad**. Hasta el año 2018 el indicador de institucionalidad[[24]](#footnote-24) (3,22) había presentado una tendencia ligeramente decreciente comparado con los datos reportados en el periodo 2012-2013 (3,44). Sin embargo, la pandemia del COVID-19, todas las debilidades institucionales se han visto amplificadas y han revelado un mal carácter estructural de la institución.

En ese orden de ideas y según lo explicado en el documento de prospectiva del CEPLAN bajo análisis, se entiende que las instituciones económicas son resultado de las instituciones políticas y de cómo se distribuye el poder en una sociedad; por lo tanto, dichas instituciones pueden prosperar si las instituciones políticas contribuyen en ello.

Así las cosas, debe mencionarse que el Índice de Competitividad Global[[25]](#footnote-25) viene presentando una evolución desfavorable por los temas de ética y corrupción, así, el Perú se encontró en el puesto 116 de 137 países. En 2017, los escándalos de corrupción difundidos por los medios de comunicación a nivel nacional, generaron que los ciudadanos desconfíen de las instituciones públicas y privadas, ubicándose en el ranking de las instituciones públicas, en el puesto 123; y en instituciones privadas, en el puesto 91.

Por otro lado, The Economist Intelligence Unit (2019), elaboró el Índice de Democracia[[26]](#footnote-26), indicador que mide a 165 estados independientes y dos territorios a nivel mundial. Por lo tanto, según ranking The Economist Intelligence Unit (2019), en 2018, el Perú se ubicó en el puesto 59 a nivel mundial (subió 2 puestos respecto al reporte del 2017) y en el puesto 11 a nivel de América Latina (se mantiene en el mismo puesto desde el 2016). Además, según el Índice de Democracia, el Perú ha presentado una tendencia ascendente durante el periodo 2006-2018.

No obstante lo anterior y a pesar del impacto de la pandemia por COVID-19, los expertos nacionales, estimaron que, en el periodo 2020-2030, el nivel de institucionalidad en el Perú crecerá; es decir, el índice de competitividad institucional crecerá, el índice de competitividad institucional del sector público crecerá, y el índice de funcionamiento del gobierno crecerá; generándose el contexto propicio y constituyendo una oportunidad para el incremento del estándar de integridad en la gestión pública, situación que favorecerá a que las entidades públicas, de los tres niveles de gobierno, adopten medidas para fortalecer y consolidar un cultura de integridad, lo que a su vez producirá que las instituciones económicas puedan prosperar.

* **Mayor influencia de las economías ilegales en el sistema político.** En los últimos 5 años se ha podido observar la influencia que habían tenido las economías ilegales en el sistema político, en ese sentido, hasta 2020, los candidatos en las elecciones regionales y municipales que estaban involucrados con actividades ilícitas (3%) habían presentado una tendencia ligeramente descendente comparado con lo reportado en 2014 (3.35%). Ahora bien, luego de la pandemia del COVID-19, los expertos estiman que, para el periodo 2022-2030, la economía ilegal en el sistema político continuará incrementándose.

Por lo antes expuesto, se estima que el número de candidatos regionales y municipales involucrados en actividades de narcotráfico crecerá, el número de candidatos presidenciales vinculados con el narcotráfico disminuirá ligeramente, la superficie cultivada de coca se mantendrá en los niveles reportados hasta antes de que surja la COVID-19, y el porcentaje de población que piensa que la mitad o más de la mitad de sus autoridades locales están involucrados en actividades ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y tráfico de animales silvestres crecerá.

Resulta lógica entonces la percepción ciudadana, ya que, según los datos del Barómetro de las Américas, citado por el CEPLAN en su documento de prospectiva, en 2018, 6 de cada 10 ciudadanos en el Perú piensa que la economía ilícita genera corrupción en los sistemas políticos (autoridades); además, el 59,0% de los ciudadanos piensa que, la mitad o más de la mitad de sus autoridades locales estaba involucrado en actividades ilícitas, un mayor porcentaje respecto a lo señalado en 2017 (48%).

Ello representa un serio obstáculo para la concreción de la situación futura deseada, en tanto la forma que tienen estas economías ilegales (actividades ilícitas) para influenciar y/o penetrar en el sistema político, es mediante el financiamiento ilícito de candidatos y sus agrupaciones políticas, actos de corrupción en el sistema de justica, o influencia indebida al más alto nivel (captura del Estado).

En ese orden de ideas, es importante destacar que, partiendo del panorama anterior, en la actualidad cobra aún más fuerza el diseño y formulación de intervenciones estatales para la prevención y sanción de actos de corrupción, apostando para ello en el incremento de los niveles de integridad de los servidores públicos y en esa dirección apunta el estándar de integridad aplicable a la gestión pública.

**Tendencias de Actitudes, Valores y Ética**.

**Persistencia de la Discriminación.**

La presente tendencia se resume en los siguientes postulados: hasta 2017, las personas que señalaron ser víctima de maltrato o de alguna forma de discriminación (15,8%) habían presentado una tendencia decreciente comparado con los datos reportados en 2014 (18,4%). Asimismo, las personas indígenas y afroperuanas vienen siendo las más vulnerables a ser víctima de discriminación, principalmente por su color de piel y por su nivel de ingresos (en el 2017 el 28,0% de afroperuanos, 29,0% indígenas amazónicos y 37,0% indígenas quechuas y aimaras señalaron haber sufrido ese hecho).

Ahora bien, de esta tendencia debe resaltarse lo aseverado por el CEPLAN y que se sustenta en lo anterior, y es lo referido a que las principales razones por las cuales los peruanos se sintieron discriminados fueron: por no tener conocidos en los espacios públicos; en efecto, los datos del INEI (2018), señalan que el 35,9% piensa que al no tener “vara”, se tiene mayor probabilidad de ser discriminado en los establecimientos de salud, el 27,8% en su centro de trabajo, el 38,0% en la comisaria, y el 42,6% al solicitar un servicio en una dependencia pública.

En ese sentido y como quiera que la afirmación “no tener vara”, puede implicar de alguna forma la ocurrencia de tráfico de influencias u otros delitos de corrupción, o inconductas funcionales, esta tendencia constituiría un riesgo que agudizaría el problema público de persistir en el período 2022-2030, como lo manifiesta el CEPLAN.

**Persistencia de la Corrupción.** Según el CEPLAN, el porcentaje (59,7%) de personas que consideraron a la corrupción como el principal problema del país había presentado una tendencia a aumentar, comparándolo con el porcentaje registrado en 2008 (17,9%); asimismo, y para el período 2022-2030, los expertos han señalado que la corrupción disminuirá ligeramente.

En ese orden de ideas, el ya citado documento de prospectiva del CEPLAN señala que, según Transparencia Internacional en la región de América Latina y el Caribe existe una tendencia asociada al deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de gobernanza; así continúa la misma organización, indicando que el papel de los gobiernos de América Latina frente a la corrupción ha sido deficiente; muestra de ello es que acciones como el soborno se hayan convertido en parte de un fenómeno habitual.

Evidentemente que lo antes expuesto, constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada ya que se entenderá que las intervenciones ejecutadas no generan los efectos esperados, como quiera que todos los elementos necesarios para la proliferación de prácticas de corrupción se conjugan.

**Menor conciencia ambiental de la ciudadanía.** Esta tendencia abarca lo relacionado al cambio climático y sus efectos; tema que ha sido en extremo importante y de gran discusión global en los últimos años.

En el Perú, se analizó cuáles son los actores cuyas acciones incrementan los efectos negativos del cambio climático, y en general, se percibió cinco (5) actores como los principales generadores de efectos negativos del cambio climático, entre los que figuró en primer lugar, la minería informal (mencionada por el 70% de los encuestados).

Ahora bien, Proetica[[27]](#footnote-27) ha contemplado en su análisis de vulnerabilidades y riesgos de corrupción en el otorgamiento de licencias, permisos y contratos relacionados con el sector minero, un factor contextual importante y es que pudieran existir grupos de interés político relacionados con la actividad minera que promueven candidaturas, así, el riesgo de corrupción de que grupos de interés relacionados con la actividad minera pudieran promover candidaturas es muy alto porque mediante el financiamiento de candidatos políticos buscarían “acceder al poder político”. Otro factor que tiene que ver con la práctica de proceso y temas laborales que afecta al sector, y determinado como una debilidad, es la alta rotación de funcionarios en los altos cargos de confianza, lo que se conoce como “puerta giratoria”. El conflicto de interés puede darse ya que desde el Estado estarían en condición de tomar decisiones que podrían favorecer a intereses particulares desvirtuando el fin de la institución; aunque dicho riesgo es sumamente difícil de acreditar.

Respecto de la certificación ambiental, las comunidades que se ven impactadas por la actividad minera, tiene la percepción de falta de transparencia.

Asimismo y solapado detrás del argumento de “promoción de la inversión en aras del interés nacional”, se pasa por sobre los derechos ambientales y comunitarios, y que más bien obedecen a actos de corrupción entendida como el abuso del poder delegado para beneficio de un grupo en perjuicio de los demás, lo que, a su vez, debilita el sistema legal y la institucionalidad minera y ambiental.

Así las cosas y como quiera que la minería informal es de las principales causas del cambio climático, la disminución de la conciencia ambiental podría también incidir directamente sobre la tolerancia de la sociedad sobre la ocurrencia de la corrupción, por ser parte de la apatía, el efecto negativo ambiental, que se genera del desarrollo de toda la cadena de eventos explicada. De allí que, esta tendencia constituiría un riesgo que agudizaría el problema público poniendo presión sobre el mismo.

**Tendencias Globales.**

Ocurre una situación similar o peor cuando se excluyen, por omisión o desconocimiento, los fenómenos mundiales, cada vez más determinantes en la vida política, económica y social de cada país. El hecho de definir prioridades y políticas sin prestar la debida atención a las tendencias y acontecimientos globales puede conducir a resultados distintos de lo que se supondría si se hubieran anticipado y se les hiciera un seguimiento.

En otro orden de ideas y en adición a las tendencias aportadas por el CEPLAN, se han considerado algunas tendencias globales[[28]](#footnote-28) que se estiman relevantes para la implementación de la PNILCC:

* **Incremento de tecnologías disruptivas.** Los expertos hablan de una aceleración tecnológica aún más rápida que la experimentada en el campo computacional. Como consecuencia, gobiernos y empresas están asignando más recursos para preservar su vanguardia o mantenerse al día. Se multiplican los encuentros entre científicos, expertos, políticos y la sociedad civil para escudriñar los efectos de estas tecnologías en la vida de las personas.

En esa dirección, esta tendencia representa una oportunidad, ya que aumentarán las interacciones con la administración pública en un entorno digital, que se irán volviendo más segura cada vez, y en ese sentido, todas las transacciones se caracterizarán por la trazabilidad de las mismas, dejando registros e identificando responsables de cada fase de la interacción, lo que, en consecuencia, hará mucho más complicado cometer actos de corrupción sin ser detectados.

* **Cambios demográficos. Las clases medias, motor del desarrollo.** En todas las proyecciones, los expertos consideran imparable la tendencia del incremento del número de familias que salen de la pobreza y alcanzan ingresos dignos, en virtud del crecimiento económico y el aumento de la cobertura educacional. En ese orden de ideas y en el marco de nuevos estudios se ha intentado medir la magnitud de estas clases medias en términos económicos, relativos y absolutos, derivando en conclusiones sobre posibles cambios positivos en los comportamientos políticos, más proclives a la democracia, la diversidad y el emprendimiento. De allí que, ello constituye una oportunidad para el logro de la situación futura deseada, como quiera que dicha proclividad a la democracia y sus instituciones, generará indefectiblemente una intolerancia de la sociedad hacia los actos de corrupción, produciéndose eventualmente en estas clases la detonación de un cambio en la percepción en el resto de la sociedad.
* **Empoderamiento ciudadano y transformación de los gobiernos**. La conciencia ciudadana también se acrecentaría exponencialmente. Esto se debería a que el analfabetismo ha bajado: según la UNESCO, la población mundial alfabetizada pasaría del 84% en 2010 al 90% en 2030 (ISS, 2011). Se están igualando los niveles educativos entre hombres y mujeres y se prevé un marcado aumento de la demanda de educación superior. El uso de Internet ha registrado un crecimiento exponencial.

Por otra parte, se tiene que la defensa y promoción de los derechos políticos, la asunción de mayor presencia y liderazgo por parte de la mujer, así como la exigencia de igualdad y dignidad de los pueblos indígenas, no dejarán de sentirse.

Las instituciones democráticas deberán adaptarse a estos nuevos retos, por cuanto deberán atender a una sociedad con mayor conciencia de derechos y mayor capacidad de exigir su cumplimiento. Este nivel de conciencia generará una mayor demanda de bienes públicos en lo que respecta a medio ambiente, educación, salud de calidad, ciudades amables y equilibrio entre regiones.

En el mismo orden de ideas expuesto, se verá como la libertad y la democracia serán las aspiraciones que prevalecerán las próximas décadas, empoderando a los ciudadanos para elevar sus demandas de participación y bienestar.

Para la atención de este nuevo nivel de conciencia social, se requerirán Estados que posean los recursos y atribuciones necesarios y el personal idóneo e íntegro, capaces de ejercer funciones que tienda a evitar abusos y conductas no éticas y que promuevan un desarrollo productivo competitivo y sostenible, con protecciones sociales.

Todo lo antes expuesto, constituye un caldo de cultivo para generar una cultura de integridad pública, que impulse la intolerancia social a los actos de corrupción y los consideren anormales; así como para exigir la conformación y gestión de entidades públicas que resuelvan y satisfagan demandas y necesidades ciudadanas, y no, que lo hagan para la obtención o desvío de beneficios particulares.

* **Acontecimientos inesperados: ¿cómo preverlos?** Este documento ha incluido la tendencia de acontecimientos inesperados, como una situación poco probable, resaltando la necesidad de contemplarlos a fin de reaccionar mejor y emprender acciones oportunas; como por ejemplo la pandemia declarada por Covid19. Definitivamente, deben considerarse como riesgos o amenazas que pueden impactar en el agravamiento del problema público.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE TENDENCIAS NACIONALES Y GLOBALES** | | | | | | | | |
| **TIPO** | **NACIONAL / GLOBAL** | **TENDENCIA** | **DESCRIPCIÓN** | **RIESGO / OPORTUNIDAD** | **ANÁLISIS** | **PROBALIDAD DE OCURRENCIA** | **IMPACTO POTENCIAL** |
| **TENDENCIAS SOCIALES** | **NACIONAL** | Incremento de la Población | Al 2050, se esperaba que la población continuará incrementándose y se situara en 39 millones 363 mil personas. Sin embargo y por el impacto del Covid19, la mitad de los expertos nacionales, estima que para el periodo 2022-2030, la población seguirá creciendo ligeramente, frente a la otra mitad, que sostiene que no variará. Así, se espera que hacia el 2030, la población peruana se situé en 35 millones 792 mil. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | A mayor población el Estado debe generar respuestas que implican una mayor inversión en términos de recursos financieros y humanos, que permitan atender y minimizar los efectos de la corrupción en la población y en el desarrollo del país; especialmente, aquellos efectos sobre el ejercicio pleno de derechos como la salud, la educación y aquellos que incrementan la discriminación de los mas vulnerables. | 5 | 3 |
| **GLOBAL** | Acontecimientos inesperados: ¿cómo preverlos? | Son situaciones poco probable, resaltando la necesidad de contemplarlos a fin de reaccionar mejor y emprender acciones oportunas; como por ejemplo la pandemia declara por Covid19. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | Definitivamente, deben considerarse como riesgos o amenazas que pueden impactar en el agravamiento del problema público. | 3 | 3 |
| **NACIONAL** | Cambios en la estructura etaria de la población. | El Perú muestra una tendencia al incremento de la población envejecida; así, refleja un cambio de la estructura etaria de la población, por cuanto en el grupo de 0 a 19 años, en 2007 representaban el 45,5%, y en 2017, se redujeron a 34,6%; según el centro, este hecho responde a la reducción de las tasas de natalidad (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Asimismo, la población de 60 años a más pasó de 10% a 11,9%, durante el mismo periodo de tiempo. | OPORTUNIDAD | A mayor población adulta (40 a 70 años, según Proética), mayor será la intolerancia frente a actos de corrupción y podrá incrementarse las respuestas reactivas y de lucha contra la corrupción, lo que indefectiblemente contribuiría al logro del objetivo general de la política. | 4 | 4 |
| RIESGO | N/A | N/A | N/A |
| **GLOBAL** | Cambios demográficos. Las clases medias, motor del desarrollo | Aunque el impacto del Covid ha generado que la pobreza crezca, dicho aumento será leve; por lo que se proyecta un incremento del número de familias que salen de la pobreza y alcanzan ingresos dignos, en virtud del crecimiento económico y el aumento de la cobertura educacional | OPORTUNIDAD | El peso de un incremento en la educación, impacta en las clases medias en términos económicos, relativos y absolutos, produciendo que los comportamientos políticos sean proclives a la democracia, la diversidad y el emprendimiento. De allí que, ello constituye una oportunidad para el logro de la situación futura deseada, como quiera que dicha proclividad a la democracia y sus instituciones, generará indefectiblemente una intolerancia de la sociedad hacia los actos de corrupción. | 3 | 3 |
| RIESGO | N/A | N/A | N/A |
| **NACIONAL** | Aumento de la Pobreza. | Esta tendencia, si bien es cierto venía presentando una variación hacia la disminución, con el imapcto del cambio climático y del Covid 19, se sostiene que la pobreza crecerá ligeramente. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | A mayor pobreza, mayor es la población que será vulnerable a los actos de corrupción, así como mayor también serán las medidas asistencialistas que deba adoptar el Estado para contrarrestar dicha situación, generando así que se destinen recursos para ello, que bien podrían dirigirse a inversión en capital humano o en mejorar la provisión de servicios públicos | 5 | 4 |
| **NACIONAL** | Incremento de actos delictivos. | El CEPLAN en su documento prospectivo al 2050, se indica que los hechos delictivos se incrementarán en el período 2020-2030 (influenciado por supuesto por el Covid19) | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | A mayor número de actos delictivos, se incrementan las oportunidades para el surgimiento de prácticas delictivas asociadas, que a su vez potencian o detonan los actos de corrupción | 4 | 5 |
| **NACIONAL** | Aumento de la Trata de Personas. | Se sostiene la existencia de un vínculo directo con actos de corrupción de las autoridades en el país de destino ya sea porque están implicadas en el negocio o porque, aun sabiendo de la existencia de situaciones en que ciertas personas son sometidas a estos terribles abusos, no intervienen | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | El aumento de este delito es un riesgo como quiera que ello pone presión sobre el problema de la corrupción, por cuanto los servidores públicos respectivos seguramente se verán sobornados para no intervenir en el mejor de lo casos. | 4 | 5 |
| **NACIONAL** | Aumento de la Desigualdad de Género. | Se estima que el trato inequitativo y desigual entre hombres y muejeres, respecto de las condiciones sociales y de vida y en el goce de derechos fundamentales, crecerá ligeramente debido al impacto del Covid-19 | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | Al ser las mujeres el grupo más afectado por actos de microcorrupción (de acuerdo a la XI Encuesta Nacional Anual sobre Percepciones de Corrupción, realizada por Proética), pudiera generarse un círculo vicioso y eterno, al incrementar el número de personas que pertenece a uno de los grupos más vulnerables frente a los actos de corrupción. | 4 | 5 |
| **TENDENCIAS POLÍTICAS** | **NACIONAL** | Mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. | De acuerdo a la ENAHO, en el periodo 2007-2018 más del 50% de personas mayores de 18 años consideró que la democracia en el Perú funcionaba mal o muy mal, registrándose la tasa más alta de insatisfacción en 2008 (64,8%), y la mas baja, en 2012 (44,5%). | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | La percepción sobre este mal funcionamiento de la democracia, constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada, como quiera que ello envía un mensaje equivocado a la sociedad respecto de la normalidad que implica ver a las autoridades públicas utilizar al Estado para beneficios privados, desviando el cumplimiento de sus funciones propias. | 3 | 3 |
| **GLOBAL** | Empoderamiento ciudadano y transformación de los gobiernos. | La conciencia ciudadana también se acrecentaría exponencialmente. Esto se debería a que el analfabetismo ha bajado: según la UNESCO, la población mundial alfabetizada pasaría del 84% en 2010 al 90% en 2030 (ISS, 2011). | OPORTUNIDAD | este nuevo nivel de conciencia social, se requerirán Estados que posean los recursos y atribuciones necesarios y el personal idóneo e íntegro, capaces de ejercer funciones que tienda a evitar abusos y conductas no éticas y que promuevan un desarrollo productivo competitivo y sostenible, con protecciones sociales.  Todo lo antes expuesto, constituye un caldo de cultivo para generar una cultura de integridad pública, que impulse la intolerancia social a los actos de corrupción y los consideren anormales | 5 | 5 |
| RIESGO | N/A | N/A | N/A |
| **NACIONAL** | Menor confianza en partidos políticos. | Hasta 2018, el nivel de desconfianza en los partidos políticos era de 93,2%, con lo cual y en comparación con los datos registrados en 2016 (90%), presenta una tendencia creciente comparado con los datos registrados en 2016 (90%). Asimismo y antes de la pandemia por COVID-19, al 2030, se esperaba que, la democracia llegue a su madurez y los partidos políticos formen alianzas para reducir la cantidad y mejorar la calidad; sin embargo, con el impacto del COVID-19, los expertos reafirman que, para el periodo 2020-2021, la confianza en los partidos políticos disminuirá significativamente; y para el periodo 2022-2030, si bien habrá crecimiento en la confianza en los partidos, esta será mínima. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | Constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada, como quiera que desde la competencia electoral, los candidatos ya se encuentran comprometidos para el desvío del poder que detentarán para satisfacción de intereses privados. De allí que el compromiso de los altos funcionarios, necesario para la adopción del estándar de integridad en la gestión pública sea inexistente desde el inicio. | 4 | 4 |
| **NACIONAL** | Menor Institucionalidad. | Con la pandemia del COVID-19, todas las debilidades institucionales se han visto amplificadas y han revelado un mal carácter estructural de la institución. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | En definitiva el mal funcionamiento de las instituciones públicas, genera desanimo e insatisfacción en la ciudadanía, y por ende, desconfianza, lo que a su vez crea las condiciones necesarias para que la dupla necesaria en la lucha contra la corrupción (sociedad - estado) no se conforme | 4 | 4 |
| **NACIONAL** | Mayor influencia de las economías ilegales en el sistema político. | La influencia que habían tenido las economías ilegales en el sistema político, en ese sentido, hasta 2020, los candidatos en las elecciones regionales y municipales que estaban involucrados con actividades ilícitas (3%) habían presentado una tendencia ligeramente descendente comparado con lo reportado en 2014 (3.35%). Ahora bien, luego de la pandemia del COVID-19, los expertos estiman que, para el periodo 2022-2030, la economía ilegal en el sistema político continuará incrementándose | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | Al crecer las económias ilegales en el sistema político, ello se traduce en la captura de los candidatos que resultaron electos por los intereses de dichas economías. | 4 | 5 |
| **NACIONAL** | Mayor Desconfianza en los Poderes del Estado. | La confianza en los poderes del Estado podría entenderse, como la seguridad o certeza de que sus instituciones ejecutiva, legislativa y judicial cumplirán su papel y funciones de manera correcta. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
|  | La desconfianza que surge por la penetración y ramificación de la corrupción desde la más altas esferas del gobierno, hacia todos los poderes de Estado, permitiendo que los esquemas criminales capturen el Estado y lo ponga a su servicio. hace evidente que dicho esquema constituye un riesgo para la disminución de la corrupción en la gestión pública, ya que no sólo no disminuirá, sino que lo más probable es que incremente. | 3 | 4 |
| **TENDENCIAS EN VALORES** | **NACIONAL** | Persistencia de la Corrupción. | Según el CEPLAN, el porcentaje (59,7%) de personas que consideraron a la corrupción como el principal problema del país había presentado una tendencia a aumentar, comparándolo con el porcentaje registrado en 2008 (17,9%); asimismo, y para el período 2022-2030, los expertos han señalado que la corrupción disminuirá ligeramente. | OPORTUNIDAD | Aunque la tendencia se muestra totalmente negativa, no puede dejar de considerarse que se ha determinado una tendencia a una ligera disminución de la corrupción, lo cual pudiera constituir una oportunidad para generar confanza ciudadana, en torno a las intervenciones estatales que se diseñen, en virtu de la percepción de mejora respecto del problema en cuestión. | 3 | 3 |
| RIESGO | Esta forma de percibir la corrupción en América Latina está enraizada en su cultura, de allí que esto pudiera entorpecer el logro del objetivo planteado respecto de la disminución de la corrupción en la gestión pública, por cuanto esa manera cultural de percibir el problema genera incredulidad o desconfianza ante cualquier intervención o medidas estatales que se propongan. | 4 | 5 |
| **TENDENCIAS TECNOLÓGICAS** | **GLOBAL** | Tecnologías Disruptivas | Se habla de una aceleración tecnológica aún más rápida que la experimentada en el campo computacional. Como consecuencia, gobiernos y empresas están asignando más recursos para preservar su vanguardia o mantenerse al día. Se multiplican los encuentros entre científicos, expertos, políticos y la sociedad civil para escudriñar los efectos de estas tecnologías en la vida de las personas. | OPORTUNIDAD | Esta tendencia representa una oportunidad, ya que aumentarán las interacciones con la administración pública en un entorno digital, que se irán volviendo más segura cada vez, y en ese sentido, todas las transacciones se caracterizarán por la trazabilidad de las mismas, dejando registros e identificando responsables de cada fase de la interacción, lo que en consecuencia, hará mucho más complicado cometer actos de corrupción sin ser detectados. | 5 | 4 |
| RIESGO | N/A | N/A | N/A |

**ANEXO 4**

**Contexto y el análisis de sus escenarios.**

Según el CEPLAN, los escenarios son proyecciones que se estiman para describir una eventual o posible configuración de contextos futuros, que a escala global podrían afectar el desarrollo nacional, las intervenciones que se planifiquen estratégicamente para resolver problemas públicos pendientes, así como la Visión Concertada del País a largo plazo.

La Situación futura deseada para la PNILCC, se ha planeado al 2030 considerando cinco escenarios tomados de documentos del CEPLAN; dichos escenarios se ven influenciados e impactados por circunstancias económicas y sociopolíticas beneficiosas y perjudiciales para la implementación de la política, de allí que resulte necesario tomar en cuenta dichos escenarios para poder gestionar la incertidumbre y lograr la anticipación estratégica para el logro del escenario apuesta.

Aclarado lo anterior, se tiene que el CEPLAN identifica cinco escenarios[[29]](#footnote-29): i. Escenario de desastre mayor, ii. Escenario de crisis económica, iii. Escenario de disrupción tecnológica, iv. Escenario de desarrollo nacional al 2050, y v. Escenario de crisis social. Para efectos de la PNILCC, se considera los siguientes escenarios:

**1. Escenario de desastre mayor.**

Según el CEPLAN, este riesgo había sido identificado y analizado como uno de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor magnitud de impacto durante el periodo 2018-2020, que mostraba una gran probabilidad de ocurrencia de un sismo-tsunami que generaría colapso de hospitales y viviendas, pérdida de años de vida saludable, desnutrición infantil crónica, pobreza monetaria, inestabilidad económica, aumento de la inseguridad.

Resulta difícil precisar algún beneficio para el logro de la situación futura deseada, y en general, pareciera lo mismo para cualquier otra situación. En materia de riesgo, se considera que tal y como se ha demostrado con la declaratoria del Estado de Emergencia por la Pandemia del COVID19, el referido evento ha generado que el Estado deba responder a la sociedad proveyendo el servicio de salud, lo que a su vez ha producido que las entidades públicas encargadas de hacerlo en los 3 niveles de gobierno, requieran insumos adicionales para ello (recursos financieros, materiales y humanos); así y en el caso de la adquisición de los insumos materiales necesarios, se ha creado un caldo de cultivo perfecto para la comisión de prácticas de corrupción, ya que, por un lado las instancias encargadas de controlar se encuentran también dirigiendo sus esfuerzos a la lucha contra el virus, y por otro lado, se tienen asignaciones de recursos financieros extraordinarios a las entidades respectivas, a las que se han exceptuado de ciertos controles en virtud de la emergencia.

Lo antes expuesto se puede verificar con los últimos acontecimientos, en los cuales participaron activamente los representantes ocasionales del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y la ciudadanía, una dinámica alejada de la concertación para fijar metas claras para el país, en un contexto de necesidad de estabilidad política para cerrar las grandes brechas del país en varios temas urgentes, la base de todos estos conflictos: las **acusaciones por corrupción**; es bastante notorio que el comportamiento de la clase política y la reacción de la ciudadanía, las coyunturas futuras podrían fluctuar con escenarios inquietantes en donde no haya acuerdos con la reacciones extremas.

De este escenario, podría surgir lo que pudiera denominarse un brote de corrupción.

**2. Escenario de Crisis económica.**

De acuerdo al análisis realizado por el CEPLAN, hasta el año 2019, el Perú tenía buenas proyecciones de crecimiento económico, el país había logrado avances importantes en términos de reducir la pobreza monetaria e incrementar significativamente el ingreso de los hogares. Esta proyección, sin embargo, cambió drásticamente, en el 2020, con la aparición de la Covid, que ubicó a la economía nacional en una etapa de contracción.

Este escenario representa un riesgo para la implementación de algunas medidas dispuestas en la Política. En principio implementar la función de integridad de manera óptima requiere que las entidades públicas cuenten con personal capacitado, recursos financieros y logísticos, y con un órgano especializado al interior de las entidades; lo cual implica recursos financieros altos que debe asumir el Estado. Dichos recursos serían más limitados si la economía del Estado se encuentra en contracción debido al impacto de la pandemia y al contexto internacional de recesión.

En línea con el comentario anterior, existen otras medias importantes para lograr los objetivos de la política como lo son la creación de un sistema nacional de integridad, que implicaría entre otros, el fortalecimiento de la capacidad operativa de las entidades vinculada con la prevención de la corrupción; otra medida destacable es la implementación de campañas de sensibilización e informativas dirigidas a la ciudadanía para comprometerlos en la lucha contra la corrupción.

No obstante, las limitaciones descritas, que se presentarían si se materializa el escenario de crisis económica, la Política prevé algunas medidas para neutralizarlo, entre otras, la creación de plataformas virtuales, cuya implementación no implica costos para las entidades públicas; o el desarrollo de programas de capacitación gratuitos que permitan fortalecer las competencias del personal que trabaja en las materias vinculadas con integridad y lucha contra la corrupción.

**3. Escenario de disrupción tecnológica**

En virtud de una serie de medidas adoptadas en 2020 como respuesta a los efectos de la Pandemia por Covid 19, tales como las políticas laborales y productivas que se implementaron a través de nuevos modelos de producción y de nuevas tecnologías, para aumentar ordenadamente los niveles productivos previos a la crisis; la adecuación de los servicios educativos mediante la implementación de tecnologías que permitieran mantener el distanciamiento social; todo ello generó un proceso de transformación digital con muchos beneficios para el desarrollo del país y de la población.

Es evidente que el aumento de la disrupción tecnológica, tiene un impacto sobre las diferentes áreas de la vida de los ciudadanos y de las personas en general. En ese sentido y respecto a la lucha contra la corrupción, es importante destacar que en el marco de este escenario el gobierno adoptó mecanismos de transparencia digital para la gestión pública. Implementó plataformas de interacción con el público para conocer sus necesidades y atender sus inquietudes respecto a temas de interés público como presupuesto, inversión pública, entre otros. Esto generó que el índice de gobernabilidad se incremente y se mantenga por encima de lo esperado en el periodo 2021-2050.

Así las cosas, son muchos los beneficios que la “era digital” puede generar; por ejemplo, se dice que en *las burocracias el papel es poder*[[30]](#footnote-30)*,* es por ello, que los gobiernos progresistas y reformadores, apuntan a la digitalización que permita erradicar los sistemas analógico basados en papel, como una forma de interactuar con los ciudadanos; así las cosas, al eliminar los papeles de la gestión de lo público, también se puede abordar la corrupción, ya que las nuevas tecnologías permiten a los que combaten la corrupción, dentro y fuera del aparato estatal, revelar, prevenir e incluso predecir prácticas corruptas que en el pasado podrían estar ocultas tras un velo de opacidad habilitada para el papel.

Definitivamente, lo digital permite simplificar los trámites administrativos, así como que se disponga de trazabilidad de las fases, pasos y decisores involucrados, en dichos procedimientos, transparentando de principio a fin la actividad administrativa. Asimismo, la digitalización puede dar lugar a impulsar la determinación de responsabilidades a través de “datos procesables”, así como también reduce la discrecionalidad de los servidores públicos.

Finalmente, puede concluirse que *“la tecnología se ha convertido en el mayor aliado de la transparencia para lograr la integridad en el sector público. Junto con la resolución política, la revolución digital puede interrumpir la corrupción de una manera que nunca imaginamos posible.”*[[31]](#footnote-31)

Ahora bien, pareciera no existir un riesgo en este escenario para la lucha contra la corrupción, ya que a priori, pareciera que sólo pueden vislumbrarse oportunidades. Sin embargo y aunque en el presente escenario la educación y los estudiantes son lo que mayores avances mostraron, debe mencionarse que no es un secreto que el aumento en el uso de las tecnologías puede generar exclusión, puede agrandar las brechas en cuanto a la participación ciudadana en los asuntos públicos que las apliquen, ya que para el manejo y uso de las nuevas tecnologías se requieren de habilidades y competencias, que en la mayoría de los ciudadanos no están presentes; por lo que la exclusión de algunos ciudadanos de la posibilidad de hacer control social en un entorno digital, podría constituir un riesgo que agudiza el problema público identificado.

**4. Escenario de desarrollo nacional al 2050**

De acuerdo a este escenario, el Perú al 2050, logró una democracia sólida, con un sistema político abierto y transparente, que respeta las libertades políticas y civiles, que está respaldada por una cultura donde se promulga el Estado de Derecho, y se busca el desarrollo social y el desarrollo y crecimiento económico para todas las personas. La ciudadanía se encuentra informada y participa activamente en la política. Son atendidos por una administración pública moderna, ágil, eficaz y eficiente, enfocada en satisfacer las necesidades de la sociedad. El Perú logró superar la crisis sanitaria, económica, social y de la gobernanza y ahora los ciudadanos confían en el funcionamiento del gobierno y en las instituciones públicas que la conforman, superando así la brecha que existía con los países que conforman la OCDE.

Gracias a la participación ciudadana se incrementó las acciones anticorrupción; la acción comunitaria fue clave en la vigilancia y prevención del delito, todo ello acompañado de una justicia ágil y eficaz.

En ese sentido, dado que las personas se encuentran informadas y participan activamente en la política, y además son atendidos por una administración pública moderna, ágil, eficaz y eficiente, enfocada en satisfacer sus necesidades, lo que podría implicar una mayor exigencia frente al manejo de recursos públicos, así como una intolerancia marcada a la desviación de recursos públicos para beneficios particulares o satisfacción de intereses particulares; ya que esta sociedad satisfecha y por ende fortalecida exigiría la inversión de recursos en la provisión de servicios públicos, tales como salud, educación, infraestructura (vías de comunicación, espacios públicos, etc).

No obstante, los beneficios expuestos para el logro de la situación futura deseada, es importante advertir que el fortalecimiento de la sociedad también mantendría la consolidación de la participación ciudadana a fin de tener un mayor control sobre las acciones/intervenciones del Estado y un mayor interés por las actividades políticas. Esto podría traducirse en mayores niveles de rechazo de las instituciones públicas y del sistema democrático por parte de la ciudadanía, si el Estado no adopta las reformas pertinentes y evoluciona en función a estas nuevas expectativas y demandas ciudadanas. El referido rechazo, crea un ambiente de desconfianza en general que daña la cohesión social y política, lo que a su vez perjudica la disposición de actuación y participación ciudadana conjuntamente con el Estado, que supone ser una condición esencial para la lucha contra la corrupción.

**5. Escenario de crisis social.**

Este escenario muestra que, en el Perú, la crisis sanitaria y la inacción del Estado por responder a las desigualdades e inequidades sociales, sumado a la falta de efectividad en la gestión y a los índices de corrupción, propiciaron un clima de permanente inestabilidad social a partir del año 2021.

Esta desconfianza en los poderes del Estado se mantuvo por un mediano plazo, sobre todo frente al Congreso y el Poder judicial, donde la opinión de los ciudadanos respecto al régimen político era desfavorable y desalentador, reportando un menor índice de gobernabilidad, el mismos que se mantuvo hasta 2025.

El presente escenario constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada, ya que, a mayor desigualdad social, mayor es la población que será vulnerable a los actos de corrupción, así como mayor también serán las medidas asistencialistas que deba adoptar el Estado para contrarrestar dicha situación, generando así que se destinen recursos para ello, que bien podrían dirigirse a inversión en capital humano o en mejorar la provisión de servicios públicos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ESCENARIOS** | | | | | |
| **ESCENARIOS** | **DESCRIPCIÓN** | **RIESGO / OPORTUNIDAD** | **ANÁLISIS** | **PROBALIDAD DE OCURRENCIA** | **IMPACTO POTENCIAL** |
| **Desarrollo Nacional al 2050** | Se indica que habrá un fortalecimiento de la sociedad, por una democracia sólida, con un sistema político abierto y transparente, que respeta libertades políticas y civiles, todo ello respaldado por una cultura que promulga el Estado de Derecho y que busca el desarrollo social y económico. La ciudadanía es atendida por una administración pública moderna, ágil, eficaz y eficiente, enfocada en satisfacer las necesidades de esa sociedad. | OPORTUNIDAD | Mayor exigencia de su parte frente al manejo de recursos públicos, así como una intolerancia marcada a la desviación de recursos públicos para beneficios particulares o satisfacción de intereses particulares. | 4 | 4 |
| RIESGO | El incremento de la participación ciudadana y un mayor interés por las actividades políticas, generaría rechazo en el sistema y sus instituciones al no llenar las expectativas de la población, las respuestas estatales. | 3 | 4 |
| **Disrupción tecnológica** | En el marco de este escenario el gobierno adoptó mecanismos de transparencia digital para la gestión pública. Implementó plataformas de interacción con el público para conocer sus necesidades y atender sus inquietudes respecto a temas de interés público como presupuesto, inversión pública, entre otros. Esto generó que el índice de gobernabilidad se incremente y se mantenga por encima de lo esperado en el periodo 2021-2050. | OPORTUNIDAD | Los gobiernos progresistas y reformadores, apuntan a que la digitalización permita erradicar los sistemas analógico basados en papel, como una forma de interactuar con los ciudadanos; así, al eliminar los papeles de la gestión de lo público, también se puede abordar la corrupción, ya que las nuevas tecnologías permiten a los que la combaten revelar, prevenir e incluso predecir prácticas corruptas que en el pasado podrían estar ocultas tras un velo de opacidad habilitada para el papel. | 5 | 4 |
| RIESGO | Aunque en el presente escenario la educación y los estudiantes son lo que mayores avances mostraron, debe mencionarse que no es un secreto que el aumento en el uso de las tecnologías puede generar exclusión, puede agrandar las brechas en cuanto a la participación ciudadana en los asuntos públicos que las apliquen, ya que para el manejo y uso de las nuevas tecnologías se requieren de habilidades y competencias | 3 | 3 |
| **Desastre mayor** | Este riesgo había sido identificado y analizado como uno de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor magnitud de impacto durante el periodo 2018-2020, que mostraba una gran probabilidad de ocurrencia de un sismo-tsunami que generaría colapso de hospitales y viviendas, pérdida de años de vida saludable, desnutrición infantil crónica, pobreza monetaria, inestabilidad económica, aumento de la inseguridad | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | Se considera que tal y como se ha demostrado con la declaratoria del Estado de Emergencia por la Pandemia del COVID19, el referido evento ha generado que el Estado deba responder a la sociedad proveyendo el servicio de salud, lo que a su vez ha producido que las entidades públicas encargadas de hacerlo en los 3 niveles de gobierno, requieran insumos adicionales para ello (recursos financieros, materiales y humanos); así y en el caso de la adquisición de los insumos materiales necesarios, se ha creado un caldo de cultivo perfecto para la comisión de prácticas de corrupción.  Lo antes expuesto se puede verificar con los últimos acontecimientos, en los cuales participaron activamente los representantes ocasionales del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y la ciudadanía, una dinámica alejada de la concertación para fijar metas claras para el país, en un contexto de necesidad de estabilidad política para cerrar las grandes brechas del país en varios temas urgentes, la base de todos estos conflictos: las acusaciones por corrupción; es bastante notorio que el comportamiento de la clase política y la reacción de la ciudadanía, las coyunturas futuras podrían fluctuar con escenarios inquietantes en donde no haya acuerdos con la reacciones extremas.  De este escenario, podría surgir lo que pudiera denominarse un brote de corrupción. | 4 | 4 |
| **Crisis Económica** | Hasta el año 2019, el Perú tenia buenas proyección de crecimiento económico, el país había logrado avances importantes en términos de reducir la pobreza monetaria e incrementar significativamente el ingreso de los hogares. Esta proyección, sin embargo, cambió drásticamente, en el 2020, con la aparición de la Covid, que ubicó a la economía nacional en una etapa de contracción. | OPORTUNIDAD | N/A | N/A | N/A |
| RIESGO | Este escenario representa un riesgo para la implementación de algunas medidas dispuestas en la Política. En principio implementar la función de integridad de manera óptima requiere que las entidades públicas cuenten con personal capacitado, recursos financieros y logísticos, y con un órgano especializado al interior de las entidades; lo cual implica recursos financieros altos que debe asumir el Estado. Dichos recursos serían más limitados si la economía del Estado se encuentra en contracción debido al impacto de la pandemia y al contexto internacional de recesión. | 4 | 4 |
| **Crisis Social** | Este escenario muestra que en el Perú, la crisis sanitaria y la inacción del Estado por responder a las desigualdades e inequidades sociales, sumado a la falta de efectividad en la gestión y a los índices de corrupción, propiciaron un clima de permanente inestabilidad social a partir del año 2021. | OPORTUNIDAD | N/A |  |  |
| RIESGO | El presente escenario constituye un riesgo para el logro de la situación futura deseada, ya que a mayor desigualdad social, mayor es la población que será vulnerable a los actos de corrupción, así como mayor también serán las medidas asistencialistas que deba adoptar el Estado para contrarrestar dicha situación, generando así que se destinen recursos para ello, que bien podrían dirigirse a inversión en capital humano o en mejorar la provisión de servicios públicos |  |  |

**ANEXO 5**

Se muestran los resultados obtenidos de la evaluación de las alternativas de solución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE VIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN IDENTIFICADAS** | | | | | | | | | | | | |
| **Causa Directa 1: Baja capacidad preventiva frente a la corrupción en las entidades públicas** | | | | | | | | | | | | |
| **Causa Indirecta** | **Alternativa** | **Tipo de Intervención** | | | **Instrumentos de Implementación (Guía de Políticas del CEPLAN - Pág. 32)** | **Evidencia (Para la construcción de las alternativas de intervención, se trabajó con conceptos e insumos que han sido legitimados por el Estado, la opinión pública, y en definitiva concordados con las aspiraciones de las personas. El detalle de las evidencias y sustentos puede verse en las páginas 18 a la 33 del archivo Word)** | **Viabilidad** | | | **Efectividad** | **Total** | **Seleccionada** |
| **Nueva Propuesta** | **Propuesta Mejorada** | **Combinación de modificación de intervenciones existentes y nuevas propuestas** | **Polít.** | **Soc.** | **Adm.** |
| **1.1 Alcance limitado en la implementación de la función de integridad en las entidades del Estado.** | 1. Fortalecer el marco normativo en materia de integridad para promover la implementación de mecanismos, herramientas e instrumentos a fin de instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Esta alternativa de Intervención se implementaría a través del mejoramiento del marco normativo, tales como directivas, lineamientos y demás orientaciones técnicas que sean necesarias para la cabal implementación del modelo de integridad; de modo que las entidades dispongan de un marco regulatorio y de herramientas necesarias para facilitar su labor.  **Informativo:** Asimismo, para complementar la implementación de esta medida, se ha considerado formular una programación de acciones y actividades, tendientes a difundir los beneficios de disponer del modelo de integridad en la entidad. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Experiencia de la “Asociación Superior de la Federación” (ASF), como agencia anticorrupción de México. - Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. - Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
| 2. Fortalecer los mecanismos de control interno, de transparencia y accesos a la información, de rendición de cuentas y otros relacionados con el enfoque integridad. |  | **x** |  | **Regulatorio:** Esta alternativa de solución, apunta a la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que estará a cargo de una Autoridad Autónoma con competencia para sancionar efectivamente los casos de incumplimiento legal, de alli que resulta claro que para la creación del sistema debe emitirse un instrumento normativo. | De igual forma, para la formulación de la presente propuesta de solución se consideró como sustento, los siguientes documentos: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
| 3. Fortalecer la estrategia de comunicación y difusión de información de la SIP y de las oficinas encargadas de ejercer la función de integridad |  | **x** |  | **Informativo:** Esta medida puede implementarse a través de la programación y diseño de una campaña comunicacional que difunda la importancia de la labor desplegada a través de la SIP (como rector) y de las oficinas de integridad de cada entidad pública. | Para la presente alternativa, se tiene como sustento los siguientes insumos:  - Informe de la OCDE sobre “Las Oficinas de Integridad Institucional en el Perú.  - Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | SI |
| 4. Crear un Sistema Nacional de Integridad que fortalezca a las entidades que se vinculan con la materia de integridad y delimite adecuadamente sus funciones, competencias y responsabilidades. |  | **x** |  | **Regulatorio:** Esta alternativa de solución, apunta a la creación de un Sistema Nacional, de alli que resulta claro que para la creación del mismo debe emitirse un instrumento normativo. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. - Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | SI |
| 5. Fortalecer capacidades de los funcionarios y servidores vinculados directamente con la función de integridad. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Como quiera que dentro de las facultades de todo rector se encuentra la de brindar asistencia técnica respecto de la implementación y manejo de la materia objeto de rectoría, y que a su vez el fortalecimiento de capacidades y habilidades forma parte de todo proceso de asistencia técnica, resulta claro que a través de la SIP, pueden emitirse directivas o lineamientos que se refieran al diseño de contenidos programáticos, para talleres, cursos, etc, que podrán impartirse a los los funcionarios y servidores vinculados directamente con la función de integridad. | En relación con esta medida propuesta, la evidencia que sustenta su inclusión, se ha generado de los siguientes documentos:  - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Compromiso de Lima. - Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | SI |
| 6. Implementar canales institucionales, mecanismos virtuales y/o herramientas que promuevan una mayor coordinación y articulación entre las entidades públicas con la SIP. |  |  | **x** | **Regulatorio:** a través del cual se recomienda especificar y reglamentar de manera más detallada la relación funcional y técnica entre la SIP y las Oficinas de Integridad Institucionales.  Así como, se pueden emitir Guías para establecer estrategias conertadas entre los distintos actores involucrados. | Respecto de la evidencia de esta alternativa de acción, se muestra la generada en el estudio de la OCDE: “Las Oficinas de Integridad Institucional en el Perú: hacia la implementación de un sistema de integridad”, a través del cual se recomienda especificar la relación funcional y técnica entre la SIP y las Oficinas de Integridad Institucionales.  Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en el Reporte. La Corrupción en el Perú N° 4: “Avances y retos en la implementación del Modelo de integridad en el Poder Ejecutivo”, le recomida a la Secretaría de Integridad Pública estandarizar la forma de sistematizar los avances de los ministerios –y en general de toda entidad pública– en la implementación del modelo de integridad. | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | SI |
|  | 1. Fortalecer el marco normativo en materia de integridad para promover la implementación de mecanismos, herramientas e instrumentos a fin de instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Esta alternativa de Intervención se implementaría a través del mejoramiento del marco normativo, tales como directivas, lineamientos y demás orientaciones técnicas que sean necesarias para la cabal implementación del modelo de integridad; de modo que las entidades dispongan de un marco regulatorio y de herramientas necesarias para facilitar su labor.  **Informativo:** Asimismo, para complementar la implementación de esta medida, se ha considerado formular una programación de acciones y actividades, tendientes a difundir los beneficios de disponer del modelo de integridad en la entidad. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Experiencia de la “Asociación Superior de la Federación” (ASF), como agencia anticorrupción de México. - Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. - Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
| **1.2 Ausencia de un mecanismo articulado e integrado de identificación y gestión de riesgos que afecta la integridad.** | 4. Crear un Sistema Nacional de Integridad que fortalezca a las entidades que se vinculan con la materia de integridad y delimite adecuadamente sus funciones, competencias y responsabilidades. |  | **x** |  | **Regulatorio:** Esta alternativa de solución, apunta a la creación de un Sistema Nacional, de alli que resulta claro que para la creación del mismo debe emitirse un instrumento normativo. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. - Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | SI |
|  | 7. Implementar mecanismos y herramientas interoperables para la generación y gestión de información en materia de integridad y lucha contra la corrupción. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Esta alternativa de solución podría implementarse a través de la emisión de lineamientos y normas técnicas que faciliten que la gestión de la información que se genera por parte de los involucrados, pueda ser interoperable. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como:  - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Compromiso de Lima.  En lineas generales, de lo que se trata de la óptima gestión de la información y comunicación, que esté disponible para todas las entidades involucradas. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
|  | 8. Priorizar las intervenciones públicas en áreas, sistemas, procedimientos u otros espacios de mayor riesgo de corrupción. | **x** |  |  | Regulatorio: Esta medidad puede implementarse a través de la formulación de lineamientos, directivas sobre gestión del riesgo de corrupción, que incluya actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupción | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se relaciona con la gestión y se ha tomado de insumos tales como: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo. | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | SI |
| **1.3 Delimitación inadecuada de funciones y competencias en materia de integridad.** | 1. Fortalecer el marco normativo en materia de integridad para promover la implementación de mecanismos, herramientas e instrumentos para instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Esta alternativa de Intervención se implementaría a través del mejoramiento del marco normativo, tales como directivas, lineamientos y demás orientaciones técnicas que sean necesarias para la cabal implementación del modelo de integridad; de modo que las entidades dispongan de un marco regulatorio y de herramientas necesarias para facilitar su labor.  **Informativo:** Asimismo, para complementar la implementación de esta medida, se ha considerado formular una programación de acciones y actividades, tendientes a difundir los beneficios de disponer del modelo de integridad en la entidad. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como:  - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Experiencia de la “Asociación Superior de la Federación” (ASF), como agencia anticorrupción de México. - Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
| 4. Crear un Sistema Nacional de Integridad que fortalezca a las entidades que se vinculan con la materia de integridad y delimite adecuadamente sus funciones, competencias y responsabilidades. |  | **x** |  | **Regulatorio:** Esta alternativa de solución, apunta a la creación de un Sistema Nacional, de alli que resulta claro que para la creación del mismo debe emitirse un instrumento normativo. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como: - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente.  - Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo.  - Compromiso de Lima. - Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Causa Directa 2: Bajo nivel de integridad de los servidores públicos** | | | | | | | | | | | | |
| **Causa Indirecta** | **Alternativa** | **Tipo de Intervención** | | | **Instrumentos de Implmentación (Guía de Políticas del CEPLAN - Pág. 32)** | **Evidencia (Para la construcción de las altenativas de intervención, se trabajó con conceptos e insumos que han sido legitimados por el Estado, la opinión pública, y en definitiva concordados con las aspiraciones de las personas. El detalle de las evidencias y sustentos puede verse en las páginas 18 a la 33 del archivo word)** | **Viabilidad** | | | **Efectividad** | **Total** | **Seleccionada** |
| **Nueva Propuesta** | **Propuesta Mejorada** | **Combinación de modificación de intervenciones existentes y nuevas propuestas** | **Polít.** | **Soc.** | **Adm.** |
| **2.1 Desconocimiento y/o desapego de las normas de conducta aplicables al ejercicio de la función pública.    2.2 Escaso liderazgo ético de la alta dirección y de los funcionarios con capacidad de decisión.** | 9. Implementar mecanismos, herramientas e instrumentos para instituir una cultura de integridad en las entidades de la administración pública. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Para la implementación de estos mecanismos, se requiere el mejoramiento y optimización del marco normativo a través de modificaciones de los instrumentos respectivos.  **Informativo:** Una vez aprobado el marco normativo correspondiente, su efectiva aceptación dependerá de la estrategia de difusión del mismo, así como de los beneficios de su cumplimiento. | Así como para la alternativa de solución anterior, la evidencia que la sustenta se ha tomado de insumos tales como: - El Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad, esta Comisión propone como una de las medidas referidas a “Fortalecer la Integridad y la Ética en el Sector Público” - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente, sostiene que las normas y procedimientos formales, tales como un código de ética, los procesos de Recursos Humanos, disposiciones de rendición de cuentas y la delegación de funciones, están en su mayoría bien documentados. Sin embargo, parece que en el Perú el verdadero desafío es asegurar que estos procedimientos sean aceptados y bien implementados por todas las partes interesadas dentro de una organización. | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | SI |
| 10. Asegurar canales apropiados de orientación, asesoramiento y consultoría, en temas de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. |  | **x** |  | **Informativo:** Para esta Alternativa de Solución, el medio de implmentación podría circunscribirse a la programación de actividades operativas, tendientes a la orientación, en el marco de las normas del clima organizacional. | La evidencia para esta propuesta de acción, se tomado de los siguientes insumos: - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, se destaca que un código de ética y las políticas de conflicto de intereses por sí solas no pueden garantizar el comportamiento ético; así, los directores jerárquicos inmediatos y los administradores o personas dedicadas pueden proporcionar orientación en forma de consultoría y asesoramiento para los funcionarios públicos y así resolver los dilemas éticos en el trabajo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | SI |
| 11. Sensibilizar y capacitar sostenidamente a funcionarios y servidores públicos en los temas relacionados con ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. |  | **x** |  | **Informativo:** Dentro de las facultades de todo rector se encuentra la de brindar asistencia técnica respecto de la implementación y manejo de la materia objeto de rectoría, a traves del fortalecimiento de capacidades y habilidades, entre otras acciones. Por ende, pueden formularse estrategias de difusión conjunta (SIP-SERVIR) a fin que las entidades incluyan dentro de su Plan de Desarrollo de Personal contenidos programáticos, para talleres, cursos, etc, que podrán impartirse a los los funcionarios y servidores en los temas relacionados con ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. | Respecto de la presente propuesta, es importante destacar que su sustento se ha tomado de: - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, sostiene que además de desarrollar las capacitaciones específicas de iniciación, el Perú podría ampliar el contenido y alcance de los contenidos de las capacitaciones, como, por ejemplo, capacitar a empleados en posiciones de riesgo, ofrecer cursos de ética especializados y capacitación para los administradores. - El Informe Final de la Comisión Presidencial de Integridad, propone como una de las medidas referidas a “Fortalecer la Integridad y la Ética en el Sector Público”, la de “desarrollar programas de capacitación permanente sobre los principios, deberes y prohibiciones establecidas en el Código de Ética de la Función Pública y en los códigos de conducta aprobados por cada entidad. - El Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, señaló la necesidad de contar con una entidad con competencia técnica normativa encargada de guiar, orientar y capacitar correctamente a los servidores civiles en temas concernientes a la ética pública. | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | SI |
| 12. Entrenar a titulares y altos funcionarios de las entidades para ejercer el liderazgo ético en las mismas y para manejar situaciones de crisis que afectan la integridad pública. | **x** |  |  | **Informativo:** Dentro de las facultades de todo rector se encuentra la de brindar asistencia técnica respecto de la implementación y manejo de la materia objeto de rectoría, a traves del fortalecimiento de capacidades y habilidades, entre otras acciones. Por ende, pueden formularse estrategias de difusión conjunta (SIP-SERVIR) a fin que las entidades incluyan dentro de su Plan de Desarrollo de Personal contenidos programáticos, para talleres, cursos, etc, que podrán impartirse a los Altos funcionarios en los temas relacionados con ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. | Sobre el sustento de la presente medida, es importante destacar qe se ha tomado de: - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, sustenta la presente propuesta de solución, ya que recomienda proporcionar orientación sobre ética y conflicto de intereses, elaborando orientaciones específicas para las categorías de funcionarios públicos en situación de riesgo, tales como los altos funcionarios. | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | SI |
| **2.3 Tolerancia media/alta e inacción de la sociedad frente a la corrupción** | 13. Difundir programas educativos en la televisión, radio y redes sociales que propugne el fortalecimiento de valores en la ciudadanía. |  |  | **x** | **Informativo:** Se ha considerado para implementar esta alternativa, la formulación de una programación de acciones y actividades, tendientes a difundir los valores ciudadanos, así como las ventajas de observarlos en las relaciones sociales cotidianas. | En relación a la presente alternativa de intervención, se ha tomado como evidencia para su sustento l siguiente: - El **Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción**, ha previsto como una de sus recomendaciones incluida en el punto 3.1 “Política Estatal”, fomentar y promover los valores en la ciudadanía, a través de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. - Asimismo, se tiene que el I**nforme Final de la Comisión Presidencial de Integridad**, propone dentro de la medida referida a la creación de un “Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo”, que una de las funciones o cometidos del sistema justamente sea la de apoyar la promoción de una cultura de integridad en la sociedad, que use como canal los medios de comunicación social, entre otros. | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | SI |
| 14. Reformular la política educativa, para establecer la obligatoriedad del curso de educación cívica y valores éticos en los colegios de primaria y secundaria. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Para la implementación de la alternativa se reuiere de la emisión de un instrumento normativo que señale la forma de inclusión en los colegios de primaria y secundaria, del curso educación cívica y valores éticos; lo que progresivamente se ha venido trabajando, de acuerdo a lo señalado en los documentos que han proporcionado la evidencia para el sustento. | El sustento de esta intervención se evidencia en lo siguiente: - La Sesión No. 33 de la CAN en el año 2019, se suscribió el “Compromiso por la Educación con Integridad”, que consiste en: promover una cultura de integridad desde la etapa escolar y desarrollar acciones concretas que contribuyan a formar ciudadanos y ciudadanas en valores, conscientes de sus derechos y deberes. - el Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, justamente se tiene lo referido a la promoción de una cultura de valores, respecto de lo cual es necesario concretar la implementación de mecanismos de promoción de principios éticos y valores ciudadanos en colegios, institutos y universidades. | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | SI |
| 15. Promover la vigilancia social y participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. |  | **x** |  | **Informativo:** Para esta Alternativa de Solución, el medio de implmentación podría circunscribirse a la programación de actividades estratégicas y operativas, tendientes a la organización de eventos con organizaciones de la sociedad civil,a través de los cuales se difunda la importancia, ventajas y beneficios del control y vigilancia social sobre la gestión de los público. | Los insumos tmados para la formulación de esta alternativa de solución son:  - Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente, que señala considerar seguir promoviendo los Portales de Transparencia Estándar como un medio para permitir el escrutinio público sobre interacciones entre funcionarios públicos, grupos de interés y particulares.  - En el "Compromiso de Lima”, en el que se acordó “facilitar la labor de los observatorios ciudadanos u otros mecanismos de control social, incentivando la adopción de mecanismos de participación electrónica”; así como “Continuar fortaleciendo sistemas o medidas nacionales anticorrupción y mejoramiento de las condiciones para la efectiva participación de la sociedad civil, organizaciones sociales en el seguimiento de la gestión gubernamental, incentivando además mecanismos de participación electrónica”. - El Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción, ha previsto como una de sus recomendaciones incluida en el punto 3.11 “Sector Privado y Sociedad Civil”, que a través de Comités de Vigilancia se ejerza la participación ciudadana o veedurías ciudadanas en los procesos de contrataciones públicos que los impacten. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | SI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Causa Directa 3: Deficiente capacidad sancionadora del Estado** | | | | | | | | | | | | |
| **Causa Indirecta** | **Alternativa** | **Tipo de Intervención** | | | **Instrumentos de Implmentación (Guía de Políticas del CEPLAN - Pág. 32)** | **Evidencia (Para la construcción de las altenativas de intervención, se trabajó con conceptos e insumos que han sido legitimados por el Estado, la opinión pública, y en definitiva concordados con las aspiraciones de las personas. El detalle de las evidencias y sustentos puede verse en las páginas 18 a la 33 del archivo word)** | **Viabilidad** | | | **Efectividad** | **Total** | **Seleccionada** |
| **Nueva Propuesta** | **Propuesta Mejorada** | **Combinación de modificación de intervenciones existentes y nuevas propuestas** | **Polít.** | **Soc.** | **Adm.** |
| **3.1 Limitada capacidad del Estado para promover y brindar mecanismos eficientes de denuncia a la ciudadanía.** | 16. Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias y protección del denunciante, por hechos de corrupción. |  |  | **x** | **Regulatorio:** para la implementación de esta alternativa se apunta al mejoramiento y optimización del marco normativo vigente, teniendo especial atención en aquellas disposiciones referidas a la protección del denunciante y que las entidades públicas deben garantizar que se cumplan. | Los insumos tmados para la formulación de esta alternativa de solución son:  - El Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad, que señala que i) se busca establecer la obligación de las entidades públicas de contar con mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios; ii) asimismo, implementar modelos de canalización de denuncias que permita al ciudadano el acceso rápido así como el monitoreo efectivo y la solución de sus reclamos o denuncias; iii) establecer medidas de protección efectiva al denunciante, al testigo y a la persona involucrada en actos de corrupción que colabore en la investigación.  - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú también ha apuntado al fortalecimiento de los mecanismos para la gestión de denuncias con especial énfasis a la protección del denunciante - Del Compromiso de Lima, como una instancia de consenso referida a la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, se tiene que entre los compromisos asumidos, se encuentra los referidos a la protección de denunciantes y que consisten en: i) establecer mecanismos de prevención, canales de denuncia de posibles actos de corrupción, ii) proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias. | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | SI |
| 17. Promover la denuncia ciudadana de actos de corrupción. |  | **x** |  | **Informativo:** Para la implementación de la presente medida, se formula una campaña comunicacional transversal, en la que el rector establezca los aspectos y beneficios primoridiales a comunicar y a difundir, con el objeto de transmitir la importancia social que implica el denunciar hechos de corrupción. | La evidencia de la presente medida, se ha tomado de los siguientes documentos: - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, se señala que debe aumentarse la conciencia ciudadana para promover la integridad y detectar conductas indebidas. Asimismo, la OCDE indica en su Informe que las campañas periódicas de concientización que se adaptan específicamente a cada contexto son fundamentales para mejorar la percepción pública de los denunciantes, en ese sentido, las campañas de concientización son más eficaces para establecer percepciones positivas de los denunciantes. | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | SI |
| 18. Crear programa de recompensas de incentivos monetarios a denunciantes de actos de corrupción. |  | **x** |  | **Económico:** Esta alternativa de acción, se implementa a través de la creación de un programa presupuestal, para el incentivo económico de la actividad de denunciar. | El sustento para esta propuesta de intervención, se tiene lo siguiente: - El Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, ha contemplado como un reto pendiente, la necesidad de desarrollar una estrategia eficaz que permita el fortalecimiento de los incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público. - El Informe final de la Comisión Presidencial de Integridad en el marco del eje III. “Fortalecer la integridad y la ética en el sector público”, acordó crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector público, que proporcionen información útil y no conocida por las autoridades. | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | SI |
| **3.2 Limitada capacidad de sanción en el ámbito administrativo** | 19. Unificar los regímenes disciplinarios, a efectos de uniformizar los procedimientos, sanciones, y la predictibilidad de criterios. |  | **x** |  | **Regulatorio:** Para la implementación de esta alternativa de solución, se plantea retomar la coordinación del grupo de trabajo integrado por la Secretaría de Integridad Pública, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a fin de formular la propuesta respectiva y poder disponer de un sistema disciplinario sancionador único, con la correspondiente delimitación de las jurisdicciones y responsabilidades institucionales, y el establecimiento de un catálogo único de infracciones y sanciones. | La evidencia de la presente alternativa de solución medida, se ha generado de los siguientes documentos: - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, señala que la multiplicidad de regímenes laborales que conviven en el Estado, genera una serie de limitaciones para el desarrollo de la carrera pública y un trato igualitario a los servidores civiles, lo cual incluye la importante debilidad en la uniformización de los procedimientos, sanciones y la predictibilidad de criterios, en casos vinculados a la corrupción.  - El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción vigente, se advirtió la existencia de sistemas de responsabilidad administrativa (procedimientos, faltas administrativas y sanciones) cuyo funcionamiento es paralelo, redundando así en una falta de uniformidad en los criterios para castigar determinadas conductas limitando los estándares de predictibilidad del sistema y las posibilidades de sanción efectiva. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
| 20. Asegurar la autonomía técnica y funcional, y capacidad operativa de los órganos responsables de conducir la investigación y sanción de las faltas administrativas |  | **x** |  | **Regulatorio:** El aseguramiento de la autonomía técnica y funcional se atenderá a través de la propuesta normativa a la que se refiere la alternativa de solución precedente. | La presente alternativa de acción, se sustenta en lo siguiente: - En el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción vigente, se había advertido de la existencia de sistemas de responsabilidad administrativa que funcionaban paralelamente y redundaba en la falta de uniformidad en los criterios para castigar determinadas conductas, limitando los estándares de predictibilidad del sistema y las posibilidades de sanción efectiva en los casos que lo ameritan. | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | SI |
| 21. Potenciar el trabajo de los Órganos de Control Institucional y de la Contraloría General de la República. |  | **x** |  | **Regulatorio:** la presente alternativa se plantea implementarse a través del fortalecimiento del marco normativo atributivo de competencias y funciones a los OCI y a la CGR, así como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes. | La evidencia que sustenta la presente propuesta de intervención, se ha tomado de los siguientes documentos: - En el Informe del entonces Fiscal de la Nación y Presidente de la CAN ; dicho Informe constituyó una iniciativa que surgió con la finalidad de replantear la PNILCC y luego de los acontecimientos por actos de corrupción que involucraron a la clase política, empresarial y Altos Funcionarios del país, en los años 2015 y 2016; así, esta iniciativa aglutinó a los miembros de la CAN y tomo como base recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales e instituciones vinculadas al tema, entre las que resaltan: i) fortalecimiento económico y logístico del Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General de la República establecida mediante Ley 29622, ii) dotación de recursos presupuestales, técnicos y humanos necesarios para el buen funcionamiento de las Procuradurías Anticorrupción y de la Contraloría General de la República a nivel nacional, iii) fortalecimiento de las oficinas de control interno de las entidades estatales, a través de la dotación de autonomía y eficiencia. Debiéndose dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control a la Contraloría General de la República. - La OCDE en su Informe de recomendaciones del año 2016, señaló la necesidad de rediseñar el papel y las operaciones del Órgano de Control Institucional, a fin que éste se concentre en asesorar y apoyar la gestión y proporcionar aseguramiento sobre los procesos de control interno. | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | SI |
| **3.3 Limitado desarrollo y alcance de los mecanismos de investigación, persecución y sanción de delitos de corrupción** | 22. Fortalecer la regulación de los mecanismos de investigación, persecución, y sanción, decomiso de bienes y cooperación y asistencia judicial internacional en materia de corrupción, así como desarrollo de competencias de los operadores del subsistema anticorrupción a nivel nacional y subnacional. |  | **x** |  | **Regulatorio:** Esta propuesta de acción se implementa a través de la emisión de lineamientos de articulación y fortalecimiento del marco normativo atributivo de competencias y funciones de los operadores del sistema.  **Informativo:** Asimismo y vista la recomendación de la OCDE, se tiene que pueden tambien formularse una estrategia conjunta de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios encargados de investigar y enjuiciar. | Como sustento de la presente alternativa de solición, se tiene: - El Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, como reto pendiente, la necesidad de contar con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Secretaría de Integridad Pública y las oficinas de integridad institucional de algunos sectores, a fin de concretar la incorporación de todos los órganos intervinientes en los procesos de investigación de delitos, por corrupción. - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, señala sobre esta alternativa de acción, la importancia de que los funcionarios encargados de investigar y enjuiciar los casos de crímenes contra la administración pública deben ser informados de los requisitos del Acuerdo Tripartito y de la Resolución del Ministerio Público como parte de su capacitación regular. Asimismo, la OCDE también recomienda que se podrían impartir regularmente actividades de formación y concientización al personal judicial y al personal de los tribunales sobre la conducta ética, junto con mecanismos de apoyo para investigar y recabar información relacionada con la corrupción; estos esfuerzos deben complementarse con el apoyo abierto y permanente de los altos cargos del gobierno y del Poder Judicial. | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | SI |
| 23. Impulsar la interoperabilidad en las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidas que permitan centralizar la información para el análisis estratégico de la corrupción. |  | **x** |  | **Regulatorio:** la presente alternativa se plantea implementara través del fortalecimiento delC43:J43 marco normativo atributivo de competencias y funciones a las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidasRegulatorio: la presente alternativa se plantea implementara través del fortalecimiento del marco normativo atributivo de competencias y funciones a las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidas | Respecto de la presente alternativa de acción, se tiene que la evidencia ha sido tomada de: - Dentro del acápite 3.3 “Administración de Justicia” y a fin de dotar de las condiciones para afrontar los casos de corrupción de funcionarios, especificamente en la propuesta No. 20 y 24, el **Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción**, ha previsto la “Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia” y la “implementación de mecanismos de interoperabilidad entre las instituciones públicas para dotar de eficacia a las investigaciones penales y procesos penales referidas a delitos contra la Administración Pública”, respectivamente. - El Informe de Adjuntía N° 01-2020-DP-ALCCTEE “Interoperabilidad en el sistema de justicia penal: Hallazgos y Recomendaciones para fortalecer su implementación a favor de la lucha contra la corrupción”, la Defensoría del Pueblo advirtió que estas no cuentan con convenios marco de interoperabilidad implementados ni en proceso de implementación. - En el marco del mencionado estudio, **la Defensoría del Pueblo** encontró que cada entidad tiene su propio sistema y registro, lo que impide la tramitación de un expediente único.  - El Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, presenta como un reto pendiente la institucionalización de espacios de articulación entre los principales órganos participantes en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción, a fin de contar con una actuación conjunta y oportuna en casos especiales vinculados a corrupción, dentro de lo que puede inferirse que figura la gestión de la información interoperable de las entidades vinculadas a la cadena de valor de anticorrupción. | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | SI |
| 24. Fortalecer la capacidad operativa de las entidades vinculadas con la investigación y sanción de casos de corrupción. |  | **x** |  | **Regulatorio:** En atención al contexto descrito en la evidencia de la alternativa de solución, se propone implmentarla, a través de la aprobación del Proyectos de Ley, como el Nº 3165/2018-PE, que propone crear la Fiscalía Suprema Anticorrupción y el Sistema Fiscal Especializado en delitos contra la administración pública. | En relación a la presente alternativa de solución, se tiene su sustento en lo siguiente: - La capacidad operativa en la investigación y sanción de los casos de corrupción implica considerar a varias instituciones autónomas, conforme se les reconoce en la constitución, así el Poder Judicial encargado de condenar o absolver a los acusados por delitos de corrupción (sancionar), desde el año 2016 tiene sub sistema de órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, por el D.S. Nº 010-2017-EF se asignó al Poder Judicial aproximadamente 9,646,768.00 mil soles aproximadamente para la creación de nueve órganos jurisdiccionales especializados con competencia nacional y la implementación de una coordinación.  - El Poder Judicial como organización tiene una capacidad operativa reducida para los casos de corrupción, que en general son de dos tipos los complejos (asumidos por la Corte Superior Especializada) y los no tan complejos (asumidos por las Cortes a nivel de distrito judicial a nivel nacional), no existe hasta la fecha una cifra concrete que permita evidenciar la magnitud de la demanda para impulsar su capacidad operativa, entendida esta como la cantidad de órganos suficientes para resolver toda la carga de los casos de corrupción.  - El fortalecimiento de la capacidad operativa busca que los principales encargados de la investigación y la sanción tengan los recursos humanos y monetarios, así como la infraestructura y la logística necesaria para responder a la expectativa de la capacidad de sanción del Estado en los casos de corrupción. - Las otras dos instituciones vinculadas con la investigación de los casos de corrupción son el Ministerio Público que tiene la dirección y responsabilidad de formular la acusación como resultado de una buena investigación, asimismo, su órgano de apoyo la Policía Nacional del Perú, a nivel de investigación ellos están encargados de elaborar los informes de las denuncias provenientes de los casos de corrupción. Ambas instituciones, deben trabajar en conjunto, sus problemas en cuanto a la capacidad operativa están vinculados la necesidad de contar con infraestructura adecuada, personal altamente capacitado, tanto de fiscales y personal de apoyo, de igual manera en la policía. | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | SI |
| **3.4 Escasa coordinación operativa entre entidades vinculadas a la cadena de valor anticorrupción** | 25. Implementar y/o fortalecer mecanismos de articulación permanente para la optimización de investigaciones penales de casos de redes de corrupción. |  | **x** |  | **Regulatorio:** La puesta en marcha de esta alternativa de solución, pasa porque las buenas prácticas detalladas en en la evidencia, deben ser institucionalizadas y adaptadas de manera permanente y sostenida, para ello es necesario evaluar una actualización de dichos mecanismo. | Sobre esta alternativa de solución, se presenta el siguiente sustento: - La alternativa de solución que propone la implementación y/o fortalecimiento de mecanismos de articulación, permanente y conjunta para optimizar las investigaciones penales en casos de corrupción permitirá paliar otros de los grandes problemas de ineficacia de la capacidad sancionadora en el sistema de justicia penal. - A la fecha hubo varios intentos de mejorar la articulación entre las entidades encargadas de la persecución penal, así el 17 de julio de 2012, se firmó un Convenio Tripartito los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Contraloría General de la República, cuyo objeto fue implementar la actuación conjunta, eficaz y eficiente en casos de corrupción de funcionarios, especialmente para los casos graves, complejos y de repercusión nacional, el Convenio tuvo como base otro Convenio Marco Tripartito de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial, del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | SI |
| 22. Fortalecer la regulación de los mecanismos de investigación, persecución, y sanción, decomiso de bienes y cooperación y asistencia judicial internacional en materia de corrupción, así como desarrollo de competencias de los operadores del subsistema anticorrupción a nivel nacional y subnacional. |  |  | **x** | **Regulatorio:** Esta propuesta de acción se implementa a través de la emisión de lineamientos de articulación y fortalecimiento del marco normativo atributivo de competencias y funciones de los operadores del sistema.  **Informativo:** Asimismo y vista la recomendación de la OCDE, se tiene que pueden tambien formularse una estrategia conjunta de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios encargados de investigar y enjuiciar. | Como sustento de la presente alternativa de solición, se tiene: - El Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, como reto pendiente, la necesidad de contar con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Secretaría de Integridad Pública y las oficinas de integridad institucional de algunos sectores, a fin de concretar la incorporación de todos los órganos intervinientes en los procesos de investigación de delitos, por corrupción. - El Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, señala sobre esta alternativa de acción, la importancia de que los funcionarios encargados de investigar y enjuiciar los casos de crímenes contra la administración pública deben ser informados de los requisitos del Acuerdo Tripartito y de la Resolución del Ministerio Público como parte de su capacitación regular. Asimismo, la OCDE también recomienda que se podrían impartir regularmente actividades de formación y concientización al personal judicial y al personal de los tribunales sobre la conducta ética, junto con mecanismos de apoyo para investigar y recabar información relacionada con la corrupción; estos esfuerzos deben complementarse con el apoyo abierto y permanente de los altos cargos del gobierno y del Poder Judicial. | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | SI |
| 23. Impulsar la interoperabilidad en las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidas que permitan centralizar la información para el análisis estratégico de la corrupción. |  | **x** |  | Regulatorio: la presente alternativa se plantea implementara través del fortalecimiento delC43:J43 marco normativo atributivo de competencias y funciones a las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidasRegulatorio: la presente alternativa se plantea implementara través del fortalecimiento del marco normativo atributivo de competencias y funciones a las entidades vinculadas con la cadena de valor anticorrupción, implementando sistemas articulados, protocolos comunes y bases de datos compartidas | Respecto de la presente alternativa de acción, se tiene que la evidencia ha sido tomada de: - Dentro del acápite 3.3 “Administración de Justicia” y a fin de dotar de las condiciones para afrontar los casos de corrupción de funcionarios, especificamente en la propuesta No. 20 y 24, el **Informe contentivo de las 100 medidas para la Lucha contra la Corrupción**, ha previsto la “Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia” y la “implementación de mecanismos de interoperabilidad entre las instituciones públicas para dotar de eficacia a las investigaciones penales y procesos penales referidas a delitos contra la Administración Pública”, respectivamente. - El Informe de Adjuntía N° 01-2020-DP-ALCCTEE “Interoperabilidad en el sistema de justicia penal: Hallazgos y Recomendaciones para fortalecer su implementación a favor de la lucha contra la corrupción”, la Defensoría del Pueblo advirtió que estas no cuentan con convenios marco de interoperabilidad implementados ni en proceso de implementación. - En el marco del mencionado estudio, **la Defensoría del Pueblo** encontró que cada entidad tiene su propio sistema y registro, lo que impide la tramitación de un expediente único.  - El Informe de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, presenta como un reto pendiente la institucionalización de espacios de articulación entre los principales órganos participantes en los procesos de investigación penal por delitos de corrupción, a fin de contar con una actuación conjunta y oportuna en casos especiales vinculados a corrupción, dentro de lo que puede inferirse que figura la gestión de la información interoperable de las entidades vinculadas a la cadena de valor de anticorrupción. | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | SI |

1. Se adjunta como **Anexo1** el sustento de la proyección de cada medición del problema público y, por ende, de las metas planteadas para cada una, al año 2030. [↑](#footnote-ref-1)
2. En este aparte se explican aquellas oportunidades y riesgos que constituyen los de mayor probabilidad de ocurrencia y mayor nivel de impacto; para el caso de los riesgos se presentan aquellos cuya suma de puntajes resulta mayor a 6, y respecto de las oportunidades se analizan aquellas cuya suma de puntajes resulta mayor a 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Es importante destacar en primer orden, que se ha realizado el mencionado análisis a partir de las tendencias y escenarios formulados por el CEPLAN *(Futuro Deseado. Información sobre Tendencias, Riesgos, Oportunidades y Escenarios.)*, y en segundo lugar, que la referida entidad ha incluido, tanto en las tendencias como en los escenarios enunciados, los resultados obtenidos de la consulta técnica virtual “Impacto de la COVID-19 en las tendencias nacionales”, a través de la cual se pudo estimar el comportamiento futuro de aquellos, debido a las consecuencias e implicancias de la pandemia global generada por la COVID-19. [↑](#footnote-ref-3)
4. CEPLAN. (2020). Riesgos y oportunidades globales para el Perú 2020-2030. 2da edición. Recuperado de <https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/riesgos-y-oportunidades-globales-para-el-peru-2020-2030-2da-edicion/> [↑](#footnote-ref-4)
5. CEPLAN. (2020). Perú 2050: tendencias nacionales con impacto de la COVID-19. Recuperado de https://www.ceplan.gob.pe/documentos\_/peru-2050-tendencias-nacionales-con-impacto-de-la-covid-19/ [↑](#footnote-ref-5)
6. CEPLAN. (2021). Perú 2050: Escenarios alternativos de largo plazo. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/2251860-peru-2050-escenarios-alternativos-de-largo-plazo>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Guía de Políticas Nacionales. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico: Lima. Recuperado de: https://www.ceplan.gob.pe/guia-de-politicas-nacionales/ [↑](#footnote-ref-7)
8. ASF (2015), Estudio técnico para la promoción de la cultura de integridad en el sector público, ww.asf.gob.mx/uploads/180\_Estudios/1173\_Estudio\_Tec\_para\_la\_Promocion\_de\_la\_Cultura\_de\_Integridad\_en\_el\_Sec\_Pub.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. OCDE 2019. LAS OFICINAS DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERÚ. Hacía la Implementación de un Sistema de Integridad. [↑](#footnote-ref-9)
10. Velarde P. (2017). 100 Acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción [↑](#footnote-ref-10)
11. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Velarde P. (2017). 100 acciones propuestas por el Fiscal de la Nación para forjar un país sin corrupción [↑](#footnote-ref-12)
13. Dicha medida se refiere al Gobierno Electrónico, no obstante, debe resaltarse que en el momento en que se elaboró dicho informe, el mencionado término constituía el marco dentro del cual se preveía la interoperabilidad de la información. En la actualidad, el marco general dentro del cual cae la gestión de la información interoperable es el de “Gobierno y Transformación Digital”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Se refiere a la ONGEI; Oficina Nacional que fue convertida en el 2017 en “Secretaría de Gobierno Digital – SGD”, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. [↑](#footnote-ref-14)
15. (Shack, Pérez & Portugal, 2020) Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L., (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú. [↑](#footnote-ref-15)
16. Quiroz, Alfonso W. Historia de la corrupción en el Perú. Lima, IEP; Instituto de Defensa Legal, 2013. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. [↑](#footnote-ref-17)
18. Para efectos de la actualización de la presente Política y para la construcción de las alternativas de intervención se ha sustituido por el Informe de Seguimiento y Monitoreo del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021. Asimismo, se ha incluido también el documento “Compromiso de Lima”, resultante del consenso referida a la “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”, celebrada el 14 de abril de 2018 en la ciudad de Lima y a través del cual se adoptaron 57 compromisos y acciones concretas a realizar en áreas definidas de la sociedad. [↑](#footnote-ref-18)
19. Se formularon un total de 155 acciones e intervenciones respecto del eje de Prevención. [↑](#footnote-ref-19)
20. Se formularon un total de 68 acciones e intervenciones respecto del eje de Riesgos. [↑](#footnote-ref-20)
21. Se formularon un total de 100 acciones e intervenciones respecto del eje de Sanción. [↑](#footnote-ref-21)
22. ## Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito / *Servicio de Información de las Naciones Unidas.* (18 de diciembre de 2019). Corrupción y género. <https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2019/corrupcin-y-gnero.html>

    [↑](#footnote-ref-22)
23. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. CIDH.OEA.2019 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dicho indicador se encuentra comprendido dentro del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. [↑](#footnote-ref-24)
25. Como se mencionara, el Índice de Competitividad Global publicado desde 1979 por el Foro Económico Mundial. Está compuesto por 110 variables, que están organizadas en doce pilares, donde cada uno de ellos representa un área considerada como un determinante de importancia de la competitividad, tales como: Instituciones, Infraestructura apropiada, Marco macroeconómico estable, Buen sistema de salud y educación primaria, Educación superior y entrenamiento laboral, Mercados de bienes eficientes, Mercados laborales eficientes, Mercados financieros desarrollados, Habilidad para manejar la tecnología existente, Tamaño del mercado *—*doméstico e internacional, Producción de nuevos y diferentes bienes usando los más sofisticados procesos de producción e Innovación [↑](#footnote-ref-25)
26. Este índice explica a la democracia por cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Cada indicador tiene un puntaje independiente dentro del rango de 0 a 10. [↑](#footnote-ref-26)
27. En su Informe “Riesgo de Corrupción en el Sector Minero: Informe Perú” [↑](#footnote-ref-27)
28. Se han registrado más de 600 estudios mundiales y sectoriales con perspectiva a largo plazo (al menos diez años) publicados en los últimos tiempos y se examinaron las principales tendencias a largo plazo, llegando a coincidencias entre ellas. **“*Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina”.* CEPAL - Serie Gestión Pública N° 78.** [↑](#footnote-ref-28)
29. CEPLAN. (2021). Perú 2050: Escenarios alternativos de largo plazo. Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2301850/CEPLAN%20-%20Per%C3%BA%20escenarios%20alternativos%20de%20largo%20plazo.pdf> [↑](#footnote-ref-29)
30. Santiso, C. (2019). *“3 Formas de usar la tecnología para evitar la corrupción”.* Artículo publicado por CAF, en https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/02/3-formas-de-usar-la-tecnologia-para-evitar-la-corrupcion/ [↑](#footnote-ref-30)
31. Ver artículo citado en la nota al pie número 7 [↑](#footnote-ref-31)